

Los ciudadanos de Zimbabue reclamaron una reforma de la comisión electoral en vísperas de las elecciones generales de julio.

Crédito: Wilfred Kajese/Anadolu Agency/Getty Images

# SECCIÓN 3

---

## EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA EN 2018

# EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA EN 2018

Nuestro informe de 2018, **‘Democracia para todas las personas: más allá de la crisis de imaginación’**, exploró las tensiones y los desafíos actuales en materia de libertades democráticas e identificó las claras expectativas de los ciudadanos de más y mejor democracia – una democracia en la que su opinión cuente a la hora de tomar las decisiones que afectan sus vidas. 2018 ofreció abundantes evidencias de que las restricciones que pesan sobre las libertades democráticas son numerosas y sustanciales, pero también de que la gente está preparada para levantarse y exigir sus derechos democráticos y forjar nuevas y mejores formas de hacer política.

2018 fue un año de numerosas luchas para afirmar y acceder a las libertades democráticas. En algunos países, el valor del poder popular quedó demostrado cuando protestas masivas produjeron situaciones repentinas y sorprendentes en las cuales líderes políticos de larga data fueron desafiados, y en ocasiones derrocados. Si bien las circunstancias y las dinámicas variaron de un país a otro, a menudo las revueltas fueron provocadas por la indignación pública ante maniobras políticas interesadas y por la corrupción en gran escala. El poder popular quedó colocado en primer plano en Armenia, donde los intentos de un gobernante impopular por mantenerse en el cargo resultaron espectacularmente contraproducentes, ya que llevaron a la gente a las calles y forzaron un cambio que podría llegar a marcar una ruptura decisiva con el pasado. Los votantes mexicanos, hartos de la incapacidad de los políticos tradicionales para combatir el crimen, la violencia, la pobreza, la desigualdad y la corrupción, escogieron a un *outsider* político como su nuevo presidente. En Etiopía, un cambio en la cumbre emitió señales de un deshielo en la actitud represiva del estado hacia la sociedad civil, abriendo paso a un cauto optimismo. En Malasia, el partido que había gobernado durante seis décadas fue finalmente expulsado

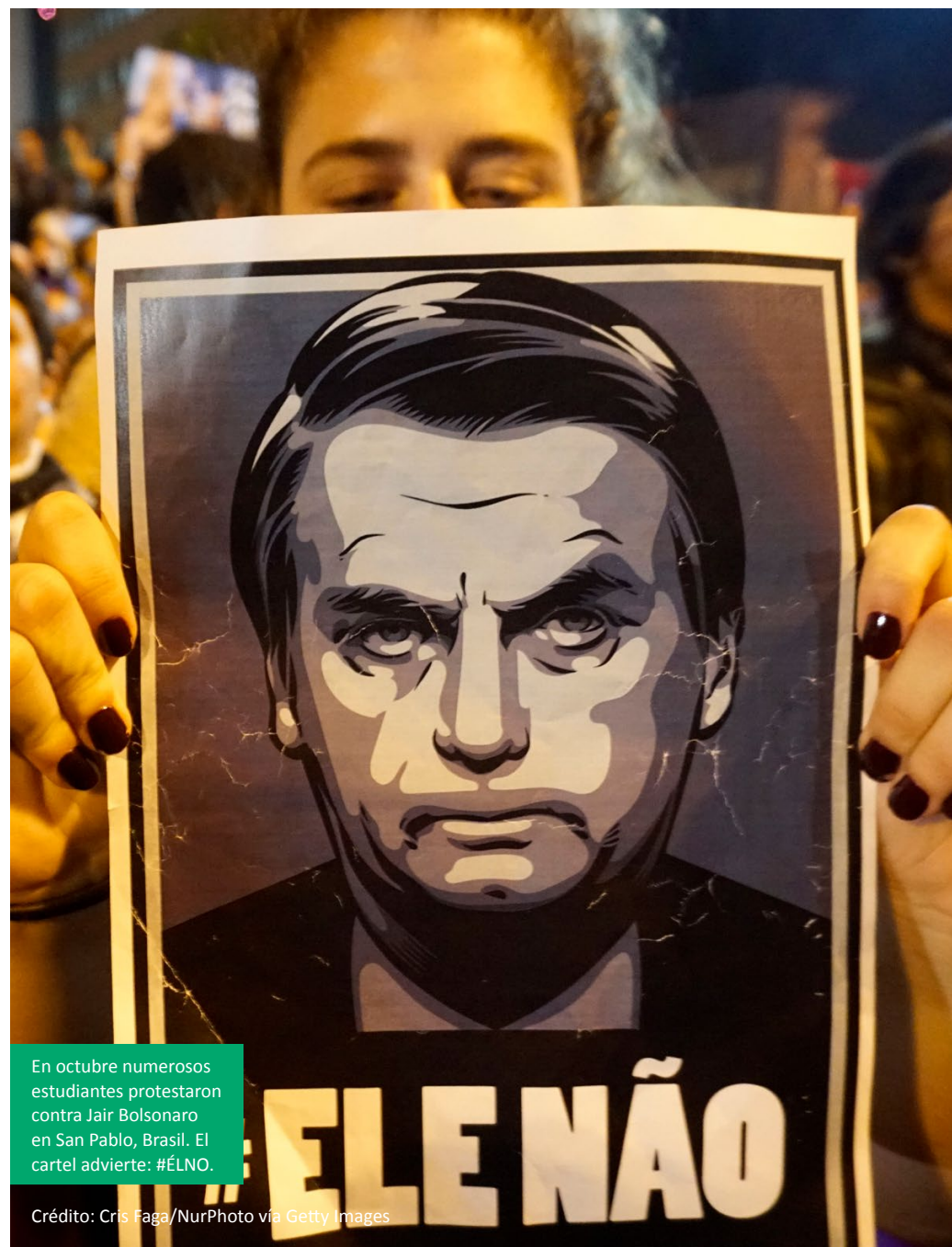
del poder, aunque el régimen entrante pronto comenzó a parecerse al saliente en muchos aspectos, lo cual sugirió que no estaba a la altura de las aspiraciones de reforma de la ciudadanía y ofreció el recordatorio de que el cambio real y duradero no puede resultar de la mera rotación de élites. Se requiere del empuje de la sociedad civil de base para obtener algo más que un cambio en la cúspide del poder. En todos estos países, la sociedad civil ahora está tratando de seguir desempeñando el rol de trabajar para expandir los espacios disponibles, promover los derechos fundamentales y las libertades democráticas, y sujetar a los recién llegados al poder a elevados estándares de rendición de cuentas.

Los referendos pueden encarnar la democracia en su máxima expresión, dando a las personas la oportunidad de emitir una opinión directa sobre algún tema fundamental. Pero también pueden producir división, causar más problemas de los que resuelven, o funcionar como herramientas al servicio de los intereses de las élites políticas. El año 2018 ofreció ejemplos de cada una de las alternativas. En Irlanda, los referendos sobre el aborto y la blasfemia formaron parte de un proceso de cambio social radical liderado por la ciudadanía e integrado en un marco de democracia deliberativa. En los Países Bajos, un referéndum propinó un golpe al establishment político y éste se movió rápidamente para evitar futuros encontronazos, privando a los ciudadanos de este poder. El referéndum por el cambio de nombre de Macedonia del Norte también transmitió al establishment político un mensaje que éste se negaba a escuchar, e hizo poco por crear armonía alrededor de un tema que divide a la sociedad. Burundi ofreció el más reciente ejemplo de una triste sucesión de votaciones que no han sido ni libres ni competitivas, impuestas de arriba hacia abajo por los presidentes para redactar constituciones a medida. Ecuador, en cambio, fue en una



dirección inusual, reimponiendo límites al mandato presidencial por voto popular. Alrededor de todas estas votaciones, la sociedad civil fue tan activa como las circunstancias lo permitieron, abogó por avances en materia de derechos y trabajó para garantizar el respeto de los derechos en el marco de los procesos electorales.

**Ediciones** anteriores de este **informe**, así como nuestro informe sobre el estado de la democracia publicado en 2018, han dado cuenta de la creciente atracción, en países diversos, que ejercen políticos populistas de derecha que fomentan la división social, alientan el odio y atacan a grupos excluidos, ofreciendo respuestas engañosamente simples para enfrentar problemas complejos. Estos líderes se alimentan de la indignación pública ante los fracasos de la política y la economía del establishment y la inseguridad personal, formando coaliciones negativas, unidas más por lo que rechazan que por lo que apoyan, y a menudo basadas en narrativas identitarias que movilizan a las personas en torno a pertenencias étnicas o religiosas y miran al pasado en vez de a los posibles futuros. Siembran fragmentación política, división y polarización. Esa tendencia continuó sin tregua durante 2018, cuando se observó una nueva ola de apoyo a políticos populistas de derecha en un grupo de países de Europa Central. Partidos populistas tomaron las riendas en Italia y el líder de línea dura Viktor Orbán redobló su control sobre Hungría. En otros contextos, si bien no han pasado a formar parte del gobierno, los partidos populistas de derecha han logrado desplazar el discurso político y arrastrar a los partidos mayoritarios hacia sus posiciones. Esta tendencia no se limitó a Europa, ya que Brasil, el país más grande de América Latina, también dio un fuerte giro hacia la derecha al elegir presidente a Jair Bolsonaro, encaramado en una plataforma declaradamente opuesta a los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI, los pueblos indígenas y la sociedad civil. Como lo sugiere el ejemplo de Brasil, estas tendencias son peligrosas para los derechos humanos y para la sociedad civil progresista promotora de derechos, que a menudo es objeto de ataques procedentes de las fuerzas populistas de derecha. Los ataques a menudo provienen de grupos anti-derechos, crecientemente envalentonados y bien financiados,



En octubre numerosos estudiantes protestaron contra Jair Bolsonaro en San Pablo, Brasil. El cartel advierte: #ÉLNO.

Crédito: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images

y cada vez más instalados en el terreno de la sociedad civil. Estas tendencias requieren una respuesta de la sociedad civil que conecte con la ira de los ciudadanos y ofrezca alternativas constructivas para unir a las personas en una coalición estructurada en torno de narrativas de cambio positivas y con visión de futuro. Demandan una respuesta que recupere el campo de la sociedad civil como un espacio progresista orientado hacia los derechos.

Pero si el año ofreció algunos ejemplos inspiradores de poder popular y recuperación de libertades democráticas, así como algunos casos más inquietantes de avance del populismo de derecha sobre el espacio político, con demasiada frecuencia también presentó instancias de represión o denegación de las libertades democráticas en torno de las elecciones. Con demasiada frecuencia, las elecciones no fueron fiestas de la democracia en las cuales la participación democrática y el disenso alcanzaron su nivel más elevado, sino momentos en que la participación y el disenso fueron reprimidos. Demasiadas veces durante 2018 las elecciones fueron utilizadas por presidentes y partidos gobernantes como poco más que un medio para obtener la renovación de sus mandatos y darse un falso barniz de legitimidad; en el peor de los casos, como en Bangladesh, Camerún, Rusia y Venezuela, las elecciones fueron sencillamente fraudulentas, sin conservar siquiera las apariencias de una elección política real. En varios contextos durante 2018, incluidos los de Egipto, Pakistán y Zimbabue, las elecciones buscaron ocultar el verdadero poder militar que se esconde tras los líderes elegidos. Incluso en casos en que las elecciones exhibieron una competencia genuina, los periodos de elección – incluidos los tiempos pre- y post-electorales-, a menudo resultaron peligrosos para los activistas de la sociedad civil y los partidarios de la oposición, como pudo observarse en la República Democrática del Congo y en una gran cantidad de países más. El desafío para la sociedad civil en todos estos contextos consiste en trabajar lo mejor posible para monitorear las elecciones, asegurar que se respeten las libertades democráticas fundamentales y abogar por que los candidatos adopten posiciones progresistas en materia de derechos.

## CAUSAS DESENCADENANTES Y PUNTOS DE INFLEXIÓN: EMBESTIDAS CONTRA EL ESTABLISHMENT

### LA REVOLUCIÓN DE TERCIOPELO EN ARMENIA: DE LA PROTESTA AL PODER

En abril **Armenia** experimentó la que rápidamente pasó a ser conocida como su “**Revolución de Terciopelo**”. El detonante lo proporcionó la instalación de Serzh Sargsyan como primer ministro tan pronto como terminaron sus dos mandatos como presidente. Durante mucho tiempo se sospechó que ocurriría este cambio, el cual fue preanunciado por un improvisado **referéndum** de 2015 que aumentó significativamente los poderes del primer ministro. Ese referéndum estuvo plagado de acusaciones de manipulación del voto, al igual que las **elecciones** de 2017, que dieron continuidad en el poder al gobernante Partido Republicano. La Revolución de Terciopelo se produjo en un contexto en que el Partido Republicano, que había dominado el gobierno durante casi dos décadas, había ido aumentando gradualmente su control sobre el estado, restringiendo las libertades democráticas y los derechos de la sociedad civil.

**Artur Sakunts**, de la **Asamblea Ciudadana Helsinki-Vanadzor**<sup>1</sup>, describe la trayectoria de un gobierno cada vez más antidemocrático, que fue alimentando la ira ciudadana:

1 Todas las entrevistas citadas en este informe son extractos editados. Las versiones completas de las entrevistas pueden encontrarse en nuestro sitio web, <https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews>.



*El 23 de abril, luego de un mes de desobediencia civil no violenta, pacífica y descentralizada y de protestas a gran escala, Serzh Sargsyan tuvo que renunciar.*

*Antes del final de su segundo mandato, por iniciativa de Serzh Sargsyan la forma de gobierno de Armenia había cambiado de un sistema semipresidencial a uno parlamentario a través de un referéndum. Sin embargo, el proceso de enmienda constitucional no fue participativo. Los borradores de las enmiendas se publicaron solo tres meses antes del referéndum, lo cual dejó poco tiempo para el debate, mientras que el referéndum tuvo lugar en un contexto de numerosas violaciones, entre ellas la falsificación de resultados.*

*En los últimos 20 años, Armenia experimentó una evidente **regresión** en los campos de la democracia y los derechos humanos. Las elecciones a nivel nacional y local no han sido libres ni competitivas. La gente ha sido perseguida por sus opiniones políticas, actividad opositora y acciones civiles. La libertad de expresión y el pluralismo fueron restringidos. Los periodistas fueron sometidos a violencia cuando hacían su trabajo. La tortura era cosa usual en las comisarías de policía, las instituciones penitenciarias y las fuerzas armadas. Las violaciones de derechos humanos tenían carácter sostenido y sistémico. Los funcionarios y representantes de las agencias de aplicación de la ley no eran responsabilizados por estas violaciones, ya que no se llevaban a cabo investigaciones efectivas.*

*Debe tenerse en cuenta el alcance de la corrupción, que expertos internacionales y locales han evaluado como una amenaza para la seguridad nacional. Los principios de igualdad ante la ley y el estado de derecho ya no funcionaban en Armenia; prevalecía la impunidad. El poder judicial estaba totalmente sujeto al poder ejecutivo, y la justicia se aplicaba selectivamente. El proceso participativo en el campo del gobierno fue tan solo una imitación de la democracia real. Dado que las autoridades habían monopolizado la economía,*

*los partidos políticos, privados de base social, se habían convertido en parte constitutiva del sistema político dirigido por el Partido Republicano.*

El intento flagrante de Serzh Sargsyan de aferrarse al poder empeoró las cosas. En marzo, el líder opositor Nikol Pashinyan comenzó una **marcha de protesta**, “Mi paso”, desde la segunda ciudad de Armenia, Gyumri, hacia la capital, Ereván. Gradualmente la marcha cobró impulso y en el trayecto fue ganando apoyos, hasta que llegó a Ereván el 13 de abril. Enormes protestas se movilizaron en las calles de Ereván en el período previo a la sesión de la Asamblea Nacional para elegir al nuevo primer ministro, y las protestas aumentaron de tamaño cada día hasta la votación del 17 de abril. Como era de esperar, dada la naturaleza cada vez más represiva del gobierno de Serzh Sargsyan, las protestas fueron **reprimidas**. El 16 de abril, cuando los manifestantes cortaron el tráfico en el centro de Ereván, la policía usó gases lacrimógenos y alrededor de 50 personas requirieron atención médica tras los violentos enfrentamientos. Varios periodistas que cubrían las protestas fueron atacados o detenidos. Sin embargo, el impulso se mantuvo y las protestas se extendieron más allá de Ereván y entre la considerable **diáspora** armenia en el extranjero.

Las protestas crecieron en número luego de que Serzh Sargsyan fuera confirmado como primer ministro. Nikol Pashinyan y Serzh Sargsyan celebraron una breve reunión el 22 de abril de la cual el nuevo primer ministro salió indemne, mientras que Nikol Pashinyan lideró una protesta y quedó **detenido** junto con otros líderes de la oposición. Ellos se contaron entre los varios cientos de personas que fueron detenidas ese día. Pero decenas de miles continuaron protestando, y el 23 de abril la protesta logró su primer objetivo: Serzh Sargsyan renunció.

Sin embargo, la cuestión de quién lo reemplazaría al frente del país seguía pendiente. El Partido Republicano **decidió** no presentar a su propio candidato, con lo cual bloqueó la elección de Nikol Pashinyan el 1 de mayo; pareció que la turbia política armenia intentaba reafirmarse. Esto provocó

una **protesta** cada vez mayor, que llegó a unas 150.000 personas en la Plaza de la República de Ereván, junto con huelgas y actos de desobediencia civil no violenta que llevaron a Armenia a un punto muerto. La ciudadanía estaba demostrando que ya no aceptaría que la ignoraran. El 8 de mayo, Nikol Pashinyan completó la transición de la protesta al poder cuando fue **elegido** como nuevo primer ministro de Armenia.

Las protestas de 2018 no salieron de la nada; se alimentaron de la insatisfacción acumulada frente a la corrupción, los problemas económicos y las manipulaciones constitucionales. Entre sus antecedentes se contaron manifestaciones de indignación pública tales como las protestas del “**Ereván eléctrico**”, desarrolladas en enero de 2015 en reacción al aumento de los precios del combustible, que condujeron a muchos jóvenes a su primer activismo, y a las que rodearon a las defectuosas **elecciones** de 2016. Esto significó que en su nueva reedición, las protestas se organizaron sobre la base del capital social y la experiencia generada por una reciente historia compartida de acción ciudadana. Es importante destacar, como lo hace

Artur, que la sociedad civil organizada, que había desempeñado un papel clave en las protestas anteriores, en 2018 estuvo lista para responder cuando llegó el momento:

*La sociedad civil y sus organizaciones dedicadas a temas tales como los derechos humanos fundamentales, la lucha contra la corrupción y las libertades de reunión y expresión, pudieron desarrollar sus capacidades y habilidades en el campo de la documentación y la publicidad de las violaciones de derechos humanos, corrupción y delitos económicos, llevando a cabo litigios estratégicos, abogando por y monitoreando el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de las autoridades.*

*Se movilizaron protestas civiles a corto plazo y movimientos sociales a largo plazo en relación con diversos temas, incluidos problemas ambientales, por ejemplo en iniciativas contra la explotación de la mina de cobre en Teghut y la construcción de una central hidroeléctrica en la parte superior de la cascada Trchkan; temas relacionados con violaciones de derechos humanos en las fuerzas armadas, incluidas iniciativas conocidas como **El ejército en la realidad** y **Mujeres de negro, Armenia**, así como en instituciones penitenciarias; y cuestiones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluida la violencia doméstica, y las personas LGBTQI, por mencionar solo algunos.*

*De elección en elección, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) hicieron misiones de observación cada vez más profesionales. Los datos obtenidos y los informes compilados recibieron la atención de las misiones internacionales de observación y fueron percibidos por ellos como imparciales, objetivos y bien fundamentados en los datos.*

*Dentro de la sociedad civil, se desarrolló la cooperación entre organizaciones a través de sindicatos, coaliciones, monitoreo conjunto e informes. La sociedad civil también participó activamente en plataformas internacionales, incluidas las ofrecidas*





*por las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Europea (UE), mediante la presentación de informes paralelos y declaraciones, y mediante la presentación de solicitudes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos.*

*Así, la Revolución de Terciopelo estuvo precedida por el trabajo activo de la sociedad civil y numerosas iniciativas ciudadanas desarrolladas en condiciones desfavorables. A pesar de estar sometida, por decirlo suavemente, a la actitud desintegradora de las autoridades, la sociedad civil aún logró presentar información objetiva al público junto con ejemplos de lucha y cooperación y oportunidades para el cambio. Mediante el involucramiento continuo de la sociedad en su actividad y a través de programas educativos, la sociedad civil contribuyó a sensibilizar a la sociedad y a alentar una postura exigente. Cabe destacar que las figuras activas en las OSC y los ciudadanos que mantienen alguna conexión con esas organizaciones y sus iniciativas se colocaron a la vanguardia del movimiento popular de 2018.*

*Durante años, las organizaciones de derechos humanos también brindaron apoyo institucional para la lucha civil que se desarrolla en Armenia, al defender a los ciudadanos involucrados en esa lucha y detenidos en comisarías o acusados en causas judiciales, y brindar asistencia legal en otros casos. En abril, ese apoyo fue más coordinado: a través de una línea telefónica conjunta, varias organizaciones de derechos humanos brindaron asesoría legal a los participantes del movimiento y llevaron a cabo actividades de respuesta rápida.*

Como lo sugiere lo anterior, durante la Revolución de Terciopelo las OSC desempeñaron un papel clave, que incluyó el monitoreo de las protestas, la difusión de información sobre las violaciones y la provisión de apoyo legal. Las OSC también buscaron movilizar el **apoyo** de la comunidad internacional y la sociedad civil internacional, llamando la atención sobre la situación en Armenia y exigiendo el respeto del derecho de reunión pacífica; al mismo tiempo, los líderes de la protesta dejaron bien claro que lo que movilizaba a los ciudadanos eran los problemas de gobernanza de Armenia, y no la disyuntiva de si Armenia debía acercarse más a la UE o a Rusia, como podían llegar a sospechar algunos observadores externos. Además, si bien gran parte de la atención de los medios se centró en el contrapunto entre los dos protagonistas masculinos, las **mujeres** participaron activamente en las protestas y subrayaron la necesidad de que todo cambio apuntara a promover los derechos de las mujeres, demanda que continuaron presentando bajo el nuevo gobierno.

“

LA REVOLUCIÓN DE  
TERCIOPELO ESTUVO  
PRECEDIDA POR EL  
TRABAJO ACTIVO  
DE LA SOCIEDAD  
CIVIL Y NUMEROSAS  
INICIATIVAS  
CIUDADANAS  
DESARROLLADAS  
EN CONDICIONES  
DESFAVORABLES.

”

Es importante destacar que la demanda de cambio expresada en abril y mayo no se disipó una vez que Nikol Pashinyan se convirtió en primer ministro. En agosto, nuevas **manifestaciones** marcaron el hito de los 100 días del primer ministro en su nuevo cargo y declararon su apoyo a sus acciones contra la corrupción y en pos de la reforma judicial y policial. Pero dado que el Partido Republicano aún contaba con mayoría en la Asamblea Nacional y bloqueaba muchas de las reformas, entre ellas los **cambios** en el código electoral, pronto se instaló la frustración. En octubre, miles de personas **protestaron** después de que la Asamblea Nacional se negara a celebrar las elecciones anticipadas que exigía Nikol Pashinyan, en busca de una legislatura que reflejara mejor los cambios producidos en la realidad política de Armenia. Más tarde en ese mismo mes Nikol Pashinyan renunció, y dado que la Asamblea Nacional no seleccionó un reemplazo, logró forzar una nueva elección. Esta se llevó a cabo en diciembre, en un contexto inusualmente libres y competitivo, y la alianza Mi Paso fue la ganadora **absoluta**, en tanto que el Partido Republicano fue aniquilado, ya que por primera vez en toda su historia no logró obtener ni un solo escaño.

Claramente, el primer ministro Pashinyan recibió un mandato de cambio que ahora se espera que cumpla. En un gesto positivo para la sociedad civil, durante una reunión con los medios de comunicación en diciembre **se comprometió** a defender la libertad de expresión. Al mismo tiempo, los partidarios del antiguo régimen **continúan** ocupando cargos importantes y las instituciones tienen una inercia considerable, por lo cual resistirán los intentos de reforma. La sociedad civil sigue impulsando el cambio y expresa la voluntad de seguir involucrada tanto a través de la construcción de relaciones y la labor de incidencia con el nuevo gobierno, como saliendo a la calle en caso necesario. El principal aspecto positivo es que la ciudadanía armenia ha desarrollado un nuevo sentido de su propio poder y ha dimensionado lo que es posible lograr a través de la acción ciudadana. Artur resume la labor que la sociedad civil está realizando actualmente para aprovechar el impulso de la Revolución de Terciopelo:

*Actualmente, las OSC están desarrollando un concepto de justicia transicional que presentarán a las autoridades para su implementación. El objetivo del concepto es restablecer los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el anterior régimen autoritario, incluidas las víctimas de persecuciones políticas y los presos políticos y los damnificados por la corrupción sistemática y la impunidad. En particular, este enfoque apunta a determinar las consecuencias legales de las violaciones masivas que ocurrieron durante las elecciones nacionales y los referendos, así como los delitos de corrupción que han resultado en violaciones de derechos humanos y han causado daños sustanciales e irreversibles al medio ambiente y la economía, lo que ha conllevado un crecimiento de la pobreza. Estas actividades de la sociedad civil y las que desarrolla en todos los demás campos tienen el objetivo de restaurar la confianza pública en la justicia.*

*Tras la Revolución de Terciopelo se ha generado un amplio terreno de acción para que la sociedad civil realice las sugerencias que fue haciendo a lo largo de los años y actúe para mejorar la situación de los derechos humanos en diferentes áreas en Armenia, para proteger los derechos, aumentar el nivel de rendición de cuentas de las autoridades y la transparencia de sus acciones, y disminuir los riesgos de corrupción.*

*Estamos en el proceso de aprender a vivir y actuar en condiciones libres. Por un lado, la sociedad civil tiene que cooperar con el gobierno; por el otro, debe continuar haciendo las veces de guardián vigilante de las autoridades para proteger a la sociedad contra cualquier abuso que pudiera cometer el nuevo gobierno.*

## MALASIA: UN SHOCK PARA EL VIEJO ORDEN

En mayo se produjo una conmoción en el establishment político de **Malasia**, cuando después de 60 años de gobierno ininterrumpido tras la



independencia, la coalición Barisan Nasional (BN) fue finalmente derrotada. Las elecciones se produjeron en un contexto de continuas revelaciones sobre el **escándalo 1MDB**, un vasto ejercicio de corrupción que involucró a las principales figuras políticas en el saqueo de una corporación estatal; se presume que el derrotado primer ministro Najib Rajik desvió casi 700 millones de dólares de fondos públicos a sus cuentas bancarias personales. Desde el estallido del escándalo en 2015, la respuesta del gobierno fue atacar e imponer obstáculos a quienes lo denunciaron, entre ellos la sociedad civil y los medios de comunicación, y suprimir la investigación.

El resultado de la elección demostró, como se ha **visto** en otros países (**véase sección 1**), que la indignación ante la corrupción endémica y flagrante puede constituir un punto de inflexión, ayudando a las personas a superar las barreras – tales como la represión de la sociedad civil y las libertades democráticas y la instrumentalización de las divisiones raciales y religiosas para ganar votos –, que habían contribuido a mantener a los corruptos en el poder. Demostró también el modo en que la sociedad civil – y en particular la alianza **Bersih** (la coalición para Elecciones Limpias y Justas), con su historial de organización de **protestas** callejeras masivas – puede ayudar a promover una agenda de cambio, incluso en condiciones muy desfavorables.

Poco después de las elecciones, **Gayathry Venkiteswaran**, de la Universidad de Nottingham en Malasia, describía el rol de la sociedad civil, que incluyó el monitoreo de las elecciones para tratar de garantizar un resultado justo:

*El electorado rechazó el tipo de política y la corrupción practicadas por el gobierno anterior. Las transgresiones eran demasiado obvias, y solo era cuestión de cuán grandes serían las pérdidas de la coalición BN. Pero no esperábamos que la caída fuera tan estrepitosa. Esta elección fue significativa porque a pesar de los desafíos y obstáculos introducidos en materia de procesos electorales, la gente se mostró decidida a rechazar la propaganda del BN e insistió en el cambio.*

*Los resultados mostraron el rechazo a la agitación del temor y al*

*soborno, así como la disposición a establecer puentes entre las narrativas de la raza y la religión como principal punto de referencia para la decisión del voto.*

*La sociedad civil llevaba largo tiempo trabajando para crear conciencia e impulsar la participación, pero su actividad dio un giro significativo tras el surgimiento del movimiento Reformasi (reforma) en 1998, y nuevamente luego de las protestas del movimiento Bersih por las reformas electorales. Bersih proporcionó un objetivo para el cambio, y varios grupos de interés también presentaron sus preocupaciones particulares, tales como la lucha contra la corrupción, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Esta movilización, junto con las revelaciones de los medios de comunicación independientes y periodistas ciudadanos sobre las prácticas corruptas del gobierno, planteó la posibilidad de que los ciudadanos demandaran el cambio.*

*Durante la elección los votantes, incluidos los que votaron desde el exterior, demostraron su compromiso, participaron como fiscales en los centros de votación y proporcionaron otras formas de verificación y apoyo para evitar trampas o malas prácticas el día de las elecciones. Todos estos son indicios de que la gente estaba comprometida con el cambio. El uso de las redes sociales para compartir información, especialmente sobre prácticas de votación, también puso en evidencia la existencia de una sociedad que quiere que los gobiernos, a nivel tanto federal como estatal, estén sujetos a rendición de cuentas.*

El resultado se produjo a pesar de que antes de las elecciones BN hizo todo lo que pudo para inclinar la balanza en su favor; por ejemplo, habilitó la campaña más breve que le resultó posible y en abril apuró la aprobación de una ley contra las “noticias falsas”, demostrando una vez más que la **terminología** ha sido adoptada y utilizada como arma por estados represivos. Inmediatamente **se inició** una investigación por “noticias falsas”



Los votantes esperaron en largas filas en los centros de votación el día de las elecciones generales de Malasia en el mes de mayo.

Crédito: Ulet Ifansasti/Getty Images

contra Mahathir Mohamad, el líder de la oposición y veterano ex primer ministro de BN que se había rebelado contra sus ex protegidos y eventualmente ganaría la elección. Antes de la elección, Bersih **expresó su preocupación** por el **rediseño** de los distritos electorales, realizado a toda prisa y en favor de BN, los problemas con el sistema de votación postal para los votantes del **exterior**, la **compra de votos** y la **manipulación** y el abuso de poder por parte de la Comisión Electoral el día de la nominación. Pero en última instancia ninguna de estas maniobras alcanzó para contener la marea de la indignación pública.

Las primeras señales emitidas por el nuevo gobierno fueron prometedoras. El gobierno entrante se comprometió a restaurar el estado de derecho y respetar las libertades fundamentales, inició una investigación sobre el escándalo del 1MDB y presentó acusaciones contra el ex primer ministro Najib. También se comprometió a **ratificar** los principales tratados internacionales de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el gobierno estableció un Comité de Reformas Institucionales con el objetivo de reformar las estructuras y agencias gubernamentales. Las OSC pudieron reunirse con el comité y hacer recomendaciones. En septiembre, en una movida que prometió contribuir a desafiar la **impunidad** de la policía, el gobierno anunció el establecimiento de la Comisión Independiente de Quejas y Mala Conducta de la Policía.

Varias personas que habían sido detenidas por el régimen anterior por expresar disenso fueron liberadas. En julio un tribunal **absolvió** al caricaturista político Zunar, al abogado de derechos humanos Surendran y al parlamentario Sivarasa Rasiah, quienes habían sido acusados de **sedición**. En agosto, el activista Mandeep Singh y los parlamentarios Maria Chin Abdullah y Sim Tze Tzin fueron **absueltos** de acusaciones relacionadas con las protestas de 2015.

Sin embargo, la promesa de las elecciones de mayo no tardó en desvanecerse. En agosto el gobierno dio marcha atrás en el compromiso de derogar la Ley de Delitos contra la Seguridad (Medidas Especiales) de 2012, que permite la detención sin acusación ni acceso a los tribunales durante un máximo de 28 días y ha sido utilizada como una herramienta clave para reprimir las voces críticas. Ese mismo mes también declaró que no **derogar**ía la Ley de Secretos Oficiales, a pesar de haber prometido explícitamente que lo haría. Más tarde declaró que revisaría la Ley de Secretos Oficiales e introduciría una Ley de Libertad de Información, pero sin dar fechas. Y aunque el gobierno se había **comprometido** a derogar la ley contra las “noticias falsas”, septiembre trajo consigo otro **revés**: el Senado **rechazó** la derogación. En noviembre el gobierno declaró que **no ratificar**ía la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, presumiblemente porque pondría en duda



el **privilegio** de las personas de etnia malaya, consagrado en la constitución nacional.

Los desafíos para los **grupos excluidos** – tales como refugiados, personas LGBTQI y minorías **indígenas** – así como para la sociedad civil que promueve sus derechos, permanecieron en gran medida irresueltos. Las violaciones de las libertades fundamentales continuaron. En septiembre, ocho estudiantes fueron **arrestados** durante una protesta durante el Día de Malasia en el estado de Sabah. En octubre un hermano de una figura prominente del gobierno anterior, **Azman Noor Adam**, fue arrestado bajo acusaciones de sedición, por supuestamente insultar al nuevo primer ministro en las redes sociales. En diciembre el gobierno **anunció** que estaba levantando la moratoria sobre las leyes represivas – incluidas la Ley de Sedición y la Ley de Comunicaciones y Multimedia, ambos instrumentos clave para reprimir las voces disidentes – para los casos “relacionados con amenazas al orden público, la seguridad nacional y las relaciones raciales”. La sociedad civil se **quejó** de que la policía seguía acosando a los activistas de derechos humanos. Daba la impresión de que el nuevo gobierno estaba retrocediendo rápidamente y adoptando las tácticas de su predecesor.

Muchos actores de la sociedad civil continuaron instando al gobierno a mantenerse fiel al mandato de cambio conferido por el pueblo y presionaron para que la reforma procediera a un ritmo más acelerado. Pero también hubo muchos integrantes de la sociedad civil que posiblemente se vieran sorprendidos por el resultado; puesto que no esperaban que se produjera un cambio, antes de la elección no habían invertido en el desarrollo de políticas alternativas. Después de la elección fue necesario superar la euforia inicial generada por el resultado, resistir la **cooptación** del nuevo gobierno, y producir un nuevo enfoque tras años de desgaste atrincherados frente al gobierno anterior. La necesidad de nuevas respuestas podría revelar la existencia de desafíos en materia de capacidad de las OSC.

También se temió que la coalición que había gobernado el país durante 60 años y sus partidarios no se callaran y en cambio se reafirmaran, al tiempo que la maquinaria del gobierno y sus estilos de trabajo exhibieran resistencia al cambio. En última instancia, es necesario reconocer los límites de lo que cabe esperar cuando un cambio político, por importante que sea, lleva a un ex primer ministro del partido gobernante de regreso a su antiguo cargo. Las reformas no pueden provenir solamente desde la cúspide; deben sustentarse en un impulso desde las bases sostenido por la sociedad civil. Gayathry describe la situación en la que se encuentra hoy la sociedad civil y lo que podría hacer a continuación:

*Si bien hubo un impulso de cambio y una serie de iniciativas de coaliciones o alianzas de sociedad civil se centraron en los resultados de las elecciones – por ejemplo, mediante la publicación de manifiestos alternativos – hubo poca discusión real sobre los escenarios posibles, dadas*

“

MUCHOS  
ACTORES DE LA  
SOCIEDAD CIVIL  
CONTINUARON  
INSTANDO AL  
GOBIERNO A  
MANTENERSE FIEL  
AL MANDATO DE  
CAMBIO CONFERIDO  
POR EL PUEBLO.

”

*la incertidumbre y la preocupación de que se utilizaran métodos ilegales para resistir el cambio. No estaba claro cuál habría sido la postura de la sociedad civil si los resultados hubieran sido diferentes, y cómo se propone avanzar en este contexto.*

*Es posible que aún haya temores de que la coalición BN, y especialmente los miembros del partido Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO) y las organizaciones asociadas a ellos, utilicen provocaciones para desestabilizar la situación, y que los electorados malayos y musulmanes sean presionados para que reaccionen a la narrativa multirracial volviéndose más fundamentalistas. Al mismo tiempo existe la preocupación de que la coalición gobernante de marcha atrás en sus promesas como concesión a la oposición y a la resistencia de los partidarios de la BN y la UMNO.*

*Creo que es urgente que la sociedad civil se siente y arme una hoja de ruta que incluya recomendaciones y mecanismos para verificar las acciones del gobierno. La sociedad civil puede aunar sus recursos para construir sus propias plataformas de monitoreo y procesos para involucrarse con el gobierno. Pero lo más importante es que haya liderazgo y compromiso para garantizar el cambio en el largo plazo, independientemente de los partidos políticos que lleguen al poder. Ya lo hemos hecho en el pasado, después de las elecciones de 2008, con el establecimiento de la Coalición para el Buen Gobierno (CGG) para el estado de Selangor y el Foro de Penang. La CGG no duró, pero vale la pena considerarla como modelo, haciendo los ajustes necesarios para que haya una perspectiva clara, sistemas de rendición de cuentas y planes de sostenibilidad.*

## COREA DEL SUR: ¿QUÉ ESPERAR TRAS EL CAMBIO?

La sociedad civil **surcoreana** puso de relieve el valor de sostener la acción tras un cambio político importante, así como los desafíos encontrados en el proceso. En 2017, la ira generada entre los vínculos corruptos entre

la presidenta, su amiga más cercano y los poderosos conglomerados familiares desencadenó la **Revolución a la luz de las velas**, que resultó en el derrocamiento de la presidenta Park Geun-hye. En abril, la expresidenta fue **sentenciada** a 24 años de cárcel por abuso de poder y coerción.

Los eventos de 2018 sugirieron que el poder desarrollado durante esos tiempos tumultuosos no se había perdido por completo, sino que se canalizó hacia la búsqueda de justicia social y la realización de los derechos humanos. En 2018, el impulso de la protesta se concentró en desafiar el acoso sexual, el sexismo y arraigadas cultural patriarcal (**véase sección 2**), así como en el reclamo de derechos laborales. Por ejemplo, en noviembre decenas de miles de trabajadores realizaron una **huelga** de medio día, acusando al gobierno de retractarse de los compromisos contraídos en materia de derechos laborales ante las dificultades económicas. La Federación de Sindicatos de Corea dijo que 40.000 de los trabajadores en huelga habían participado en mítines y casi 10.000 se habían dado cita fuera del parlamento.

Estas protestas subrayaron la necesidad de vigilancia y acción constantes para presentar demandas y salvaguardar derechos, incluso después de la llegada al poder de un presidente aparentemente más progresista. La activista de la sociedad civil surcoreana **Gayoon Baek** evalúa el destino del impulso de protesta de 2017:

*Durante los últimos nueve años, durante los cuales tuvimos un gobierno conservador, la gente – y en particular los trabajadores – sintió que a pesar de que protestaba una y otra vez, nada cambiaba. Las personas que trabajamos en derechos humanos no teníamos mucha experiencia de ganar algo. Pero a partir de la experiencia de 2017, la gente se dio cuenta de que, si todos nos ponemos de pie, algo realmente puede cambiar. Mucha gente ahora sabe que una vez que se reúne en las calles, realmente puede cambiar algo. Este sentimiento de haber alcanzado la victoria con nuestras propias manos le enseñará a la gente que si quiere lograr algún cambio tiene que hacer algo. Esto es algo que hicimos en tanto que democracia*



*y que logramos con nuestras propias manos. Una experiencia como esa hace mucha diferencia. Creo que esto traerá cambios en el futuro, cuando enfrentemos problemas sociales que requieran de nuestra acción.*

La elección de un nuevo presidente trajo consigo algunos cambios inmediatos en las actitudes del gobierno hacia la sociedad civil. Pero al mismo tiempo se experimentaron problemas similares a los observados en Malasia: la sociedad civil enfrentó el desafío de mantener el impulso. Algunos interpretaron que la victoria había sido alcanzada, otros se vincularon emocionalmente con el nuevo régimen y se mostraron reacios a criticarlo, y otros fueron cooptados por el gobierno. Estos son, afirma Gayoon, temas con los que continúa lidiando la sociedad civil surcoreana:

*Las agencias gubernamentales cambiaron de actitud después de la elección. Al día siguiente de la publicación de los resultados de las elecciones, los ministerios del gobierno se pusieron en contacto con las OSC y querían reunirse con nosotros. Antes no querían hablar con nosotros ni incluirnos como aliados. Entonces fue positivo que quisieran hablar con grupos de la sociedad civil. Ahora tenemos más oportunidades para hablar y negociar con el gobierno. Pero al mismo tiempo, ha quedado en evidencia que dependemos de quién esté en el gobierno. No hay un diálogo sistemático, de modo que cuando volvamos a tener un mal gobierno volveremos a retroceder.*

*Muchos ex integrantes de la sociedad civil se unieron al equipo del nuevo presidente. Así que ahora cuando hacemos incidencia y cabildeo tenemos que hacerlo con nuestros antiguos colegas, lo cual es difícil para ambas partes. Entonces, en la superficie se observan más oportunidades, pero cuando vamos más a lo profundo puede resultar más complicado. Sus posiciones generales son similares a las de la sociedad civil, pero cuando miramos el detalle, y sobre todo en el nivel de la implementación, son bastante diferentes.*

*Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, dado que parecemos*



Los sindicatos exigieron mayores protecciones de los derechos de los trabajadores mediante una huelga en noviembre.

Crédito: Woohae Cho/Getty Images

*bastante similares, ya no hay necesidad de apoyar a la sociedad civil. Algunas personas han dejado caducar su membresía en OSC.*

*Muchos actores de la sociedad civil sienten que desde la Revolución a la luz de las velas el impulso de la sociedad civil se ha disipado. Mucha gente piensa que por el hecho de que tenemos un nuevo gobierno nuestro rol de alguna manera ha concluido. También hay muchos grupos que apoyan fuertemente al nuevo presidente, y algunos de estos son bastante extremos. Se sienten comprometidos a título personal con el nuevo presidente, ya que contribuyeron a llevarlo al poder. Y la gente dice que al principio es necesario alentar al nuevo presidente y al gobierno en vez de criticarlos. Pero la sociedad civil debe desempeñar un papel de guardián independientemente de cuál sea el gobierno de turno.*

Hay problemas urgentes y de larga data que exigen un compromiso sostenido de la sociedad civil, especialmente para hacer realidad los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI, los refugiados y los trabajadores, en un contexto en que los grupos anti-derechos también están activos ([véase sección 2](#)). Por lo tanto, concluye Gayoon, es necesario continuar apoyando a la sociedad civil surcoreana, y los ciudadanos surcoreanos deben recordar que tienen el poder:

*Por un lado hay aspectos positivos, pero por otro lado aún queda mucho por hacer si hemos de llamar a este un gobierno establecido por el poder del pueblo.*

*Debe recordarse al gobierno que los coreanos pueden impugnar al presidente si no están contentos con el liderazgo del gobierno. El gobierno está feliz de estar en el poder, pero puede que olvide a quién representa. Los gobernantes no deben olvidar que solo obtuvieron sus puestos porque la gente los apoyó. No solo deben tener un diálogo con la sociedad civil, sino que también deben pensar en qué forma pueden implementar los compromisos de derechos humanos que hicieron durante las protestas y las elecciones. Ese sería un buen*

*modo de diferenciarse de la administración anterior.*

## MALDIVAS: UN CAMBIO EN LA CÚSPIDE

Las elecciones presidenciales de septiembre en **Maldivas** también arrojaron un resultado sorprendente: el presidente en funciones, Abdulla Yameen, perdió las elecciones y lo hizo en forma rotunda, con un 42% de los votos frente al 58% de su rival opositor, Ibrahim Mohamed Solih. El resultado fue sorprendente porque logró superar los intentos evidentes y persistentes del presidente por reprimir el disenso y restringir el espacio para la sociedad civil – el espacio cívico – en el trayecto hacia la elección. Las tácticas utilizadas durante el período electoral incluyeron el nombramiento de un aliado cercano al presidente Yameen como jefe de la Comisión Electoral, una redada policial en las oficinas del opositor Partido Democrático de Maldivas en la víspera de la elección, y la denegación de visas a observadores internacionales y periodistas.

Estas fueron solo las tácticas más recientes en el marco de una larga historia de represión. En febrero el gobierno **declaró** el estado de emergencia después de que dos jueces de los tribunales superiores ordenaran la liberación y la realización de un nuevo juicio a un grupo de políticos de la oposición. La negativa del presidente Yameen a cumplir la sentencia disparó protestas. Después de la declaración del estado de emergencia, los dos jueces fueron arrestados y destituidos de sus cargos. Bajo el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales fundamentales, lo cual permitió la represión **sostenida** de las voces disidentes y opositoras, mediante tácticas tales como detenciones, el uso excesivo de la fuerza contra protestas en contra del presidente, la **proscripción** de candidaturas de algunos políticos clave de la oposición y el **uso indebido** de La Ley Antiterrorista. El presidente Yameen también **despojó** de sus fueros a varios parlamentarios para mantener su liderazgo. Varios periodistas fueron **atacados** y heridos mientras cubrían protestas. Todo esto redundó en un contexto muy poco prometedor para celebrar una elección.

Justo antes de la elección, la activista **Shahindha Ismail**, de la **Red para la**

**Democracia en Maldivas**, describía el panorama sombrío del espacio cívico y las libertades democráticas, destacando las dificultades que enfrentaría cualquier intento de desafiar al presidente en funciones:

*El espacio cívico es prácticamente inexistente y lo ha sido durante varios años. A nadie, excepto a los que apoyan al gobierno, se le permite hablar o reunirse libremente. Todas las manifestaciones organizadas por la oposición política o la sociedad civil son dispersadas y sus organizadores y participantes son arrestados. La policía intimida a la gente. La difamación está tipificada como delito, y esto ha sido un desafío, ya que los medios de comunicación y los individuos son multados y enfrentan la posibilidad de ser encarcelados por expresarse o emitir puntos de vista alternativos.*

*Los que trabajan para contrarrestar el radicalismo y el extremismo violento también sufren amenazas violentas, incluida la posibilidad de desaparición o asesinato, por parte de grupos de choque sancionados por el gobierno. Estos grupos operan con total impunidad y han apuntado contra organizaciones e individuos que promueven la tolerancia, ofrecen narrativas alternativas e impulsan el secularismo.*

*En la situación actual, tenemos que hacer la mayor parte de nuestro trabajo en forma clandestina, y todo lo que hacemos públicamente requiere de un cuidado especial. Como defensores de derechos humanos, estamos constantemente mirando por encima del hombro y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos movemos. Tememos por la seguridad de nuestras familias. Quienes forman parte de la comunidad de defensores de derechos humanos y además trabajan en la administración pública o en compañías de propiedad estatal también temen perder sus puestos de trabajo. En tanto que organización, el financiamiento se ha convertido en un desafío serio para nosotros, y estamos a punto de cerrar.*

Pero a pesar de estos muchos desafíos, la ciudadanía dio su veredicto

sobre el mal gobierno. El día de las elecciones, la evidentemente entusiasta participación del 89% de la ciudadanía resultó en la extensión del horario de votación a causa de las largas filas para votar. Fundamentalmente, los partidos de oposición se unieron detrás de un único candidato para dar a los ciudadanos una oportunidad clara de expresar su rechazo al presidente en funciones. El intento subsiguiente del derrotado presidente de anular el resultado de la elección en los tribunales fue **rechazado** por unanimidad, aunque cuatro miembros de la Comisión Electoral huyeron del país a causa de la intimidación y las amenazas recibidas. Ibrahim Mohamed Solih asumió el cargo en noviembre.

Inmediatamente después de la elección, los tribunales **liberaron** a cinco presos políticos que habían sido arrestados durante el estado de emergencia. Otros detenidos fueron liberados a continuación. En octubre, el tribunal **desestimó** las acusaciones de sobornos motivadas políticamente contra los dos jueces del tribunal superior cuya decisión había provocado el estado de emergencia.

En otro paso alentador, en noviembre el nuevo gobierno **derogó** la ley penal de difamación, que desde su introducción en 2016 había permitido **suprimir** la oposición y las voces disidentes, e inició una investigación sobre las desapariciones y asesinatos ocurridos bajo el antiguo gobierno, entre otros de blogueros y periodistas críticos. Las acusaciones políticamente motivadas por cargos de terrorismo, presentadas contra prominentes políticos opositores al gobierno saliente, entre ellos el ex presidente **Mohamed Nasheed**, fueron retiradas.

A nivel internacional las elecciones en Maldivas fueron significativas debido a la ubicación **geoestratégica** del país, entre **China** e **India**. China tenía una relación cercana con el presidente saliente y había llevado a cabo su habitual diplomacia de infraestructura para respaldar proyectos de desarrollo a gran escala, mientras que India apoya al nuevo presidente, al punto que el expresidente Yameen acusó al gobierno indio de apoyar financieramente al partido ganador. Por su parte, el gobierno entrante amenazó con retirarse



“

LA MAGNITUD DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN EN MÉXICO QUEDÓ ILUSTRADA POR LOS ATAQUES OCURRIDOS EN EL CONTEXTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL.

”

de un acuerdo de libre comercio que el gobierno saliente había acordado con China. En cuanto a la largamente castigada sociedad civil de Maldivas, ha llegado el momento de reclamar sus derechos y esforzarse por desempeñar adecuadamente el rol de contralor, llamando al nuevo régimen a rendir cuentas.

## MÉXICO: EL ATRACTIVO DEL *OUTSIDER*

Hasta las elecciones de julio en **México**, todos los presidentes desde la década de 1920 habían provenido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a excepción de dos presidentes recientes, procedentes del igualmente antiguo Partido de Acción Nacional (PAN). Pero todo eso llegó a su fin cuando Andrés Manuel López Obrador, más conocido por sus iniciales AMLO, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de julio. AMLO compitió a la cabeza del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), un partido fundado en 2014. El candidato del partido gobernante, el PRI, salió tercero en la carrera presidencial, mientras que MORENA y sus aliados también obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.

**Emanuel Johansen Campos**, de **Alternativas y Capacidades**, puso los resultados en perspectiva:

*Sin duda las recientes elecciones han sido un hito en la vida política de México. Mientras que las elecciones del año 2000 llevaron a la presidencia a un partido de oposición – el PAN, de centroderecha – por primera vez desde 1929, las de 2018 representaron el primer triunfo en elecciones federales de un partido con una plataforma ideológica más cercana a las políticas de izquierda en la historia moderna de México, MORENA. Esta alternancia representa también un fuerte deseo de cambio de la sociedad y un castigo al PRI y al PAN, los dos principales partidos, por los resultados negativos de sus administraciones pasadas. Ejemplo de ello es el hecho de que el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones presidenciales con el 53% de los votos y una diferencia de 30 puntos sobre su contendiente más cercano, obteniendo la cifra más alta en elecciones presidenciales desde 1982.*

AMLO **se posicionó** como un *outsider* de izquierda, sin la mancha de la corrupción y la incompetencia que ha caracterizado a la clase política de México. Su mensaje, que acaparaba titulares con promesas que incluían **recortar** su propio salario y **vender** el jet presidencial, parecía resonar en muchos votantes hartos de la corrupción, la pobreza, la extrema desigualdad, el crimen y la violencia, incluidas las consecuencias violentas de la “guerra con el narco” declarada por sus predecesores.

La magnitud del problema de la violencia y el crimen en México quedó ilustrada por los ataques

ocurridos en el contexto de la campaña electoral. Artículo 19 **rastreó** más de 185 **ataques** contra periodistas durante su campaña #RompeElMiedo, desarrollada desde abril hasta las elecciones, confirmando el **desastroso historial** de México como uno de los países más peligrosos del mundo para el periodismo, donde los asesinatos, las desapariciones forzadas y la impunidad por estos crímenes constituyen desafíos **permanentes**. También se **informó** de los asesinatos de más de 130 figuras políticas entre septiembre de 2017 y las elecciones de julio. La situación decayó a tal punto que el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, **declaró** en junio que el país enfrentaba una gran crisis de seguridad como resultado de la ruptura del estado de derecho, como lo reflejaban los ataques contra periodistas.

Emanuel describe el entorno desafiante para la sociedad civil durante la campaña electoral, pero también los niveles significativos de participación de la sociedad civil que, en su opinión, ayudaron a movilizar a la ciudadanía y a hacer de la corrupción un tema central:

*Activistas y periodistas han sido blanco recurrente de persecución, amenazas y asesinato, según lo documentan muchas organizaciones de derechos humanos. Según Artículo 19, entre 2000 y 2018 han sido asesinados 117 periodistas en posible relación con su labor periodística; 44 de ellos durante el mandato del presidente saliente. Por su parte, un **informe** publicado en 2017 por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos señala que entre 2012 y 2016 fueron asesinadas al menos 76 personas defensoras de derechos humanos en el país, en tanto que 73 se encuentran desaparecidas.*

*Las recientes elecciones también estuvieron marcadas por un alto grado de violencia que parece haberse normalizado en la sociedad mexicana. En el día de la elección se registraron hechos de violencia en varias entidades del país; destaca el caso del estado de Puebla, donde grupos de choque robaron al menos 70 paquetes electorales.*

*Por otro lado, Alternativas y Capacidades ha identificado algunas*

*tendencias positivas para la vida democrática de México. La participación de la sociedad civil durante el proceso electoral fue muy alta, como lo atestigua el importante número de iniciativas, no solamente para promover el voto de la ciudadanía, sino también para impulsar entre los candidatos propuestas de política pública surgidas de la experiencia y el trabajo colectivo de la sociedad civil organizada. En junio y julio realizamos un **mapeo de iniciativas civiles** impulsadas en el marco de las campañas electorales, a partir del cual identificamos al menos 38 acciones de incidencia con los candidatos a la presidencia, con objetivos que iban de la difusión de información y el análisis público de las propuestas de los candidatos hasta la elaboración de agendas de política pública en una variedad de temas. Hubo también un gran número de iniciativas a nivel estatal y local. Por otro lado, si bien la abstención electoral sigue siendo considerable, en las últimas elecciones votó el 63% del padrón electoral, la cifra más alta desde las elecciones federales del año 2000.*

*En México, la tendencia al involucramiento ciudadano en la arena política cobró fuerza desde las últimas décadas del siglo XX, pero en los últimos años se ha producido un salto enorme. Las numerosas voces de denuncia y el trabajo colaborativo de activistas, medios de comunicación independientes y organizaciones civiles han permitido visibilizar actos de corrupción en todos los niveles de gobierno. Como resultado, la ciudadanía es cada vez más suspicaz ante la información difundida por los medios de comunicación y está mucho más dispuesta a movilizarse y ocupar espacios públicos para exigir cambios a los gobiernos, sobre todo en materia de combate a la corrupción y la impunidad, seguridad, justicia y desarrollo social.*

*El trabajo de vigilancia y denuncia de organizaciones civiles, iniciativas ciudadanas, activistas, periodistas y medios de comunicación ha sido crucial para visibilizar los niveles alarmantes de corrupción, impunidad e inseguridad de los últimos años. Ejemplos de ello*

“

DESDE 2014, LOS  
PADRES Y MADRES  
DE LOS ESTUDIANTES  
DESAPARECIDOS EN  
AYOTZINAPA SE HAN  
MOVILIZADO PARA  
DAR CONTINUIDAD  
A LA EXIGENCIA DE  
JUSTICIA

”

fueron las investigaciones de 2014 sobre la “*Casa Blanca*” adquirida por la primera dama Angélica Rivera a Grupo Higa y el posible conflicto de interés que representaba la participación de dicha empresa en la licitación para la construcción del tren México-Querétaro, proyecto propuesto durante la administración de Peña Nieto. Dicho reportaje estuvo a cargo del equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, recibiendo por ello el Premio Nacional de Periodismo 2015. El reportaje también contribuyó a que el Gobierno Federal abriera una investigación oficial sobre conflicto de interés a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Por su parte, numerosas organizaciones de derechos humanos denunciaron la **desaparición de 43 estudiantes normalistas** en el pueblo de Ayotzinapa en 2014, presuntamente a manos del ejército; desde ese año los padres y madres de los desaparecidos se han movilizado y han dado continuidad a la exigencia de justicia, con el acompañamiento y apoyo de organizaciones y colectivos de derechos humanos de todo el país.

Entre 2012 y 2017 México bajó de 34 a 29 puntos en el **Índice de Percepción de Corrupción** de Transparencia Internacional. Según la **Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental** de 2017, el 91% de las personas consideró que los actos de corrupción en su entidad son frecuentes o muy frecuentes. Durante el último periodo presidencial han salido a la luz numerosos escándalos de corrupción que implican a figuras de gobierno en todos los niveles; sin embargo, en muy pocos casos se han observado respuestas y soluciones efectivas.

Entre las numerosas iniciativas emprendidas por la sociedad civil durante la campaña presidencial de 2018 se destacó la Tercera Cumbre Ciudadana (TCC). Emanuel describe los esfuerzos de la sociedad civil para unirse, desarrollar posiciones políticas comunes y utilizarlas como base para el diálogo con los candidatos presidenciales para tratar de asegurar compromisos a los que se daría seguimiento después de la elección:

*La TCC es un espacio en el que diversas organizaciones y movimientos sociales buscan incidir en las políticas públicas del gobierno entrante para contribuir a la solución de los grandes problemas del país. Para llevar a cabo la TCC se recuperaron aprendizajes importantes de las dos cumbres anteriores de 2012 y 2015.*

*El primer paso de la TCC fue conformar una agenda consensuada de políticas públicas. Desde comienzos de 2017 y durante diez meses, un conjunto amplio y diverso de organizaciones y colectivos compiló una agenda de 56 propuestas de política pública agrupadas en siete ejes temáticos: ambiente en el desarrollo sostenible, cohesión comunitaria y desarrollo participativo,*



derechos humanos, educación de calidad, fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, justicia y seguridad. La TCS incluyó diez propuestas para abordar retos pendientes en la legislación sobre OSC, tales como la simplificación de los procesos administrativos, la disminución de la sobre-regulación de la actuación de las OSC, y la mejora de las reglas para el acceso a beneficios fiscales y recursos públicos. La agenda y las propuestas fueron aprobadas por consenso por 59 organizaciones, tras lo cual se invitó a otras organizaciones y movimientos sociales a suscribir en línea, ya fuera a propuestas puntuales o a toda la agenda. A julio de 2018, casi 380 organizaciones o colectivos habían suscrito la agenda.

El segundo paso consistió en enviar la agenda a los cuatro candidatos presidenciales junto con la solicitud de que indicaran qué propuestas suscribían, cuáles suscribían con reservas o no suscribían las coaliciones que los postularon, así como sus razones en caso de expresar reservas o rechazo. Los cuatro candidatos hicieron llegar sus **respuestas**, y tres de ellos además hicieron público su posicionamiento en un evento que tuvo lugar en mayo, ante más de 400 personas provenientes de la sociedad civil organizada.

Adicionalmente, la TCC sostuvo un diálogo público con cuatro candidatos de diferentes fuerzas políticas al Senado Federal, con el objeto de que se posicionaran frente a diversos temas de la agenda, y se acordó construir puentes de diálogo una vez que tome posesión la próxima legislatura.

Pasadas las elecciones, la TCC está buscando contactar al presidente electo para sostener una primera reunión con él y su equipo para dar seguimiento a las propuestas de la agenda y establecer mecanismos de diálogo. Del mismo modo, cuando el nuevo congreso comience a sesionar la TCC establecerá contacto con las distintas fuerzas políticas del poder legislativo.

En lo sucesivo se requerirá una labor de incidencia y búsqueda de diálogo

permanente. Las fallas endémicas del Estado de derecho en México no pueden remediarse únicamente con un cambio en la cima; tras la elección continuaron los **ataques** violentos y la **detención** de periodistas. Los desafíos que enfrentaría la nueva administración incluían la reacción violenta de algunos sectores cuando intentara implementar sus políticas. En noviembre, alrededor de 5000 personas **marcharon** en la capital, la ciudad de México, después de que se detuvo la construcción de un nuevo aeropuerto; la decisión de construir el aeropuerto se había sometido a un referéndum local y alrededor del 70% de los votantes se habían manifestado en contra. El mes siguiente, casi 1400 jueces y trabajadores judiciales se declararon en **huelga** para protestar contra una nueva ley que establecía límites a sus salarios, poniéndolos en conflicto con la promesa del nuevo presidente de recortar dichos gastos. Lo que sucederá a continuación es incierto y seguramente será controvertido, pero existe la posibilidad de que la sociedad civil de México ayude a promover el cambio, si se facilitan las condiciones para que pueda hacerlo.

## ETIOPÍA: SE ABRE UNA VENTANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Si bien no fue el resultado de una elección, el recambio de liderazgo producido en **Etiopía** en abril pareció prometedor para la sociedad civil y las libertades democráticas. El Dr. Abiy Ahmed fue nombrado primer ministro después de la renuncia de Hailemariam Desalegn. La medida se produjo en respuesta a la profundización del conflicto y el evidente fracaso de la respuesta inicial del gobierno, consistente en una **política** de detenciones masivas y **violencia** contra las **protestas** en vez de un intento real de abordar los problemas materiales subyacentes a los conflictos. **Fisseha Tekle**, de **Amnistía Internacional**, describe el contexto:

*En Etiopía, desde el nombramiento del Dr. Abiy Ahmed como primer ministro han soplado vientos de cambio. Además de la liberación masiva de presos, incluidos cientos de presos de conciencia, el nuevo gobierno levantó el último estado de emergencia, que se*

había **declarado** en febrero por un período de seis meses. Muchos esperaban que el gobierno del nuevo Primer Ministro Abiy rescata a un país sumergido en una espiral descendente hacia una crisis total. Desde septiembre de 2017, en varias partes de Etiopía se habían presenciado expulsiones masivas por motivos étnicos, frecuentes asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, es decir ejecuciones extrajudiciales y una grieta cada vez mayor en la coalición gobernante, que paralizó al gobierno ante la crisis.

En abril y mayo de 2014, frustrados por los desplazamientos masivos de poblaciones bajo el pretexto del desarrollo, los jóvenes organizaron protestas en muchas partes de la región de Oromia. El desencadenante inmediato fue el borrador del Plan Maestro Integrado de Addis Abeba-Oromía, que los manifestantes percibieron como una excusa más para desplazar a los agricultores Oromo sin garantías procesales adecuadas, consulta ni compensación inmediata y adecuada.

Estas protestas se encontraron con el puño de hierro de las fuerzas de seguridad, que mataron e hirieron a manifestantes mayormente pacíficos. Las disposiciones de la Proclamación antiterrorista se utilizaron para arrestar y detener arbitrariamente, acusar y condenar a quienes eran percibidos como líderes de las protestas. Sin embargo, esto no disuadió a la gente de seguir reclamando libertad, una demanda que se había estado cocinando durante años.

En octubre de 2015, cinco meses después de que el partido gobernante obtuviera todos los escaños parlamentarios en las elecciones generales de 2015, en un ambiente de represión y luego de una serie de arrestos contra líderes de la oposición y blogueros críticos, resurgieron las protestas en Oromia. Solo que esta vez los manifestantes estaban más fuertes y mejor coordinados y tenían demandas para el gobierno, y las protestas se generalizaron. Los manifestantes expresaron sus demandas claramente: igualdad



Un partidario del Frente de Liberación Oromo celebra el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre sus actividades.

Crédito: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis vía Getty Images

política y económica, liberación de presos de conciencia y estado de derecho. La brutal represión del estado contra los manifestantes no detuvo la protesta. En cambio, los pobladores de la región de Amhara se unieron a la protesta en julio de 2016, cuando las fuerzas de seguridad arrestaron a líderes comunitarios que promovían demandas de identidad étnica de los Amhara en el distrito de Wolqait-Tegedae, que según ellos se había visto forzado a integrar la región de Tigray.

Contrariamente a lo que se esperaba, los esfuerzos realizados para sofocar las protestas mediante fuerza bruta, arrestos y juicios amañados no resultaron en la rendición de los manifestantes. En cambio, los partidos de origen étnico que integraban la coalición gobernante, y especialmente la Organización Democrática de los Pueblos Oromo y, más tarde, el Movimiento Democrático Nacional Amhara, se alinearon con los manifestantes y comenzaron a contradecir sus líneas partidarias. Esto no tenía precedentes en el gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, cuyo estricto espíritu centralista democrático ha tratado a la crítica y la expresión pública de disenso dentro del partido como una traición. Normalmente el partido castigaba duramente a quienes rompían filas, llegando al arresto, el asesinato y el exilio.

Para septiembre de 2017, la crisis se había profundizado junto con las líneas de quiebre en el partido gobernante y las protestas continuaban en varias partes de Etiopía. Solamente en septiembre de 2017, más de 700.000 personas fueron desplazadas de la región de Somalia a causa de su origen étnico. También se producían ataques étnicamente motivados en otras partes del país, y especialmente en Benishangul, en Oromia y en la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. Los miembros de la Fuerza de Defensa Nacional también se dedicaban a descargar sus cartuchos contra civiles y manifestantes en Ambo, Chinaksen, Hamaresa, Moyale, Weldia y las ciudades vecinas.

*Fue en medio de esta creciente crisis que Hailemariam Desalegn renunció en febrero y el gobierno declaró el estado de emergencia, el segundo en menos de dos años. El Dr. Abiy se hizo cargo y prometió una amplia gama de reformas para responder a los reclamos de los manifestantes, ampliar el espacio cívico y garantizar la justicia económica.*

Los hechos se precipitaron. En abril el Primer Ministro Abiy, el primer líder etíope de la minoría Oromo, que había estado en el centro de las protestas, **anunció** que consideraba reintroducir un límite de dos mandatos para los primeros ministros, en contra de la **tendencia reciente** en muchos estados africanos a eliminar los límites a los mandatos. Ese mismo mes, los servicios de telefonía móvil, que habían sido bloqueados en las partes de Etiopía donde se habían producido protestas antigubernamentales, fueron **restaurados**, aunque en agosto los servicios de internet fueron interrumpidos nuevamente en las partes orientales del país tras un estallido de violencia.

Entre los **liberados** de prisión en los primeros meses de la administración del Primer Ministro Abiy se encontraban activistas, blogueros, periodistas, académicos y políticos de la oposición. En mayo, el líder opositor Andargachew Tsige, quien había sido condenado a muerte por cargos de terrorismo, fue **indultado** junto con otros 575 prisioneros. En junio, el gobierno permitió el **acceso** a 264 sitios web previamente bloqueados, incluidos los sitios de la diáspora, y **estableció** un Consejo Asesor de Asuntos Jurídicos y de Justicia para revisar las leyes restrictivas, incluida la Proclamación sobre organizaciones de caridad y asociaciones y la Proclamación antiterrorista, a menudo utilizadas para limitar y reprimir a la sociedad civil, y celebró una consulta pública sobre las leyes bajo evaluación. En julio, el gobernador de la región somalí de Etiopía **anunció** la liberación de miles de detenidos del Frente de Liberación Nacional de Ogaden.

El deshielo continuó. En agosto el gobierno firmó un **acuerdo** para poner fin a las hostilidades con el Frente de Liberación Oromo (OLF), permitiendo a



“

A FINES DE 2018, EL  
COMITÉ PARA LA  
PROTECCIÓN DE  
LOS PERIODISTAS  
INFORMÓ QUE, POR  
PRIMERA VEZ DESDE  
2004, ETIOPIA NO  
TENÍA PERIODISTAS  
EN LA CÁRCEL.

”

este continuar sus actividades a través de medios pacíficos. El OLF había declarado un alto el fuego y expresado su intención de postularse a elecciones en el futuro. El OLF fue una de varias organizaciones que el gobierno eliminó de su lista de organizaciones terroristas. El mes siguiente, los líderes de la OLF **regresaron** a la capital, Addis Abeba, después de 26 años en el exilio en Eritrea, junto con alrededor de 1500 miembros de la organización. En octubre, casi 2000 integrantes del Movimiento Democrático Popular de Tigray siguieron su ejemplo y regresaron de Eritrea comprometidos con la acción política pacífica. Ese mismo mes, el Primer Ministro Abiy **estableció** un Ministerio de la Paz y **nombró** un gabinete con un 50% de mujeres. En noviembre, el Primer Ministro Abiy se reunió con miembros de la oposición partidaria para **prometer** que en 2020 se celebrarían elecciones justas, y **nombró** a un líder opositor previamente exiliado al frente de la Junta Nacional Electoral. A fines de 2018, el Comité para la Protección de los Periodistas **informó** que, por primera vez desde 2004, Etiopía no tenía periodistas en la cárcel.

Sin embargo, la fragilidad de la situación fue subrayada por la continuidad de la violencia étnica. Cuando los líderes de la OLF regresaron en septiembre, 23 personas murieron en un solo fin de semana a causa de violentos **enfrentamientos** entre grupos juveniles Oromo y otros grupos. Los enfrentamientos entre partidarios de la OLF y residentes locales fueron sofocados con gases lacrimógenos. La respuesta del estado fue familiar: fueron **arrestados** alrededor de 3000 jóvenes, muchos de los cuales probablemente no estaban relacionados con la violencia, y alrededor de 1200 quedaron detenidos. En octubre, nueve personas fueron **asesinadas** por las fuerzas de seguridad durante una protesta en la región de Tigray, y al menos 50 personas fueron arrestadas y muchas más golpeadas y heridas como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad en una protesta en la región de Afar. Evidentemente, algunos viejos hábitos tardarían en morir. Mientras tanto, la oposición a las reformas se expresó en un **ataque** con granadas a un mitin organizado por el Primer Ministro Abiy en junio, en el cual murieron dos personas.

Pese a estos innegables contratiempos, la sociedad civil buscó aprovechar y ayudar a mantener el evidente impulso de cambio, por ejemplo **pidiendo** al gobierno que avanzara aún más cuando comenzó a preparar un nuevo proyecto de ley sobre las OSC. Etiopía ha tenido durante mucho tiempo uno de los entornos legales más represivos del mundo para el establecimiento y funcionamiento de OSC, y el proyecto de ley aún contenía muchas medidas restrictivas relativas al registro y el financiamiento de las OSC, y en particular de las OSC internacionales.

El grado en que la nueva legislación sobre OSC establezca un ambiente habilitante constituirá una buena medida del nivel de seriedad y compromiso de la agenda de reformas del Primer Ministro

Abiy. En última instancia, los recientes cambios producidos en Etiopía, aunque mayormente positivos, subrayan las debilidades persistentes de un sistema de gobierno que concentra enormes cuotas de poder en el partido gobernante y su líder. Si un simple cambio de primer ministro puede conducir rápidamente a avances significativos de derechos humanos, entonces también lo contrario puede fácilmente ocurrir: el ascenso de un líder de la vieja guardia podría conducir al país de regreso a la autocracia. Todavía se necesitan muchas más reformas, y para que el cambio sea permanente es necesario desarrollar las estructuras y culturas de la democracia, lo cual supone permitir que la sociedad civil actúe, crezca y desempeñe plenamente su rol en la construcción de la democracia. Fisseha resume el desafío que el país tiene por delante:

*La lección principal es que no se puede apaciguar la demanda popular de libertad usando la fuerza bruta. Por lo tanto, insto a la nueva administración a acelerar la reforma a través de un proceso que sea inclusivo y transparente.*

*Es de suponer que los miembros del partido gobernante que perdieron su poder político a través del proceso de reforma están descontentos. La elusión de una potencial rendición de cuentas por crímenes atroces y la corrupción sistémica es un fuerte incentivo para que los ex funcionarios de seguridad y los elementos reaccionarios del partido gobernante se opongan activamente al proceso de reforma. De modo que es necesario consolidar las reformas en leyes e instituciones para garantizar que sean irreversibles.*

*El país se acerca a las elecciones locales de 2019 y a las elecciones generales de 2020. Sin embargo, las leyes e instituciones que constituyen el marco para la participación ciudadana ponen obstáculos a los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil, inhibiendo su participación efectiva en el proceso. En este momento crítico para Etiopía, la celebración de una elección justa y creíble es clave para asegurar la legitimidad del gobierno y la*

*paz y la estabilidad. Sin embargo, la credibilidad de la elección estará en riesgo si esta se lleva a cabo en el marco de las leyes represivas vigentes.*

Las reformas también tienen implicancias internacionales. Las problemáticas relaciones de Etiopía con su vecina **Eritrea**, independizada de Etiopía en 1991, han mejorado, lo cual se reflejó en la firma de un **acuerdo de paz** en julio. Pero si bien facilitó a los exiliados etíopes el regreso de Eritrea, el acuerdo resultó en ninguna **mejora** inmediata de los derechos humanos en Eritrea, que ha utilizado durante mucho tiempo su conflicto con Etiopía como **pretexto** para el **autoritarismo** y el servicio militar forzoso. Incluso después del acuerdo de paz, la represión en Eritrea continuó. En septiembre, por ejemplo, el ex ministro de Finanzas de Eritrea, Berhane Abrehe, fue **arrestado** y puesto bajo detención después de que publicara un libro en el que criticaba al presidente y pedía a los jóvenes que se alzaran en pos de un cambio democrático. El carácter de **estado-prisión** de Eritrea es ahora aún más marcado en contraste con el deshielo en Etiopía.

Las implicaciones regionales son importantes porque, como concluye Fisseha, Etiopía durante mucho tiempo ha sido vista como un caso exitoso de la región, tanto por los gobiernos donantes como por los estados vecinos. El país fue aclamado por sus éxitos de desarrollo bajo un sistema autoritario, hasta que ese sistema ya no pudo contener los conflictos causados o exacerbados por la toma de decisiones remota y la desigualdad económica. Ahora Etiopía, a instancias de una sociedad civil que ha permanecido reprimida durante demasiado tiempo, puede ofrecer un modelo diferente y más inclusivo:

*Hay una lección para los otros países del este de África, que han estado observando el modelo etíope. Muchos gobiernos vecinos mostraron interés en el modelo estatal de desarrollo de Etiopía y algunos de ellos intentaron replicarlo. Sin embargo, los países tentados por el modelo de desarrollo estatal no deben dejarse engañar por una visión parcial de la historia. Los celebrados avances*

*económicos que Etiopía registró en los últimos diez años fueron acompañados de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos, las cuales acabaron conduciendo a una crisis política. El panorama general de Etiopía muestra que los beneficios de priorizar indebidamente el desarrollo económico a expensas de los derechos humanos son de corta duración y están condenados a desmoronarse. Actualmente, lo que se destaca es que las técnicas represivas, tal como las utiliza el gobierno de Etiopía, son recetas para el fracaso del estado en vez de garantizar el desarrollo sostenible.*

## ¿LA VOLUNTAD DEL PUEBLO?

### LOS REFERENDOS DE 2018

#### IRLANDA: REFORMA SOCIAL POR LA VÍA DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA

En mayo, el referéndum que revirtió en Irlanda la prohibición constitucional del aborto (*véase sección 2*) ofreció un ejemplo alentador del modo en que un mecanismo de democracia directa puede promover un cambio progresista. De manera crucial, el referéndum fue parte de un proceso más amplio de diálogo y deliberación. La propuesta, que rompió décadas de empate político, surgió de una asamblea ciudadana, un cuerpo no partidista y ampliamente representativo. Este no fue el único paso adelante para los derechos que tuvo lugar en Irlanda en 2018 a través de un referéndum: en octubre, la ciudadanía se pronunció **abrumadoramente** a favor de abolir la ley de blasfemia, lo cual constituyó un gran avance para la **libertad de expresión**. La votación de octubre se sumó a la votación sobre la ley del aborto y el referéndum de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, coronando la llamada ‘**revolución silenciosa**’ de Irlanda, en virtud de la cual leyes conservadoras largamente establecidas fueron anuladas por decisión popular. En 2019 y en los próximos años, es probable

que haya más votaciones sobre temas tales como la liberalización de las leyes de divorcio y la eliminación del texto constitucional que afirma que el lugar de la mujer está en el hogar.

Otro objetivo de la sociedad civil irlandesa es desafiar las disposiciones de la ley nacional electoral en relación con la recepción de fondos para “**actividades políticas**”. Esta amplia terminología ha llevado a exigir que las OSC devuelvan las donaciones internacionales que son consideradas políticas. Mientras que en julio la decisión de que Amnistía Internacional Irlanda había violado dicha ley y debía devolver una donación fue **revertida**, en octubre *Equate*, una OSC de derechos del niño, **informó** que también estaba siendo investigada en virtud de la misma ley. En el marco de esta seguidilla de referendos sobre temas sociales, ha aumentado la preocupación de que la ley sea utilizada para limitar legítimas acciones de campaña de la sociedad civil sobre temas de derechos humanos. De ahí que una **coalición** de OSC **lanzara** un petitorio para reclamar un cambio en la ley. Las propuestas de reforma están sobre la mesa, y la sociedad civil ha pedido que se la consulte adecuadamente para desarrollar enmiendas, para lo cual se están considerando ejemplos de buenas prácticas de otros países de Europa.

#### PAÍSES BAJOS: ELIMINACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ANTI-ESTABLISHMENT

Un referéndum también dio lugar a un avance en los derechos fundamentales en los **Países Bajos**, donde los ciudadanos votaron en marzo para rechazar una ley que aumentaba el poder del estado para llevar a cabo acciones de vigilancia y recopilar datos electrónicos. La ley, aprobada en 2017, se hizo conocida como la “Ley del Gran Hermano”. Primero se juntaron más de 384.000 firmas para gatillar el referéndum, en el cual los votantes – por 49 contra 47%– **rechazaron** la ley. El resultado de la votación fue generalmente considerado impactante, y en todo caso puso en evidencia la creciente conciencia de los ciudadanos holandeses de la omnipresencia de la **vigilancia** en línea. Muchos actores de la sociedad civil hicieron campaña



contra la ley de vigilancia, preocupados por su impacto sobre las libertades fundamentales, incluido el derecho a la privacidad.

La Ley de Referéndum Consultivo de 2015 permitía que muchas leyes fueran sometidas a un referéndum consultivo poco después de ser aprobadas, si los votantes así lo solicitaran. En caso de que la mayoría votara en contra de la ley y la participación superara el 30%, entonces la ley en cuestión quedaría suspendida hasta que se introdujera un nuevo proyecto de ley, ya fuera para ponerla en vigor o para derogarla. El propósito de los referendos era, por lo tanto, instar a los legisladores a volver a pensar y reconsiderar las implicaciones de las nuevas leyes. Cuando se realizó la votación sobre la “Ley del Gran Hermano” fue la segunda vez que esta ley se activaba. Si bien el referéndum de marzo fue consultivo – es decir, no supuso que la ley fuera automáticamente derogada – el gobierno reconoció el resultado y declaró que la modificaría.

Pero tras estas dos derrotas para el establishment político, en julio el parlamento holandés votó a favor de **abolir** la Ley de Referéndum Consultivo. Algunos grupos de la sociedad civil prometieron montar un desafío legal a la decisión. Dio la impresión de que la élite política había experimentado con la apertura a una democracia más directa, solo para dar por terminado el experimento cuando los resultados no fueron de su agrado. **René Rouwette**, de la OSC holandesa **Kompass**, resume la insatisfacción que esto causó:

*Un tema importante de la tensión democrática actual en los Países Bajos se centra en los referendos. En los últimos años se hicieron referendos a nivel local y nacional. Casi todas las votaciones resultaron en victorias para las fuerzas anti-establishment. En el primer referéndum nacional que tuvo lugar en los Países Bajos, en abril de 2016, dos tercios de los votantes **rechazaron** el tratado de adhesión de Ucrania a la UE.*

*En consecuencia, la coalición gobernante decidió poner fin a las oportunidades de referéndum a nivel nacional. La gente está enojada por la falta de voluntad del gobierno para dar seguimiento a*

*los resultados del referéndum, así como por la decisión de suspender los referendos.*

Si los referendos son dejados de lado, la sociedad civil instará al gobierno a encontrar otras formas de escuchar a los ciudadanos, buscando su contribución para mejorar las leyes y respondiendo a las preocupaciones genuinas y a la insatisfacción que se han reflejado en los resultados de los referendos.

## MACEDONIA DEL NORTE: VOTOS INSUFICIENTES PARA UN CAMBIO DE NOMBRE

En tiempos de polarización política, cuando cuestiones relativas a la identidad nacional pasan a ser centro de disputa en tantos países, tal vez no resulte sorprendente que el nombre con que un país se designa a sí mismo se convierta en tema de intenso debate político. Durante mucho tiempo las aspiraciones de **Macedonia** de unirse a la UE y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fueron bloqueadas por el gobierno de **Grecia**. La región histórica de Macedonia incluye una gran parte de lo que hoy es Grecia, y esa región de Grecia también se llama Macedonia. Los líderes políticos de la independencia de Macedonia cultivaron una imagen nacional fuertemente arraigada en la historia antigua de la región, alimentando los temores griegos de un potencial reclamo sobre su región macedonia. Después de años de negociación entre los dos estados, en junio se llegó a un **acuerdo** en virtud del cual Macedonia cambiaría su nombre a República de Macedonia del Norte y Grecia ya no bloquearía sus intentos de integrarse a la UE y la OTAN.

En las calles, el acuerdo reveló descontentos a ambos lados de la frontera. En febrero se realizó en la capital de Macedonia, Skopje, una gran **protesta** contra la propuesta de cambio de nombre en la que participaron alrededor de 10.000 personas. Algunos grupos conservadores de la sociedad civil acusaron a Grecia de crímenes de guerra y genocidio contra los macedonios. En marzo, varios miles de personas se unieron a otra **protesta** en Skopje



El referéndum sobre el cambio del nombre de Macedonia por el de Macedonia del Norte, celebrado en septiembre, alimentó la división a ambos lados de la frontera con Grecia.

Crédito: Chris McGrath/Getty Images

contra todo cambio de nombre y acusaron a los principales partidos políticos de traicionar el interés nacional. En marzo se llevó a cabo otra **protesta** contra la ley sobre los idiomas, que extiende derechos lingüísticos a la minoría albanesa de Macedonia. Mientras tanto, en enero alrededor de 140.000 personas **protestaron** en la capital griega, Atenas, contra las negociaciones para cambiar el nombre de Macedonia. Hubo enfrentamientos entre manifestantes de extrema derecha y contra-manifestantes, y la policía usó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento cuando los manifestantes de extrema derecha les arrojaron piedras.

En ambos países se produjo una reacción violenta en junio, cuando se anunció el acuerdo. Una propuesta enardecida tuvo lugar fuera del parlamento de Macedonia. La policía utilizó gases lacrimógenos y **detuvo** a 26 personas después de que algunos manifestantes lanzaran piedras y fuegos artificiales; según se informó, nueve policías y cuatro manifestantes resultaron heridos. Las protestas continuaron frente al parlamento durante semanas, caracterizadas a menudo por las canciones patrióticas y las ondeantes banderas de Macedonia.

En septiembre el acuerdo fue sometido a un referéndum nacional en Macedonia. La votación estuvo precedida de **protestas** tanto a favor como en contra del cambio de nombre, incluida una campaña de boicot del referéndum. El principal partido de la oposición – VMRO-DPMNE, que había gobernado Macedonia durante varios períodos hasta que quedó implicado en un extenso **escándalo** de vigilancia ilícita – instó a sus partidarios a rechazar el acuerdo. La sociedad civil expresó **preocupación** por los llamamientos a la violencia, la desinformación y la retórica étnicamente cargada.

Como en algunas otras votaciones recientes, aumentaron las denuncias de una posible **interferencia rusa**, particularmente a través de las redes sociales, con miles de cuentas falsas que instaban a las personas a rechazar la iniciativa y boicotear la votación, incluso mediante la invocación del fantasma del control albanés en este país predominantemente eslavo. El gobierno de Rusia negó toda participación, pero su posición es claramente contraria a una mayor integración de los estados de su frontera occidental en la UE y la OTAN. Claramente, los estados occidentales también tenían interés en la decisión: se **informó** que la campaña por el sí recibió 8 millones de dólares de fondos del Congreso de los **Estados Unidos** para contrarrestar la campaña de desinformación de Rusia, se dijo que varias compañías dudosas que dicen ejercer influencia a través de las redes sociales fomentaron el sí y una serie de líderes europeos visitaron Macedonia para respaldar la propuesta de cambio de nombre. Lo que todo esto dejó en claro es que era mucho más que el nombre del país lo que estaba en juego: desde afuera, Macedonia era vista como un campo de batalla clave entre la determinación de la UE y de Rusia de mantener y extender sus respectivas esferas de influencia.

Pero llegado el momento, la propuesta cayó porque la **participación** fue de solo 35%. Aunque el 94% de quienes votaron apoyó el cambio de nombre, no se alcanzó el umbral de participación requerido, que era del 50%. La baja participación seguramente no reflejó tanto la pasividad de la ciudadanía, sino el éxito del boicot organizado por quienes se oponían al cambio.

Para muchos integrantes de la sociedad civil progresista que apoyaron la medida porque consideraban que el estrechamiento de las relaciones con la UE podría resultar en avances en los derechos fundamentales, las libertades democráticas y la lucha contra la corrupción, el referéndum fallido supuso un dilema. Las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno han mejorado desde que la Unión Socialdemócrata de Macedonia llegó al poder en mayo de 2017, en contraste con la postura **hostil** del gobierno anterior. Según informaron las OSC, desde entonces las oportunidades de consulta con el gobierno aumentaron, inclusive en torno de la posible **reforma** de la ley sobre el aborto y el **monitoreo** de los procesos de compras y licitaciones. También se **estableció** un grupo parlamentario para cooperar con la sociedad civil en materia de derechos de las personas LGBTQI. En marzo, el polémico programa de “des-sorosización” del antiguo gobierno **terminó**, y con él la investigación de larga data y la inspección financiera de al menos 20 OSC. En octubre, el gobierno **adoptó** una nueva estrategia para la cooperación con y el desarrollo de la sociedad civil.

En contraste con la estrategia positiva del gobierno, el VMRO-DPMNE continuó su campaña de **difamación** de la sociedad civil, **acusando** a grupos de la sociedad civil de estar involucrados en el lavado de dinero y de mantener vínculos corruptos con la Unión Socialdemócrata de Macedonia. Estos ataques afectaron la confianza de la ciudadanía en la sociedad civil: una **investigación** de 2018 indicó que el 60% de los macedonios veían a la sociedad civil en forma negativa. Sin embargo, en noviembre, Nikola Gruevski, antiguo líder y primer ministro del VMRO-DPMNE caído en desgracia, demostró que era él quien no resultaba confiable al **huir** del país para no cumplir una condena por corrupción de dos años y medio; irónicamente, fue recibido calurosamente en Hungría (**véase más abajo**)

por el primer ministro Viktor Orbán, quien normalmente adopta posiciones de línea dura para con los solicitantes de asilo. El hecho de que los líderes políticos de derecha y anti-derechos se apoyan y refuerzan recíprocamente no podía quedar más claro.

Muchos actores de la sociedad civil progresista y defensora de derechos tenían claro dónde estaban sus simpatías. Sin embargo, los eventos posteriores al referéndum dejaban a la sociedad civil en una posición vulnerable a acusaciones de estar del lado de las élites políticas y en contra del sentimiento público. En octubre, luego de que el referéndum no alcanzara el nivel de participación decisivo, el parlamento **votó** de todos modos seguir adelante con el cambio de nombre; el proceso llegó a su fin en enero de 2019, cuando una nueva votación parlamentaria **cambió** la constitución para modificar formalmente el nombre de país, pese a la vehemente oposición de VMRO-DPMNE y las continuas protestas. La batuta pasó luego a Grecia, que también debía ratificar el cambio; la continuidad de los desacuerdos casi **derribó** al gobierno en enero de 2019 y provocó una nueva **protesta** de hasta 100.000 personas en Atenas antes de que el parlamento griego **votara** ajustadamente en favor de aprobar el cambio de nombre.

En medio de estas condiciones de polarización y afirmación del sentimiento étnico y nacionalista, sin duda corresponde a la sociedad civil de lo que hoy es Macedonia del Norte, así como a sus contrapartes en Grecia, continuar cultivando relaciones más constructivas con el gobierno al mismo tiempo que fortalecer sus vínculos con los ciudadanos que todavía están enojados por el cambio y lo que representa para ellos, y que consideran que sus voces no han sido escuchadas. La sociedad civil tiene mucho trabajo por delante para sanar las divisiones que ha causado el proceso.

## BURUNDI: MÁS QUE UN REFERÉNDUM, UN SELLO DE GOMA

El año arrojó ejemplos de referendos donde la democracia directa produjo un cambio progresista, casos que resultaron en una derrota del establishment y otros que tuvieron el efecto de alimentar la división y la



polarización. Sin embargo, todos los anteriores deben ser distinguidos de los completamente ficticios, convocados exclusivamente para conferir una pátina de legitimidad al poder de turno. Durante 2018 **Burundi** ofreció el último episodio de una larga **serie** de referendos recientes de calidad cuanto menos dudosa, particularmente frecuentes en África y en América Latina, a través de los cuales se han borrado o modificado los límites constitucionales a los mandatos para permitir que los gobernantes permanezcan en el poder.

Un intento previo de desafiar la constitución tuvo lugar en **2015**, cuando el presidente Pierre Nkurunziza se presentó para un tercer mandato, desencadenando protestas que se enfrentaron a una brutal ola de violencia y represión del estado y de la milicia Imbonerakure, el brazo armado del partido gobernante. Se estima que 1200 personas murieron en la violencia subsiguiente y más de 400.000 fueron forzadas al exilio. Entre los **exiliados** había muchos activistas de la sociedad civil que huyeron para escapar de la represión; la mayoría de las OSC promotoras de derechos fueron cerradas. El referéndum de mayo tuvo el propósito de permitir que el presidente Nkurunziza cumpla dos mandatos adicionales de siete años después de 2020, lo que significaría que si lo deseara podría permanecer en el poder hasta 2034.

Antes de la votación, el activista de la sociedad civil de Burundi **Janvier Bigirimana** describía el contexto y los antecedentes del referéndum del modo siguiente:

*El presidente Pierre Nkurunziza ha buscado un tercer mandato durante mucho tiempo. Esto es ilegal y violatorio tanto de los Acuerdos de Arusha de 2000 como de la Constitución de 2005, resultante de dichos acuerdos, y ha enfrentado una oposición intensa y permanente desde 2015. Por eso decidió imponer sobre el pueblo de Burundi un referéndum para reformar la Constitución. El objetivo principal de este referéndum es entronizar a Pierre Nkurunziza como dictador-emperador de Burundi y negar todo acceso al poder a las minorías políticas y étnicas. Cabe señalar que su partido político recientemente le otorgó el título de «Eterno Guía Supremo», una forma poco disimulada de preparar a la opinión*

*pública para consagrar el culto a la personalidad. Pierre Nkurunziza está haciendo todos los esfuerzos posibles para convertirse en el próximo gobernante absoluto.*

*El régimen de Nkurunziza decidió convocar un referéndum porque se dio cuenta de que no podría obtener en la Asamblea Nacional la mayoría legislativa necesaria para aprobar una enmienda constitucional. No habían logrado aprobar una reforma constitucional en 2014 y no querían volver a fracasar. Dado que el organismo oficial a cargo de las elecciones no es independiente y no habrá observadores internacionales, hay razones para creer que el régimen no se detendrá hasta asegurar una victoria del voto por el “sí” para permitir el cambio constitucional.*

La violación de los Acuerdos de Arusha, que puso fin a la sangrienta y étnicamente divisiva guerra civil que duró de 1993 a 2005, no debe tomarse a la ligera. Como explica Janvier, los acuerdos contemplaron un estilo de gobierno muy diferente al de la autocracia en que Burundi se ha convertido, construido alrededor de la noción de **democracia consociacional**, en la cual habría espacio para que tanto la mayoría hutu como la minoría tutsi tuvieran voz, y se enfatizaría la búsqueda de compromisos:

*En una democracia frágil como la de Burundi, es especialmente importante tener en cuenta el doloroso pasado nacional reciente no resuelto para evolucionar hacia una gobernanza consensual. Esto no es lo que está ocurriendo actualmente: el régimen de Nkurunziza ha cometido varios delitos graves que actualmente están siendo investigados por la Corte Penal Internacional (CPI) y continúa promoviendo la ley de la fuerza en lugar de la fuerza de la ley.*

*La reforma constitucional ignora el principio del poder compartido con las minorías étnicas y políticas previsto en los Acuerdos de Arusha. Lo hace modificando la estructura gubernamental, extendiendo el mandato del presidente y reduciendo la mayoría requerida para aprobar leyes en la Asamblea Nacional.*



*La enmienda de la Constitución descarta por completo toda posibilidad de alternancia democrática en el poder en Burundi y convierte en letra muerta los estrictos límites al mandato presidencial establecidos en la Constitución. Al hacerlo, viola la estipulación de los Acuerdos de Arusha de que no se permitirá a ningún presidente ejercer el cargo por más de periodos.*

*La enmienda constitucional es en sí misma inconstitucional. El artículo 299 de la Constitución establece claramente que “no se puede adoptar ningún procedimiento de enmienda que comprometa la unidad nacional, la cohesión del pueblo burundiano, el estado laico, la reconciliación, la democracia o la integridad territorial de la República”. El referéndum se lleva a cabo en un contexto de crisis y corre el riesgo de polarizar aún más a los ciudadanos burundeses.*

*Además, si bien el artículo 297 de la Constitución permite al presidente someter un borrador de enmienda constitucional a referéndum, dicha votación simplemente tendría un valor consultivo y no sería legalmente vinculante. A pesar de la incuestionable claridad de esta disposición constitucional, el artículo 5 del Decreto no. 100/0027, emitido el 18 de marzo para convocar a los votantes a participar en el referéndum, la violó al especificar que el borrador de enmienda de la Constitución quedaría aprobado en caso de obtener la mayoría absoluta de votos.*

*En última instancia, las posibilidades de resolver la crisis pacíficamente a través de un acuerdo político negociado se están desmoronando rápidamente y la falta de diálogo, tolerancia y pluralismo político constituye una grave infracción al proceso democrático.*

*El régimen está haciendo gala de egoísmo e indiferencia ante la angustia de la población. En el contexto de una grave crisis política, socioeconómica y humanitaria, cabe preguntarse sobre la prioridad de un referéndum por sobre los desafíos que enfrenta actualmente Burundi.*

*Este referéndum ha sido diseñado en función de los intereses de Nkurunziza y el juego no es en absoluto transparente. Se organiza en un contexto de terror violaciones de derechos humanos, persecución de opositores y límites a todas las libertades civiles. Los defensores del voto por el “no” han sufrido diversas formas de persecución.*

*Más de 400.000 burundianos, incluidos miembros de la oposición política y líderes de la sociedad civil, viven actualmente en el exilio tras una gran crisis seguida de represión. Las negociaciones iniciadas por la Comunidad de África Oriental fracasaron porque el régimen de Nkurunziza nunca estuvo dispuesto a resolver la crisis a través de una solución política negociada. Las violaciones de derechos humanos contra los burundianos tanto dentro como fuera del país no ayudarán a Burundi a volver al camino de la democracia.*

De hecho, en condiciones de espacio cívico cerrado donde el disenso democrático es reprimido, ninguna elección podría ser libre o justa, y de hecho el referéndum generó una nueva andanada de **represión**. En enero, alrededor de 60 personas fueron **arrestadas** por pedir a la ciudadanía que rechazara la propuesta. En mayo, las emisoras de la BBC y Voice of America en Burundi fueron **obligadas a cerrar**.

Antes de la votación se reportaron casos de personas **obligadas** a registrarse, especialmente en las zonas rurales, por la fuerza policial y la milicia. En un contexto en que era inimaginable votar contra el presidente, el objetivo del estado consistió en asegurarse la legitimidad mediante el logro de una alta participación; según se **informó**, la participación final alcanzó un poco creíble 96%, con un 73% de los votos a favor. El temor a las repercusiones pareció ser un factor clave detrás de la elevada participación, ya que **se informó** que había habido personas asesinadas o atacadas por no poder demostrar que habían votado o por ser miembros de la oposición. Antes de la votación, también hubo advertencias siniestras de figuras importantes, incluido el presidente, acerca de las consecuencias negativas que enfrentaría quien intentara impedir que el presidente se saliera con la suya. Tras el resultado, los partidos de la oposición dijeron que montarían un desafío legal del

resultado, pero en un estado cada vez más organizado en torno al gobierno personal del presidente Nkurunziza, sus posibilidades de éxito eran escasas.

La represión **continuó** después del referéndum, que presumiblemente confirió al presidente Nkurunziza la certeza de que podrá continuar gobernando como lo desee: el gobierno celebró el resultado con la suspensión de las operaciones de varias OSC. En diciembre, envalentonado, el gobierno **ordenó** al Consejo de Derechos Humanos de la ONU cerrar su oficina en Burundi. Tras convertirse en el **primer país** en **abandonar** la CPI en 2017 (**véase sección 4**), la medida indicó una hostilidad creciente al escrutinio internacional.

Para combatir esta tendencia, concluye Janvier, deben **alentarse** mayores esfuerzos internacionales para que el presidente Nkurunziza rinda cuentas:

La comunidad internacional debe reconocer lo que está sucediendo en Burundi. El cambio desde una relativa democracia a una dictadura absoluta puede tener serias repercusiones para el futuro de la democracia en África, ya que otros líderes africanos podrían verse tentados de experimentar siguiendo el ejemplo de Pierre Nkurunziza.

El riesgo de atrocidades masivas, incluido el genocidio, es muy alto. Todas las precondiciones necesarias están presentes, incluida la adopción de discursos de odio por las más altas autoridades estatales y la existencia de una milicia que ha reemplazado a las instituciones estatales. En nombre de la **responsabilidad de proteger**, la comunidad internacional debe tomarse en serio la situación en Burundi y planificar medidas coercitivas efectivas y significativas para evitar que el régimen de Nkurunziza cometa un daño irreparable y lograr que, en cambio, acceda a negociar con sus oponentes de manera sincera y sin condiciones.

## **BOLIVIA: CONSECUENCIAS DE UNA VOTACIÓN DIVISIVA**

Las consecuencias de un referéndum divisorio, convocado con la intención de legitimar la continuidad del presidente en el gobierno pero resultante en su rechazo, se siguen haciendo sentir en **Bolivia**. El presidente Evo



Morales perdió el referéndum de febrero de 2016, con el cual buscaba modificar la constitución para presentarse a elecciones para un cuarto mandato, pero simplemente ignoró el veredicto y siguió adelante con sus planes. Desde entonces ha habido **protestas** encolumnadas tras la bandera del movimiento 21-F, rótulo que conmemora la fecha del referéndum, para instarlo a cambiar de rumbo y respetar el veredicto popular. Las protestas continuaron en 2018, cuando en el segundo aniversario del referéndum la ciudadanía salió a las calles para **manifestarse** tanto a favor como en contra del plan del presidente Morales de presentarse nuevamente a elecciones. Las protestas se desarrollaron en una atmósfera tensa, con algunos **enfrentamientos** entre los dos campos.

**Javier Gómez Aguilar**, del **Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario**, describe el contexto en que se produjeron estas protestas:

*Nuestro marco normativo es el de una democracia liberal multipartidista con elecciones periódicas y división de poderes; sin embargo, se observa la tendencia, y no solo en Bolivia, hacia un régimen de partido dominante y concentración personalista del poder. El Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales es un partido fuertemente arraigado en los sectores populares, que a lo largo de 12 años en el poder ha ido copando el espacio de la sociedad civil. Lo ha hecho a través de mecanismos muy diversos: criminalización de la protesta, persecución de opositores, división de organizaciones sociales, presión sobre organizaciones de la sociedad civil (OSC), acoso impositivo o relativo al cumplimiento de normas laborales, compra de medios de comunicación, retaceo de publicidad oficial a medios independientes, e incluso vigilancia en las redes sociales.*

*El uso de estos mecanismos se ha acentuado a medida que el partido de gobierno, pese a continuar siendo el más importante, ha perdido apoyo. Como el gobierno controla los cuatro poderes del Estado, contrarresta con estos mecanismos su progresiva pérdida de legitimidad. El descontento ha aumentado y también lo han hecho las protestas, pero no en igual proporción. El gobierno sigue controlando la calle y conserva la capacidad de movilizar a sus partidarios, y en particular a funcionarios públicos y poblaciones que reciben transferencias o subsidios del Estado.*

*El referéndum de 2016 fue convocado por el propio presidente con la intención de conseguir luz verde para reformar la Constitución – una Constitución que había sido aprobada bajo su gestión – de modo de habilitar una nueva reelección. El mecanismo del referéndum entrega a la ciudadanía la última palabra, de modo que el tema de la reelección debería haber quedado cerrado con triunfo del NO y el presidente no debería poder repostularse.*

“

EL MECANISMO  
DEL REFERÉNDUM  
ENTREGA A LA  
CIUDADANÍA LA  
ÚLTIMA PALABRA, DE  
MODO QUE EL TEMA  
DE LA REELECCIÓN  
DEBERÍA HABER  
QUEDADO CERRADO  
CON EL TRIUNFO DEL  
NO.

”



Bolivia ha permanecido polarizada desde que en 2016 el presidente Evo Morales convocara y perdiera un referéndum para habilitar una nueva reelección, y luego ignorara el veredicto popular.

Crédito: Marcelo Pérez Del Carpio/Anadolu Agency/Getty Images

*Tras 12 años en el poder, la disputa por la reelección refleja una gran fragilidad institucional del partido gobernante. La prohibición de la reelección no equivale a una proscripción del partido: el MAS podría presentar a otro candidato. Pero Evo Morales hoy no tiene reemplazo porque, en vez de asumir tempranamente que no habría reelección y producir liderazgos alternativos, el gobierno se dedicó a buscar vías alternativas para superar la prohibición.*

*Como el NO ganó por muy escaso margen, se ha llegado a afirmar que “casi” fue un empate, y que por lo tanto el resultado no fue concluyente. En el terreno judicial, dos diputados oficialistas presentaron un reclamo de inconstitucionalidad invocando el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene un estatus superior a la Constitución Nacional. Afirman que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el pleno derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, la prohibición de la reelección estaría violando los derechos políticos del presidente.*

*Apenas días antes de terminar su mandato, en diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional hizo lugar a la demanda de los diputados, **autorizando** a Evo Morales a buscar la reelección. Hay que recalcar que los jueces del Tribunal Constitucional son electos y cumplen mandatos de cinco años, y todos ellos son hoy funcionarios públicos, o sea que no se trata de un poder independiente. En estos días estamos **esperando** que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el tema.*

*Recientemente una de las marchas de universitarios terminó con el **incendio** del frontis del Tribunal Electoral en Santa Cruz, que según los estudiantes fue provocado por **infiltrados** que también provocaron otros destrozos. El gobierno enseguida detuvo a los dirigentes y uno de ellos fue procesado en un solo día: le dieron proceso abreviado, se declaró culpable y lo sentenciaron a tres años de prisión en suspenso – algo extraordinario en un sistema judicial*

*muy lento, que tiene un 80% de presos sin sentencia. El muchacho quedó libre, con medidas sustitutivas, pero el objetivo de generar temor en los sectores movilizados se ha cumplido. La idea es mostrar que, si te movilizas, puedes terminar en la cárcel.*

Esta no fue la única protesta de 2018. Cuando Bolivia fue sede de los Juegos Suramericanos en mayo y junio, una mujer fue **acosada** y amenazada por usar una camiseta 21-F e iniciar el canto de 'Bolivia dijo no'. En el Día de la Independencia en agosto, se impidió a los simpatizantes del 21-F realizar una protesta en la ciudad de Potosí, donde el presidente Morales estaba dando un discurso, lo que provocó algunos enfrentamientos con la policía. Los manifestantes dijeron que, en respuesta, iniciarían acciones legales contra el jefe de policía. Otras protestas se llevaron a cabo en noviembre y diciembre, y una manifestante, **Suleydi Estivariz**, falleció luego de caer y golpear su cabeza durante una refriega con efectivos policiales. En otra protesta del 21-F en diciembre, nueve personas fueron **arrestadas** por bloquear una carretera. La represión no se limitó a las protestas del 21-F; también se tradujo en acciones violentas contra una serie de huelgas, entre ellas la de los **trabajadores de la salud** (*véase sección 1*). En mayo, una protesta estudiantil fue brutalmente aplastada, con el saldo de un estudiante, **Jonathan Quispe Vila**, muerto por una bala disparada por las fuerzas de seguridad. El agente acusado de los disparos fue puesto en libertad cuando un juez dictaminó que no había pruebas suficientes contra él.

Haciendo oídos sordos al disenso, la candidatura del presidente Morales avanzó con su participación en las elecciones primarias celebradas en enero de 2019. Javier describe la polarización de la sociedad boliviana, donde el apoyo que el presidente Morales continúa recibiendo está siendo puesto a prueba por su determinación evidente de presentarse nuevamente:

*Hay manifestaciones y contramanifestaciones, expresiones a favor y en contra. Evo Morales conserva un piso electoral muy importante, en particular en la capa de funcionarios públicos. Hay sectores organizados, con muchos recursos estatales, que se*

*movilizan sistemáticamente contra toda movilización en contra de la reelección. Por su parte, las llamadas plataformas ciudadanas – grupos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, sectores de clase media – se han **movilizado** con el slogan 'Bolivia dijo no', en defensa del resultado del referéndum.*

Como lo sugiere lo anterior, el presidente Morales está perdiendo el **apoyo** de al menos una parte de los que alguna vez lo apoyaron con entusiasmo sobre la base de su historial económico y social. El proceso boliviano actual parece ser ante todo un caso de energías desperdiciadas. Ante los esfuerzos crecientes para asegurar la continuidad del presidente Morales en el gobierno y reprimir las expresiones de disenso de quienes la rechazan, se hace difícil no pensar en el costo de oportunidad: en lo que se podría haber logrado si todos estos esfuerzos y energías se hubieran colocado en la promoción de mayores cambios sociales y económicos progresistas en Bolivia.

## ECUADOR: EL REGRESO DE LOS LÍMITES A LA REELECCIÓN

En contraste y por una vez, un **referéndum** constitucional, celebrado en **Ecuador** en febrero, reintrodujo límites a la reelección presidencial. El expresidente Rafael Correa había eliminado los límites a los mandatos en 2015, antes de entregar el mando a su vicepresidente Lenin Moreno; según **se informó**, se preparaba para volver a presentarse la próxima vez. Pero la propuesta de reintroducir límites a la cantidad de mandatos formó parte del proceso de ruptura del presidente Moreno con las decisiones de su antecesor. La propuesta **se aprobó** de manera abrumadora, por 64% a favor y 36% en contra, al igual que otras seis preguntas sometidas a votación, incluida una sobre si excluir a las personas condenadas por corrupción de la participación política y otras para reformar las estructuras de participación estatal y fortalecer las regulaciones ambientales.

**Daniel Barragán**, del **Centro Internacional de Investigaciones de Ambiente y Territorio** de la Universidad de Los Hemisferios, explica lo que estaba en juego:



El **referéndum** abordó temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la eliminación de la reelección indefinida, la protección a la niñez y la no prescripción de los delitos sexuales, y la prohibición de la minería en centros urbanos y zonas intangibles.

El referéndum produjo un cambio institucional importante, en particular a raíz de la reforma del CPCCS, por las implicaciones que han tenido hasta la fecha en términos de la evaluación y **cesación** de alrededor de 27 autoridades de control, y los nuevos nombramientos – algunos temporales y otros definitivos – para esos cargos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional. El CPCCS fue establecido por la Asamblea Constituyente de 2008 y concebido como un ‘quinto poder’ encargado de auditar a los mecanismos de control, alentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. También desempeña un papel en el nombramiento de funcionarios, lo que lo convirtió en blanco de fuertes críticas.

Sobre la legalidad de lo actuado en este punto hay diversas visiones; lo que sí es cierto es que la gestión del CPCCS transitorio cuenta, desde mi percepción, con respaldo social y ciudadano.

El referéndum formó parte de un giro hacia un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades democráticas bajo el nuevo liderazgo de Ecuador, que ha propiciado la apertura del espacio cívico. Daniel pone el resultado del referéndum en contexto:

*En los últimos dos años se percibe en Ecuador un ambiente de mayor libertad y respeto a estos derechos. El cambio se ha expresado en una política gubernamental de apertura al diálogo y en reformas tanto de las regulaciones que se aplican a las OSC como de la Ley Orgánica de Comunicación.*

*Ya no se considera a la comunicación como un servicio público sino como un derecho, se amplía la conceptualización del derecho*

*a la libertad de expresión, se elimina el control a los medios y se promueve su autorregulación, se deroga la figura del **linchamiento mediático**, que penalizaba la difusión reiterada de información para desprestigiar o destruir la credibilidad de alguien, y se eliminan las sanciones administrativas, entre otras cosas.*

*Si bien no necesariamente se ha logrado llegar a las regulaciones ideales y el margen de discrecionalidad en la regulación es aún un tema pendiente, los cambios apuntan en la dirección correcta.*

*Desde mi punto de vista hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas. Prueba de ello es la existencia de un ambiente de diálogo, de tolerancia a la opinión contraria y de respeto al Estado de Derecho.*

*Un ejemplo claro del progreso realizado es la **decisión de sumar al Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto**, como una de las medidas no sólo de inclusión ciudadana sino también de lucha contra la corrupción. Para Ecuador es fundamental avanzar en la generación de un clima de confianza sobre la base de la transparencia del accionar de las autoridades y funcionarios, a la vez que de una lógica de corresponsabilidad del ciudadano para con lo público. En este momento estamos avanzando en la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Por otra parte, la semana pasada el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito entregó al alcalde el Plan de Acción de la ciudad para su implementación en 2019. Estoy participando en ambos procesos y puedo dar fe de que cuando hay voluntad política el trabajo articulado entre distintos sectores y actores es posible.*

Por supuesto, aún **quedan** muchos desafíos, especialmente en relación con los déficit de libertad de expresión, pero el resultado del referéndum produjo un cambio refrescante y supuso un paso adicional en la dirección correcta, hacia el reconocimiento efectivo de los derechos de la sociedad civil en Ecuador.



La ciudadanía protestó contra Jair Bolsonaro en la víspera de las elecciones de octubre.

Crédito: Darío Oliveira/NurPhoto vía Getty Images

## HACIA MEJORES REFERENDOS

Lo que queda claro a partir de las diversas formas de referéndum observadas en 2018 es que por sí misma la celebración de referendos dice poco sobre el estado de las libertades democráticas en un contexto dado. Lo que importa es **porqué** los referendos son convocados y quién los convoca: si responden a demandas de abajo hacia arriba identificadas y articuladas por los ciudadanos, o son impuestos desde arriba hacia abajo por la clase política, a menudo en un intento de conferir legitimidad a una decisión de las élites. También importa sobremanera si los referendos se llevan a cabo en contextos de espacio cívico abierto o cerrado.

Curiosamente, en el trayecto de 2018 a 2019, y en vistas de que la política del **Reino Unido** continuaba polarizada, ensimismada y trabada por las consecuencias de los resultados del referéndum de 2016 para abandonar la UE, comenzó a tomar vuelo la sugerencia de adoptar un modelo de asamblea ciudadana como el de Irlanda para ofrecer una salida al impasse. Ello indica que de hecho existen buenos modelos que podrían adaptarse a otros lugares. Pero solo cuando el espacio para la sociedad civil permanece abierto es posible mantener un debate genuino y expresar el disenso democrático de una manera respetuosa que permita construir puentes tras el recuento de los votos. La participación de la sociedad civil habilitada por un espacio cívico abierto es el ingrediente esencial para que los referendos sean vehículos de una democracia deliberativa ampliada.

## EL POPULISMO DE DERECHA EN MARCHA BRASIL: UN RETROCESO TÓXICO

En una segunda vuelta electoral celebrada a fines de octubre, **Brasil** eligió presidente al ex militar y populista de extrema derecha **Jair Bolsonaro**. Bolsonaro compitió sobre una plataforma anti-derechos particularmente agresiva hacia las mujeres, las personas LGBTQI y los pueblos indígenas, y

prometió retirarse de los principales acuerdos internacionales sobre **cambio climático** y **migraciones** (véase sección 4).

Brasil llevaba largo tiempo inmerso en una crisis política, económica y social alimentada por la exposición de un escándalo de corrupción masiva que destruyó la confianza en el gobierno, las instituciones políticas y los partidos establecidos. Bajo sucesivas administraciones del Partido de los Trabajadores (PT), Brasil logró ciertos avances económicos y sociales, pero al mismo tiempo aumentaron los descontentos por el costo de la vida, la desigualdad y la corrupción, que provocaron protestas a gran escala en **2013** y **2014**. Se fue tornando evidente que todo el sistema político y económico estaba estructurado en torno a la corrupción: la empresa petrolera estatal Petrobras y el gigante de la construcción Odebrecht quedaron colocados en el centro de lo que pasó a conocerse como la operación **Lava Jato** ('lavadero de autos'). Sucesivas revelaciones expusieron la existencia de una elaborada arquitectura de corrupción diseñada para financiar partidos y campañas en todo el espectro político; sin embargo, el impacto político del escándalo afectó sobre todo al PT y a sus líderes: en 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue sometida a juicio político y destituida de su cargo, y en abril el ex presidente del PT, Luis Inácio 'Lula' da Silva, que encabezaba las encuestas de intención de voto para las elecciones de octubre, fue sentenciado a 12 años de prisión, tras ser declarado culpable de lavado de dinero y corrupción. La sentencia lo dejó en la cárcel y **fuera** de la carrera presidencial.

Tanto el juicio político y la destitución de Dilma Rousseff como el juicio de corrupción contra Lula fueron vistos por muchos actores de la sociedad civil como políticamente motivados, dado que muchos de sus acusadores también estaban implicados en denuncias de corrupción pero escaparon al castigo. Las sospechas de parcialidad política no hicieron sino aumentar cuando el principal fiscal de la operación Lava Jato, el juez Sergio Moro, fue **designado** por el presidente electo Bolsonaro como su ministro de Justicia.

A lo largo del proceso, cada evento fue recibido con protestas y contra-protestas. Entre ellas se destacaron las protestas contra la corrupción en

**2015**; contra el enjuiciamiento y el **reemplazo** de Dilma Rousseff por el vicepresidente de centroderecha Michel Temer, que muchos denunciaron como un golpe de estado; y, en **2017**, contra las políticas de austeridad impuestas por el gobierno de Temer y ante las revelaciones de la participación de su partido en actos de corrupción. Las protestas enfrentaron una **creciente** represión por parte de las autoridades.

El clima era, por lo tanto, de desafecto y polarización. En este contexto, la elección de Jair Bolsonaro, quien se lanzó a la campaña como el candidato mayoritariamente desconocido de un **partido pequeño**, podría ser interpretada como una reacción anti-establishment contra la corrupción.

La campaña de Bolsonaro fue descrita como la más barata de la historia, entre otras cosas porque se basó en gran medida en las redes sociales, en vez de en la costosa propaganda en los medios convencionales. Hizo un uso intensivo de **WhatsApp**, utilizado por cerca de dos tercios de los votantes brasileños, enviando mensajes de campaña directamente a millones de teléfonos celulares. Según se informó, los números de teléfono fueron **obtenidos ilegalmente** de las cuentas de Facebook de los usuarios y utilizados para enviar mensajes masivos por WhatsApp. Esta plataforma, que transmite mensajes cifrados no sujetos a ninguna verificación de datos o filtro para el discurso de odio, permitió la **propagación** descontrolada de información falsa, intolerante e intencionadamente engañosa.

Según Agência Lupa, un **servicio de verificación de datos**, solo 50 de las imágenes más compartidas en 347 grupos de WhatsApp fueron factualmente correctas. Durante el fin de semana del 6 al 7 de octubre, cuando se celebró la primera ronda electoral, 12 piezas de información errónea fueron compartidas 1,2 millones de veces. La campaña de Bolsonaro hizo un uso similar de Facebook pero encontró límites en las políticas de la compañía, que resultaron en el cierre de cientos de cuentas falsas y páginas que difundían información errónea, por ejemplo retratando al candidato del PT, Fernando Haddad, como comunista y afirmando que distribuiría 'kits homosexuales' para 'convertir' a niños de escuela. Los servicios de



verificación de datos fueron a su vez **blanco de ataques** y acusaciones de sesgo político por parte de grupos de derecha.

**Paula Raccanello Storto**, del Centro de Estudios Avanzados del Tercer Sector de la Universidad Católica de San Pablo, describe el papel que desempeñó la desinformación en la campaña del presidente Bolsonaro:

*Bolsonaro fue elegido sobre la base de un programa de gobierno superficial. No participó en ningún debate con los otros candidatos y sus declaraciones públicas a redes de televisión amigas y por Twitter transmitieron un discurso desarrollista que era liberal con respecto a la economía y conservador en relación al avance de los derechos, y que tuvo eco en la sociedad brasileña contemporánea. Sus partidarios difundieron masivamente noticias falsas a través de las redes sociales para atacar agendas consideradas como progresistas, y en particular a aquellas relacionadas con la protección ambiental y los derechos de las minorías.*

Jair Bolsonaro tiene un largo historial de declaraciones anti-derechos profundamente desagradables. Su discurso de odio, por las redes sociales y en sus apariciones de campaña, se dirigió especialmente contra las mujeres, las personas LGBTQI y otros grupos excluidos. Con el respaldo de la poderosa bancada evangélica brasileña y en busca del voto de los grupos religiosos conservadores, Jair Bolsonaro prometió derrotar a la llamada “**ideología de género**”, una expresión cada vez más **utilizada** en todo el mundo para demonizar los intentos de promover los derechos de las mujeres y la población LGBTQI y restaurar los **valores cristianos**. Bolsonaro hizo campaña contra el **derecho al aborto**, **prometiendo** restringir los fondos para los grupos de la sociedad civil que lo promueven, y arremetió contra el matrimonio entre **personas del mismo sexo**.

La campaña electoral también estuvo marcada por la **hostilidad** hacia los medios independientes que criticaron a Jair Bolsonaro. Mientras tanto, en respuesta a la violencia urbana y la inseguridad, Bolsonaro adoptó una extrema posición **pro-armas** y **prometió** habilitar a la policía para disparar

y eliminar criminales a voluntad. En el país **más letal del mundo** por el activismo ambiental, su elección suscitó preocupación entre los **defensores del medio ambiente**, y particularmente entre aquellos que luchan contra los poderosos intereses responsables de la deforestación. Como era de esperar, el discurso de odio alimentó la violencia, tal como lo señala Paula:

*La violencia que impregnó la última campaña electoral fue sorprendente. Una encuesta reveló que en solo diez días de la campaña hubo al menos 50 ataques, la mayoría de ellos perpetrados por partidarios de Bolsonaro contra sus oponentes. Esta legitimación de la violencia es un hecho particularmente preocupante en un país como Brasil, que tiene una sociedad violenta y un número récord de feminicidios y asesinatos de líderes ambientales y personas LGBTQI, y está marcado por la violencia policial y las condiciones precarias de encarcelamiento, con un sistema que encarcela principalmente a personas negras y pobres.*

La victoria de Jair Bolsonaro envalentonó aún más a los grupos anti-derechos y a los partidarios de la extrema derecha en Brasil. Se reportaron crecientes ataques a la libertad de expresión, particularmente en las redes sociales. Más de 20 universidades **sufrieron** allanamientos de la policía militar, que confiscó materiales de enseñanza por motivos ideológicos. Paula describe otros impactos inmediatos sobre las OSC:

*Ya sabíamos lo que Bolsonaro pensaba de las OSC. Durante la campaña dijo que si llegaba a ser presidente no habría dinero público para las OSC y que “esos buenos para nada tendrán que trabajar”. En el mismo discurso también dijo que “no habrá un solo centímetro de tierra demarcada para reservas indígenas o comunidades quilombolas”, asentamientos establecidos por personas de origen africano, la mayoría de ellos esclavos fugitivos. Todas estas declaraciones fueron claramente contrarias a la agenda histórica de la sociedad civil organizada de Brasil, que se siente amenazada no solo por las posibles acciones del gobierno, sino también por*

“

EL NUEVO GOBIERNO  
HA LLEGADO PARA  
IMPLANTAR UNA  
REGRESIVA AGENDA  
ANTI-DERECHOS.

”

*el posible ascenso de actores hostiles dentro de la sociedad, para quienes las declaraciones del presidente han constituido un incentivo para usar la violencia física o simbólica contra las organizaciones que defienden esas causas. El nuevo gobierno ha llegado para implantar una regresiva agenda anti-derechos.*

*Así que las decisiones que tomó Bolsonaro en sus primeras semanas eran predecibles, aunque a veces nos resultó difícil creer lo que estábamos viendo.*

*Tras su elección, Bolsonaro nombró ministro de Asuntos Exteriores a alguien que había declarado que no cree en el cambio climático y que lo considera un complot marxista. Al frente del llamado Ministerio para las Mujeres, la Familia y los Derechos Humanos, colocó a una pastora evangélica que se opone públicamente al aborto por razones religiosas. La tarea de demarcar las tierras indígenas fue trasladada de la Fundación de Apoyo Indígena al Ministerio de Agricultura, una agencia con intereses totalmente opuestos a la demarcación de tierras. Después de dar marcha atrás en la decisión previamente anunciada de fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura, la cual causó muchas controversias y reacciones negativas, **celebró** el hecho de que las organizaciones ambientales criticaran su decisión de nombrar al frente del Ministerio de Medio Ambiente a un representante de intereses agroindustriales que **declaró** que el calentamiento global era “un problema secundario” y **descalificó** las multas ambientales como formas de “persecución ideológica”.*

*Una de las primeras medidas del nuevo ministro de Medio Ambiente apuntó contra las organizaciones ambientalistas. El ministro emitió una resolución que **suspendió** por 90 días los acuerdos y asociaciones con OSC. Pero el desarrollo sostenible es una prioridad de la agenda global y está consagrado en la Constitución Federal de Brasil y en la legislación nacional, por lo cual no corresponde a ninguna administración particular decidir si el modelo de desarrollo nacional escogido incluye la preservación del medio ambiente y el cuidado de su población.*

*Además, desde 2014 Brasil tiene una ley que define la relación legal entre el estado y la sociedad civil, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional cuando Jair Bolsonaro era diputado nacional. Esta ley no prevé la posibilidad de una suspensión en la forma en que esta se hizo. La decisión del ministro de Medio Ambiente violó los principios de seguridad jurídica y eficiencia administrativa.*

*Una de las primeras **medidas** del gobierno de Bolsonaro, la Medida Provisoria (MP) 870/2019 sobre la estructura de la nueva administración federal, confió a la Secretaría de la Presidencia el*

*nuevo rol de “supervisar, coordinar, monitorear y hacer seguimiento de las actividades y acciones de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales dentro del territorio nacional”.*

*Bajo el estado de derecho democrático, se asume que los individuos son libres de reunirse y asociarse, y que pueden realizar cualquier actividad lícita sin supervisión estatal. El texto de la MP 870 revela un claro desprecio por los principios constitucionales relativos a los derechos a la libertad de asociación y a la libre empresa. La iniciativa de crear estructuras gubernamentales con amplios poderes sobre las OSC también es riesgosa porque puede llevar al establecimiento de una arquitectura indebida de control estatal sobre las actividades privadas. En ese sentido, la MP 870 es inconstitucional y debería ser modificada por el Congreso Nacional.*

Sin embargo, la marea no se movió en una sola dirección, y las voces progresistas de la sociedad civil respondieron allí donde pudieron. En respuesta a los ataques a las universidades, académicos de todo el mundo **firmaron una carta** en apoyo de las universidades brasileñas y sus trabajadores. Antes de la elección, las mujeres brasileñas **se movilaron** en grandes cantidades, tanto en internet como en las calles, bajo el lema **#EleNãO** (#EINo), aunque claramente sus esfuerzos no tuvieron el éxito deseado. Poco después de su lanzamiento, el movimiento de mujeres contra Jair Bolsonaro llegó a los dos millones y medio de miembros en Facebook. En septiembre, el movimiento **#EleNãO** realizó **protestas masivas** en todo Brasil y en muchas ciudades del mundo. En tanto que movimiento de base, la campaña **#EleNãO** demostró cómo las voces progresistas pueden construir comunidades de apoyo, aun frente a los **hackeos** y la **desinformación** destinados a disminuirlas o desacreditarlas.

La situación es claramente volátil, y el mismo proceso electoral que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia resultó en la primera elección de una mujer indígena al Congreso brasileño. Joênia Wapichana, defensora de los derechos de la tierra y los pueblos indígenas, defiende el medio ambiente

contra los poderosos intereses de los agronegocios. Además, el estado de Bahía, con una población aproximadamente 83% afrobrasileña, eligió por primera vez a una mujer negra, Olivia Santana, como diputada estadual. En San Pablo, por primera vez una mujer trans, Érica Malunguinho, fue elegida como representante estadual. Y aunque no se ha avanzado en la investigación del asesinato, producido en marzo, de la defensora de derechos humanos, feminista y concejala de Río de Janeiro **Marielle Franco**, tres colegas de Marielle – Mónica Francisco, Dani Monteiro y Renata Souza – fueron elegidas como representantes estaduais en Río de Janeiro y una cuarta, Talíria Petrone, fue elegida para el Congreso Nacional.

Solo cabe esperar que el gobierno de Bolsonaro profundice la regresión de los derechos humanos fundamentales. La escala del resultado electoral fue devastadora para muchos actores de la sociedad civil brasileña. Pero ahora es necesario que la sociedad civil se recupere para dar las batallas clave que le esperan en 2019 y más allá, en defensa de los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI y los pueblos indígenas, para proteger la región amazónica del aumento de la explotación comercial prometida por el presidente Bolsonaro y para defender los derechos de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. El triunfo electoral de Jair Bolsonaro forma parte de un proceso más amplio de ascenso de líderes de mano dura que se presentan a sí mismos como desafiantes del orden establecido, como lo dejó en claro el cultivo de sus vínculos con gobernantes de mano dura tales como **Viktor Orbán** en Hungría y **Benjamín Netanyahu** en Israel. Pero la sociedad civil progresista de Brasil también puede aprender de las estrategias de resistencia adoptadas en otros lugares a la vez que idear nuevas respuestas que otros puedan adoptar. Paula concluye con una reflexión sobre lo que está haciendo la sociedad civil brasileña para dar respuesta y sobre las conexiones internacionales que podría cultivar:

*La sociedad civil está alerta, siguiendo de cerca todas las decisiones tomadas por el nuevo gobierno y organizándose para tratar de revertir las medidas que son contrarias a los derechos humanos y al medio ambiente.*



*Poco después de la publicación de la resolución del Ministerio de Medio Ambiente sobre las alianzas con la sociedad civil, en vista de sus muy negativas repercusiones y la movilización de la sociedad civil, el ministro dio marcha atrás y emitió una nueva orden que estableció que la ejecución de los contratos ya en curso continuaría y solo los nuevos contratos quedarían a espera de aprobación.*

*La sociedad civil se movilizó contra la decisión de establecer un sistema de monitoreo estatal de las OSC establecido en la MP 870, y un conjunto diverso y representativo de organizaciones brasileñas firmó una carta abierta **solicitando** la rectificación de MP 870 para alinearla con la Constitución.*

*Una mayor coordinación de las organizaciones brasileñas con mecanismos internacionales públicos y privados, incluidos los pertenecientes al sistema de justicia, ayudaría a garantizar el monitoreo y la visibilidad de la situación brasileña, así como el acceso a los tribunales internacionales, de ser necesario.*

*En este momento es esencial ampliar nuestros intercambios con la sociedad civil internacional para comprender y buscar respuestas para enfrentar los avances de estas fuerzas de derecha conservadora que simplemente niegan en las redes sociales el valor de los mecanismos multilaterales, la necesidad de revertir el cambio climático y los derechos de las minorías. Lo que está sucediendo en Brasil debe ser colocado en contexto, ya que es parte del mismo movimiento global que está causando reveses en la agenda de derechos en otros lugares, a través de un conjunto de prácticas represivas y políticas económicas liberales que no toman en cuenta los límites que los derechos humanos y las protecciones ambientales colocan sobre el proceso de desarrollo.*

## ITALIA: POPULISTAS EN EL PODER

Italia, un miembro fundador de la UE, demostró hasta qué punto ha aumentado el impulso populista de derecha en el corazón de Europa:

en marzo, el euroescéptico y populista Movimiento Cinco Estrellas obtuvo la mayoría de los escaños, en una elección general **signada** por la fragmentación política, la desafección, una crecientemente intensa retórica anti-inmigración (**véase sección 2**), el rechazo de los partidos establecidos y pronunciados contrastes entre el comportamiento electoral de diferentes grupos demográficos, así como entre el rico norte italiano y el sur más pobre. La coalición gobernante de centroizquierda fue empujada a un distante tercer lugar. Tras dos meses de negociaciones, se formó un nuevo gobierno de coalición entre Cinco Estrellas y el partido populista de derecha Liga del Norte, fundado para hacer campaña por la independencia del norte del país. Los dos nuevos socios están unidos, ante todo, por lo que rechazan: la inmigración, la UE, la sociedad civil y las libertades de los medios de comunicación. Todos ellos han estado bajo ataque desde que el nuevo gobierno accedió al poder.

**Silvia Stilli**, de **AOI**, la principal plataforma de sociedad civil de Italia, reflexiona sobre los fenómenos que podrían explicar el giro populista de Italia. En particular, subraya el alejamiento gradual respecto de los valores progresistas y pluralistas que motivan a la mayoría de la sociedad civil italiana:

*Las razones de la situación actual no se encuentran solamente en el último año, sino más bien en los últimos diez años. Las relaciones entre los partidos políticos y la sociedad civil se han ido aflojando cada vez más, por lo que las oportunidades de participación han disminuido. Ha habido un distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad civil.*

*Si bien la sociedad civil adoptó un enfoque unificado para abordar la pobreza y la crisis económica, los partidos políticos, incluidos los partidos progresistas, trataron estos temas como si fueran cuestiones puramente económicas que requieren respuestas meramente domésticas. La ciudadanía quedó atrapada entre estas dos perspectivas completamente diferentes sobre cómo lidiar con la situación.*



En diciembre, la ciudadanía protestó contra las políticas sociales y migratorias del gobierno italiano en una manifestación en Roma.

Crédito: Stefano Montesi/Corbis vía Getty Images

Otro elemento a destacar es la enorme movilización que ha ocurrido alrededor del Movimiento Cinco Estrellas, que juntó a gran cantidad de personas en torno de la necesidad de cambio. Este fue un movimiento completamente nuevo que atrajo mucho interés y apoyo. Las personas se movilizaron sin necesariamente analizar en detalle sus puntos de vista políticos, su orientación y sus programas. Aun está por verse si realmente supondrán algún cambio.

El creciente apoyo al populismo y al sentimiento anti-inmigración, continúa Silvia, se vio acompañado de la pérdida de apoyo público a las OSC, lo cual está afectando su capacidad para trabajar:

*La confusión actual de los ciudadanos se debe al lenguaje utilizado, no solamente por el gobierno actual, sino también por anteriores gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Estos comenzaron a utilizar un lenguaje que giraba en torno a la seguridad frente a los migrantes, el control fronterizo y la seguridad. Atacan a las OSC que trabajan en estos temas, buscando alejar a la ciudadanía de los llamados “bienhechores” de la sociedad civil. El hecho de que la centroizquierda también hablara este idioma confundió a muchos ciudadanos, incluida la parte más progresista de la ciudadanía que naturalmente abrazaría la tolerancia y la sensibilidad hacia los problemas sociales. Como consecuencia de ello algunos ciudadanos se han desconectado de los valores tradicionales de la democracia.*

*Además de por la inmigración, la ciudadanía italiana se preocupó por la seguridad – tanto por la seguridad personal, porque ha habido ataques terroristas, como por la seguridad de los medios de vida, dadas las dificultades para encontrar trabajo. Este tipo de incertidumbres y percepciones de inseguridad han creado entre algunos ciudadanos la idea de que el trabajo tradicionalmente realizado por las OSC, incluso cuando es hecho con la mejor de las intenciones, no tiene en cuenta sus temores e inseguridades. Esta ansiedad ha alejado en cierta medida a los ciudadanos de los grupos que trabajan sobre temas sociales.*

*En los últimos dos años, las donaciones de la ciudadanía, tanto las contribuciones voluntarias como las asignaciones de deducciones fiscales, han ido disminuyendo. Este ya era un tema alarmante incluso antes de la elección. Sin embargo, en general no ha habido una disminución en la participación ciudadana, tal como se observa en el voluntariado. Este se ha mantenido estable e incluso ha aumentado un poco, especialmente entre los jóvenes, que parecen más dispuestos a participar a través de la sociedad civil que a unirse a un partido político.*

*Pero al tiempo que la ciudadanía está aportando menos – incluso a los numerosos grupos que se mantienen activos en la provisión de apoyo y servicios a comunidades y grupos vulnerables, algunos de los cuales de hecho han sido subcontratados por los municipios, incluidos los administrados por la Liga – las demandas hacia la sociedad civil no han dejado de aumentar. De modo que se observa, por un lado, un declive financiero, y por el otro una creciente necesidad.*

Los socios de la coalición no tardaron en atacar a la sociedad civil y a los medios de comunicación. La **investigación** de la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, perteneciente a Cinco Estrellas, por presunto favoritismo y abuso de poder, proporcionó un punto de inflamación particular, ya que la acusación colisionó con la promesa del Movimiento Cinco Estrellas de eliminar la corrupción. La alcaldesa fue absuelta en noviembre, y esto proporcionó el estímulo para que los principales políticos de Cinco Estrellas, incluido el Viceprimer Ministro, lanzaran un **ataque** a los medios de comunicación por haber denunciado del caso, calificando a los periodistas de “chacales” y “putas”. Los periodistas respondieron a este ataque a la libertad de los medios de comunicación mediante la celebración de **protestas** flashmob en varias ciudades, y el organismo italiano de comunicaciones condenó los ataques contra los medios. El gobierno también fue **criticado** en octubre por la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonovic, y por el Grupo de Trabajo

sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, por el desalojo de varias OSC que brindan espacios seguros para mujeres de un edificio que habían ocupado durante más de 30 años. Silvia describe otras limitaciones impuestas sobre la sociedad civil por el nuevo gobierno:

*El rol de la sociedad civil está en discusión. El nuevo mensaje parece ser que la sociedad civil solo puede operar para implementar políticas establecidas por el gobierno. Esto está abriendo una crisis porque no era el caso hasta ahora.*

*Lo que está en marcha, hasta cierto punto en continuidad con algunas medidas del gobierno anterior, es la promoción de una sociedad desigual. Hablan de la reducción de derechos y privilegios para quienes son diferentes, especialmente los extranjeros y los migrantes, y no solo para los que están llegando ahora por mar, sino también para los que ya están en Italia.*

*En términos más generales, una serie de derechos que se han ampliado en los últimos años – uniones civiles entre personas del mismo sexo, aborto, testamentos en vida, acceso a servicios para varios grupos minoritarios- ahora están siendo socavados. Todos los días, los nuevos ministros de este gobierno están haciendo declaraciones que socavan estas y otras victorias que la sociedad civil ayudó a lograr en el pasado. El lenguaje utilizado por el gobierno y los principales partidos es cada vez más hostil hacia los grupos minoritarios y la sociedad civil que trabaja con ellos.*

*Recientemente, un parlamentario de Cinco Estrellas publicó un mensaje en Facebook diciendo que las OSC que se movilizan a favor de los migrantes deben ser eliminadas, y de hecho llamó a una “fumigación” de la sociedad civil italiana. Este es el tipo de lenguaje que algunos sectores del nuevo gobierno están utilizando contra la sociedad civil.*



*También existe en Italia el “efecto Soros”. El ministro del Interior ahora quiere controlar los presupuestos de las OSC para ver si obtienen dinero de George Soros y la Open Society Foundations (OSF). El mismo ministro quiere crear un perfil racial de la comunidad romaní, en su mayoría ciudadanos italianos, no extranjeros. Este señalamiento sobre la base de la raza es algo que antes no hubiera sido posible en Italia.*

*Dentro de este nuevo gobierno de coalición, el partido que más habla el idioma de la seguridad es la Liga, de donde proviene el ministro del Interior. La Liga se unió al nuevo gobierno como el socio minoritario, pero las últimas encuestas muestran que su líder, que es muy enfático con respecto a la seguridad, está ganando apoyos.*

*Estos cambios han abierto una gran crisis de valores y desafíos culturales tanto para los grupos católicos como para los grupos laicos de la sociedad civil, que han desempeñado un papel clave en la promoción de la igualdad y el acceso a derechos. Este nuevo enfoque está desorientando a una gran parte de la sociedad civil establecida.*

Silvia expone algunas acciones que la sociedad civil podría emprender para responder a esta situación y recuperar el apoyo al pluralismo y los valores progresistas:

*Necesitamos trabajar con las nuevas generaciones, tanto en escuelas como en espacios informales, para encontrar canales que las involucren en formas que les interesen, e invertir en su comprensión de las dinámicas de hoy para que puedan ser los motores del cambio en el futuro. Necesitamos promover un mayor voluntariado en el extranjero y la acogida de voluntarios en Italia, e intercambios entre estudiantes y jóvenes procedentes de zonas de crisis.*

*Debemos trabajar más con el parlamento, ya que ha habido una gran rotación de las personas que ocupan escaños parlamentarios. Hay nuevos legisladores que puede que no sean muy conscientes de los problemas y, por lo tanto, terminen avalando las narrativas populistas. Necesitamos hablar con ellos e influir sobre ellos.*

*Debemos trabajar más estratégicamente con los medios de comunicación, para impulsar una narrativa más positiva, y debemos tratar de trabajar a través de los medios de comunicación para dar forma a la opinión pública.*

*Por último, es importante destacar tanto los aspectos positivos como los temas críticos de la sociedad civil. El hecho de que se haya socavado la credibilidad de la sociedad civil, generando*

“

NECESITAMOS  
TRABAJAR CON  
LAS NUEVAS  
GENERACIONES,  
TANTO EN ESCUELAS  
COMO EN ESPACIOS  
INFORMALES,  
PARA ENCONTRAR  
CANALES QUE LAS  
INVOLUCREN EN  
FORMAS QUE LES  
INTERESEN.

”

*una disminución de las donaciones y contribuciones, nos ha llevado en la sociedad civil a trabajar más en nuestras herramientas de autoevaluación, a ser más críticos y honestos, a analizar cómo hemos estado haciendo las cosas, y a avanzar hacia una mayor transparencia y apertura de la información a los ciudadanos, incluso a través de presupuestos participativos e informes más transparentes. Que los ciudadanos sepan adónde va su dinero no solamente es necesario; también es la forma correcta de responder a los ataques.*

## HUNGRÍA: CONSOLIDACIÓN DE LA LÍNEA DURA

En las elecciones parlamentarias de abril, el Primer Ministro populista de derecha de Hungría, Viktor Orbán, aumentó sus apoyos y preservó la **supermayoría** de su partido, Fidesz. Dado que cuenta con más de dos tercios de los escaños, Fidesz será libre de introducir cambios adicionales en la Constitución, tal como lo ha hecho en su propio provecho en el pasado. El resultado cimienta la posición del primer ministro Orbán como líder espiritual e inspiración de los movimientos populistas de derecha en Europa.

Fidesz se presentó a las elecciones con una estridente plataforma nacionalista, anti-inmigración y antieuropea. La demonización del filántropo húngaro George Soros, patrocinador y fundador de la OSF, fue otra táctica clave cada vez más utilizada por el Primer Ministro Orbán y muy imitada en otros países, incluidos Italia y los **Estados Unidos**. En una **táctica** que a menudo conlleva matices antisemitas implícitos, George Soros ha sido acusado con frecuencia de financiar a OSC como parte de un proyecto desestabilizador “globalista” y pro-inmigración, y las OSC que mantienen desacuerdos con el gobierno han sido calificadas de agentes extranjeros financiados por Soros. Unos días antes de la elección, en una acción de claras intenciones intimidatorias, un periódico oficialista **publicó** una lista de 200 personas que, según afirmó, eran mercenarios financiados por George Soros y constituían una amenaza para la nación. La lista incluía a integrantes

del personal de OSC, académicos y periodistas. También **se informó** que la firma de inteligencia privada israelí *Black Cube* había sido contratada para dirigir una campaña para desacreditar a las OSC en el período previo a la elección.

Como consecuencia de ello, la elección se llevó a cabo en un ambiente muy cargado. La OSCE **observó** que se caracterizó por “sesgos intimidatorios y xenófobos, sesgos mediáticos y el financiamiento opaco de la campaña”, con una televisión pública claramente favorable al partido gobernante y una “confusión generalizada entre los recursos del estado y los del partido gobernante”. El control de los medios por parte de los partidos es un problema en aumento en Hungría, y la situación empeoró en agosto cuando Hir TV, la última compañía de televisión independiente de Hungría, fue **vendida** a un aliado del Primer Ministro Orbán.

**Veronika Móra**, de **Ökotárs – Fundación Húngara para las Alianzas Ambientales**, describe la más reciente ola de tácticas desplegadas por el Primer Ministro Orbán contra la sociedad civil el período electoral:

*La campaña anti-OSC del gobierno fue aún más lejos a principios de 2018, cuando se anunció el plan de desarrollar un paquete de leyes con el supuesto objetivo de frenar la inmigración ilegal, denominada “Alto a Soros”. El filántropo George Soros ha sido durante mucho tiempo blanco de propaganda. Sin embargo, la campaña centrada en su persona y sus supuestos “planes” de importar millones de migrantes para “islamizar” Europa se hizo particularmente intensa en el período previo a la elección. La comunicación oficial, sostenida en un enorme conglomerado compuesto de medios de comunicación públicos y gubernamentales, no se abstuvo de difundir noticias falsas, hechos distorsionados y mentiras para transmitir su mensaje, a fin de crear temor frente a los migrantes y aumentar el odio, la xenofobia y las teorías conspirativas. Estas tácticas funcionaron. El resultado volvió a exhibir la profunda división que atraviesa a la sociedad húngara, polarizada a lo largo de líneas partidarias, sin*

*que ninguna de las partes esté realmente dispuesta a dialogar con la otra.*

*Inmediatamente después de la victoria, el gobierno dejó en claro que usaría de inmediato su poder contra Soros y “su red” y que mantendría su posición anti-inmigración, que muchos habían pensado que era solamente un truco de campaña.*

Tras la elección, la OSF **anunció** que trasladaría sus oficinas de la capital, Budapest, a Berlín, Alemania, mientras que Magyar Nemzet, uno de los pocos diarios independientes y críticos que sobrevivía, anunció su cierre.

Los temores de la sociedad civil de que se atacaría su financiamiento no se hicieron realidad de inmediato después de las elecciones, pero la atención hostil se mantuvo enfocada en los migrantes y la sociedad civil que los apoya. En un texto escrito mientras se debatían las nuevas iniciativas legislativas, Veronika describe el contexto post-electoral:

*La nueva versión de la ley Alto a Soros, presentada al parlamento a fines de mayo, resultó ser marcadamente diferente de los borradores anteriores. Las medidas destinadas a restringir la operación y el financiamiento de las OSC fueron directamente eliminadas, y el nuevo borrador ni siquiera mencionaba explícitamente a las OSC.*

*En cambio, el proyecto de ley pareció apuntar a la criminalización de la provisión de asistencia a los solicitantes de asilo, incluida la asistencia legal y la provisión de información, amenazando con penas de prisión a las personas que brindan dicho apoyo. La redacción del borrador, probablemente intencionalmente opaca, dejó mucho espacio para la interpretación arbitraria y, por supuesto, las medidas son en muchos aspectos contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a un juicio justo, a igualdad de trato y a buscar asilo.*

*Las OSC deben repensar su estrategia en relación con esta legislación, pero lo que es seguro es que no permanecerán en silencio y continuarán su lucha por la democracia en Hungría.*

La llamada Ley Anti-Soros **se aprobó** en junio; en consecuencia, los trabajadores de las OSC ahora enfrentan el **riesgo** de una sentencia de prisión si se determina que han contribuido a la migración ilegal o han **retratado** la migración de manera positiva. Ayudar a solicitantes de asilo a adquirir la condición de refugiados podría resultar en hasta un año de cárcel si se considera que las personas involucradas no estaban en peligro inmediato, o que habían ingresado ilegalmente en Hungría. Como lo muestra la sección de este informe centrada en el trabajo de la sociedad civil con migrantes y refugiados, esta fue tan solo una de las muchas medidas introducidas en varios países durante 2018 con el objetivo de movilizar sentimientos negativos hacia los migrantes y criminalizar a la sociedad civil que los apoya.

La sociedad civil calificó a la ley de “**engañoso**”, afirmando que su objetivo real era silenciar a las OSC críticas del gobierno más que controlar la migración. En una indicación adicional de cómo se están utilizando las leyes para atacar a las OSC, la nueva ley también impuso un “impuesto especial” del 25% a los ingresos de las organizaciones que “apoyan la inmigración”. El texto de la ley es vago, lo cual hace que las OSC teman que será utilizado como arma política contra ellas. En un ejemplo del potencial de la nueva ley para limitar la actividad de la sociedad civil, el día en que entró en vigencia la Universidad de Europa Central, con sede en Budapest y apoyada por Soros, suspendió su muy respetado programa de educación gratuita para refugiados y solicitantes de asilo registrados y la administración de una subvención financiada por la UE sobre política migratoria en Europa Central y del Sur. Al frente de la oposición a la medida, Amnistía Internacional, el Comité Húngaro de Helsinki y Migration Aid **anunciaron** que no pagarían el impuesto. El Comité Húngaro de Helsinki también presentó una queja ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En octubre se aprobó una **nueva ley** que restringe las asambleas públicas. Fuertemente criticada por la sociedad civil, la ley otorga a la policía amplia discrecionalidad para prohibir las protestas, por motivos tales como el orden público y la seguridad, la protección de los derechos y libertades ajenas y la protección de líderes políticos internacionales, y criminaliza a



los organizadores de protestas que realicen una protesta sin permiso. La nueva ley fue rápidamente aplicada por primera vez ese mismo mes, con el objeto de prohibir una protesta contra el presidente **turco** Recep Tayyip Erdoğan, aliado del primer ministro Orbán; en cambio, se permitió que una manifestación a favor de Erdoğan siguiera adelante.

La sociedad civil no está aceptando pasivamente estos retrocesos. En lo que constituyó una victoria significativa para la sociedad civil, el Comité Húngaro de Helsinki **obtuvo** una disculpa y restitución de daños tras demandar al gobierno por declaraciones falsas hechas en una publicación gubernamental que había sido distribuida a todos los hogares en el marco del fallido referéndum sobre la migración convocado por el gobierno en 2017. La Unión por las Libertades Civiles de Hungría también ganó un caso judicial para revertir la prohibición de realizar una protesta fuera del parlamento durante la campaña electoral. La UE también ha comenzado a tomar medidas contra Hungría (*véase sección 4*).

Veronika describe otra respuesta clave de la sociedad civil, consistente en aproximarse a la ciudadanía para tratar de convencerla del valor de la sociedad civil. Para liderar la labor de defensa de los derechos de la sociedad civil se constituyó una coalición de OSC llamada Civilización:

*Al igual que en prácticamente cualquier otra área, es posible observar una profunda brecha entre la sociedad civil de Budapest y la del resto del país. Las OSC rurales operan en entornos difíciles, a menudo relativamente aislados, donde la lucha cotidiana por la supervivencia y la situación de dependencia son factores dominantes, ya que las instituciones estatales y los gobiernos locales suelen ser los principales empleadores. Como el futuro es muy incierto, muchos no ven la razón de hacer esfuerzos de desarrollo profesional o aprender nuevos enfoques. Esto ocurre particularmente a nivel local, donde los ciudadanos rara vez defienden sus derechos o unen fuerzas en aras del bien público, y quienes lo hacen se exponen a sufrir represalias. El nivel de confianza generalmente bajo es un obstáculo*



La ciudadanía húngara protestó contra las políticas anti-derechos y anti-inmigración de su gobierno en septiembre.

Crédito: Laszlo Balogh/Getty Images

*importante contra la movilización ciudadana y el activismo, pero a menudo también faltan las herramientas y los medios. Debido a la falta de una cultura y tradiciones democráticas reales, las personas simplemente no están equipadas para trabajar juntas y participar. En cambio, muchos simplemente esperan y mantienen la esperanza de que “alguien haga algo”. La gran mayoría de las OSC más pequeñas, y especialmente las rurales, se mantuvieron más o menos silenciosas mientras sus homólogas con sede en Budapest eran atacadas.*

*Para cambiar esto, ante todo deben superarse la impotencia y la apatía. Con este fin, los miembros de Civilización organizaron una serie de “veladas civiles” en las principales poblaciones rurales. En estos eventos abiertos, los representantes de las OSC locales y el público en general se reunieron para aprender sobre el trabajo de las principales organizaciones de derechos humanos, educación cívica, desarrollo comunitario y medio ambiente, y celebrar discusiones en foros sobre los principales temas y problemas locales. Este esfuerzo de Civilización por ampliar la red e involucrar a más grupos pequeños que operan en pueblos más pequeños, constituye una decisión estratégica clave y marca el rumbo para el futuro.*

## AUSTRIA: VIVIR CON LAS CONSECUENCIAS DE UN GOBIERNO POPULISTA

En la vecina **Austria**, la sociedad civil está experimentando los impactos de un cambio político en curso. El gobierno de coalición que se formó en diciembre de 2017 incorporó al Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), una agrupación populista y nacionalista de derecha, junto al Partido Popular de Austria, de centroderecha.

El cambio en la realidad política desde entonces se ha reflejado, como en Italia, en un **aumento** de la intimidación y los ataques contra periodistas por parte de políticos del FPÖ, incluido el vicecanciller de Austria, que difamó a los periodistas en las redes sociales. Estos ataques desde lo alto alentaron a

otros a difamar periodistas en las redes sociales. El canciller y el vicecanciller también **anunciaron** que pondrían fin a la práctica largamente establecida de celebrar reuniones directas con los medios de comunicación. Otra cosa que preocupa a la sociedad civil es la ley de seguridad cibernética **aprobada** en abril, blanco de críticas por permitir una vigilancia excesiva y la invasión de la privacidad.

La emisora pública nacional de Austria, la ORF, ha sido un blanco específico de ataques. En abril, un miembro del FPÖ que también es miembro de la junta directiva de la ORF **amenazó** públicamente con despedir de la ORF a la tercera parte de los corresponsales extranjeros, acusándolos de producir informes sesgados, en particular por su cobertura de la elección de Hungría. En junio la ORF dio señales de rendirse a la presión y **propuso** nuevas pautas para evitar que sus periodistas expresen toda opinión política a través de sus cuentas personales en las redes sociales.

La sociedad civil está respondiendo a estos ataques. En junio, una amplia sección de la sociedad civil formó una nueva coalición, **Nosotros por la ORF**, en defensa de la independencia de la emisora nacional. Pero la sociedad civil también se ha visto afectada por el cambio en el clima político. A medida que avanzaba el año, las OSC informaron que les resultaba más difícil reunirse y dialogar con el gobierno. Por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente introdujo enmiendas que imponen limitaciones significativas a futuras consultas con OSC ambientalistas. Las OSC también se vieron públicamente **difamadas**; por ejemplo, el canciller Sebastian Kurz **acusó** a Médicos Sin Fronteras de cooperar con traficantes de personas, haciéndose eco de los ataques contra la sociedad civil que trabaja con migrantes y refugiados en otros países europeos. Y los impactos materiales se evidenciaron en algunos recortes significativos en el **financiamiento** estatal, en particular para las OSC que trabajan en temas de derechos de mujeres y migrantes.

## CHEQUIA: POLARIZACIÓN Y PROTESTAS

Un poco más al norte, en **Chequia**, en enero Miloš Zeman fue reelecto presidente. El líder nacionalista y populista, que **se ha comparado** a sí

“

EN MARZO, MILES  
DE ESTUDIANTES  
DE SECUNDARIA  
SALIERON  
MARCHANDO DE  
SUS ESCUELAS PARA  
PROTESTAR CONTRA  
LOS RECIENTES  
ACONTECIMIENTOS  
POLÍTICOS Y EN  
APOYO DE LA  
LIBERTAD DE LOS  
MEDIOS.

”

mismo con Donald Trump, obtuvo un segundo mandato luego de derrotar por escaso margen a un candidato pro-UE. La campaña estuvo marcada por sus ataques deslegitimadores contra su oponente, Jiří Drahoš, y una fuerte retórica anti-migratoria y anti-islámica. Asimismo, hubo **denuncias** de apoyo encubierto por parte de **Rusia** a la campaña de Zeman. El presidente Zeman es bien conocido por sus ataques a los medios de comunicación, y en su discurso inaugural se mantuvo fiel a esta costumbre, ya que **describió** a los medios como una “mafia económica” y **los acusó** de intentar manipular al público. También se **informó** de agresiones contra periodistas durante las celebraciones de la reelección en el mes de enero.

El estrecho margen de la victoria del presidente Zeman evidenció la situación de polarización política y la sensación de que, al igual que otros países incluidos en este informe, hay en curso en la República Checa una batalla entre valores políticos. El clima político se mantuvo febril durante la primera mitad de 2018, ya que las negociaciones para formar un nuevo gobierno tras las elecciones parlamentarias de octubre de 2017 se prolongaron varios meses. El partido del oligarca populista Andrej Babiš, ANO 2011, salió primero en las elecciones e inicialmente encabezó un gobierno de minoría, el cual se derrumbó tras perder un voto de confianza. La mayoría de los partidos se mostraron reacios a formar parte de la coalición de apoyo del Primer Ministro Babiš, cuyo pasado está lleno de **denuncias** de fraude, acoso y conflictos de intereses. Finalmente, en julio, se formó un gobierno de coalición que incluyó al Partido Socialdemócrata Checo y tuvo el apoyo del Partido Comunista.

El primer ministro Babiš permanece bajo **investigación** de la UE por acusaciones de acceso fraudulento a fondos de inversión; en un acto sin precedentes, en diciembre fue formalmente **censurado** por el Parlamento Europeo. Como era de esperar, dado el rol crítico de los medios de comunicación frente a sus supuestas irregularidades, el Primer Ministro Babiš también tiene un largo historial de ataques contra la libertad de los medios de comunicación; como parte de su estrategia, en tanto que **segundo hombre más rico** de su país, se ha ido **apoderando** de medios de comunicación previamente independientes, aunque al convertirse en primer ministro se vio obligado a colocar sus propiedades en un fideicomiso.

En este contexto de ajustadas y disputadas victorias de un presidente y un primer ministro populistas, las protestas no se hicieron esperar. En marzo, miles de estudiantes de secundaria **salieron marchando** de sus escuelas para protestar contra los recientes acontecimientos políticos y en apoyo de la libertad de los medios. Ese mismo mes, miles **protestaron** en varias ciudades luego de que un oficial de la escuadra antidisturbios de la era comunista, Zdeněk Ondráček, fuera escogido



para encabezar la comisión parlamentaria permanente que supervisa a la Inspección General de Seguridad (GIBS). Zdeněk Ondráček era conocido por haber participado en golpizas de manifestantes pro-democracia en 1989, en abierta contradicción con el rol que debe desempeñar la GIBS en la investigación de abusos policiales. La fuerte presión de la protesta le obligó a hacerse a un lado, pero la labor de incidencia para que el cuerpo sea reformado aún continúa. Las protestas demostraron cuán reales siguen siendo las cuestiones que rodean al legado de la era comunista en el país y la participación en ella de miembros de la élite, en particular en el actual contexto de sospechas de interferencias rusas.

En noviembre miles de personas llegaron a las calles de Praga, la capital, para **protestar** cuando el Primer Ministro Babiš **sobrevivió** a una moción de censura desencadenada por la extraña **denuncia** de que había encargado el secuestro de su propio hijo para evitar que declarara en la investigación de fraude de la UE. Otra protesta a principios de ese mes había **reunido** a unas 20.000 personas en el centro de Praga en el aniversario de la Revolución de Terciopelo de 1989.

Al igual que en Austria, es probable que estos cambios políticos tengan un impacto material en la sociedad civil: el nuevo gobierno avanzó rápidamente con una **propuesta** para recortar el 20% (aproximadamente 135 millones de dólares) de su financiamiento anual para las OSC, respaldada por ANO 2011 pero rechazada por sus socios de coalición socialdemócratas. Esto ocurrió en un clima político en el cual el presidente Zeman había calificado a las OSC de “sanguijuelas en el presupuesto estatal”. El gobierno declaró que no cortaría el apoyo a las personas con discapacidades, a las personas mayores y las personas socialmente desfavorecidas, ni tampoco al deporte, por lo cual es muy probable que cualquier recorte apunte a las OSC que realizan actividades consideradas políticas, tales como la promoción de causas con las que el gobierno no está de acuerdo y la defensa de los derechos humanos fundamentales. Dada la retórica anti-migratoria que caracterizó a las elecciones presidenciales y parlamentarias, se teme que las OSC que trabajan con migrantes se vean particularmente afectadas.

Esa decisión difícilmente sea consistente con la idea de unir a una sociedad políticamente dividida, pero en cambio parece bien alineada con los intereses de hombres increíblemente ricos que han logrado presentarse a sí mismos como anti-elitistas y alentado la división de la sociedad en campos contrapuestos para ganar poder.

## CROACIA: GRUPOS ANTI-DERECHOS ENVALENTONADOS

En la cercana **Croacia**, los grupos nacionalistas de extrema derecha están creciendo y teniendo un efecto tóxico sobre el discurso político del país. Al igual que en Austria, la República Checa e Italia, este fenómeno adopta a menudo la forma de difamación y amenazas contra periodistas, incluidos aquellos que trabajan en medios asociados con la minoría serbia de Croacia. En abril, la revista Novosti Weekly, que publica en serbio e informa sobre temas controvertidos como la corrupción, los derechos de las personas LGBTQI y las relaciones con Serbia, **se quejó** del hostigamiento continuo, amenazas de muerte incluidas, que sus periodistas reciben de grupos de extrema derecha. En una decisión controvertida, en el mes de mayo la Asociación de Periodistas Croatas entregó su premio anual a Ivana Petrovic, una periodista muy criticada por su cobertura sesgada del juicio de Slobodan Praljak, un general croata bosnio que fue declarado culpable de crímenes de guerra cometidos durante las guerras de la ex Yugoslavia en los años noventa. Concretamente, se la acusó de no hablar con ninguna víctima de los crímenes de guerra. En respuesta, dos antiguos ganadores **devolvieron** sus premios. El hecho demostró lo controvertida que sigue siendo la narrativa sobre el papel de Croacia en la guerra de la ex Yugoslavia y sus relaciones con otros antiguos estados yugoslavos.

En otra señal de la confianza que han adquirido las fuerzas anti-derechos en Croacia, miles de personas **protestaron** en marzo en la capital, Zagreb, contra los planes del gobierno para que el país ratifique el **Convenio de Estambul**, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Varios grupos

conservadores de la sociedad civil se opusieron al Convenio **alegando** que sus disposiciones socavan la identidad croata al promover la “ideología de género” y expresaron sus sospechas de que su ratificación tornaría más probable la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sentimientos similares se expresaron en protestas contra el Convenio en **Letonia** (*véase sección 2*). Los manifestantes croatas exigieron un referéndum para brindar a la ciudadanía la oportunidad de rechazar el Convenio, citando el referéndum celebrado en el **Reino Unido** sobre Brexit como un precedente de revocación de acuerdos internacionales. Sin embargo, el mes siguiente el parlamento de Croacia **votó** la ratificación del Convenio. En escala reducida, el argumento volvió a dejar en evidencia el modo en que pueden impulsarse y alimentarse con información errónea acciones de retaguardia contra acuerdos internacionales que promueven derechos.

## ESLOVENIA: LA ENCRUCIJADA DE EUROPA

Otro estado centroeuropeo que parece sostenerse en un delicado equilibrio entre valores pluralistas y populistas es el vecino de Croacia, **Eslovenia**, donde en junio se celebraron elecciones parlamentarias. El partido populista de derecha Partido Democrático Esloveno (SDS) obtuvo la mayoría de los votos, pero dado que los demás partidos importantes no estuvieron dispuestos a unirse a él para formar gobierno, finalmente se conformó un nuevo gobierno de minoría de centroizquierda tras dos meses negociaciones. Podría decirse que, en ese acto, Eslovenia resistió el avance de la marea de sus países vecinos, manteniendo a las fuerzas populistas de derecha fuera del gobierno. Sin embargo, el resultado subraya el contexto de fragmentación política. **Albin Keuc**, de **Acción Global Eslovena**, reflexiona sobre lo que los resultados podrían significar para la sociedad civil:

*Las elecciones fueron bastante poco espectaculares desde el punto de vista de los resultados, pero bastante sorprendentes en comparación con los resultados de las elecciones en países vecinos, como Austria, Croacia, Hungría e Italia. En esos países, las elecciones*

*llevaron a la instalación de gobiernos más o menos de derecha y centroderecha, consistentes con la atmósfera política autoritaria y populista que avanza particularmente en Europa Central y Oriental.*

*Aunque varios partidos se dirigieron al electorado con mensajes similares a los propagados por Viktor Orbán, imitándolo con su propuesta de ‘Eslovenia Primero’, no fueron recompensados: los partidos más pequeños se mantuvieron por debajo del umbral del 4% necesario para obtener un escaño en el parlamento. Sin embargo, el Partido Nacional Esloveno, de derecha populista, regresó al parlamento después de una década de ausencia. El SDS y Nueva Eslovenia, un partido de centroderecha, obtuvieron mejores resultados que en elecciones anteriores, pero ningún partido se acercó a la obtención de una mayoría parlamentaria.*

Tal como lo subraya Albin, los resultados de las elecciones revelaron la existencia de una sociedad fragmentada y dividida:

*Hay varias fracturas en la sociedad eslovena que subyacen a la fragmentación política. Las guerras culturales resultantes de un proceso de reconciliación nacional fallido eclipsan a casi todas las discusiones públicas y obstaculizan la capacidad del debate público como herramienta democrática, causando fatiga política en la ciudadanía. Otra fractura creciente se observa en la intensificación del conflicto intergeneracional derivado de la situación demográfica y las limitadas oportunidades de empleo para los jóvenes, que inyectan incertidumbres sociales adicionales en toda la sociedad eslovena.*

*La situación actual, con nueve partidos representados en el parlamento, es indicativa de una mayor fragmentación del apoyo a los partidos políticos y crecientes rivalidades políticas que afectarán la capacidad del gobierno para tomar decisiones. Cabe esperar un período de gobierno agitado, ya que un gobierno de minoría tendrá que negociar cada paso en el parlamento al tiempo que tendrá que*

*gobernar. Este será el primer gobierno minoritario en los 27 años desde que Eslovenia se independizó de Yugoslavia.*

El nuevo gobierno tuvo una serie de gestos positivos hacia la sociedad civil. Antes de las elecciones, el parlamento había **aprobado** una Ley de ONG que fue bien recibida por la sociedad civil. La ley reconoció el deber del estado de crear un entorno propicio para la sociedad civil a través del diálogo y la financiación y propuso la creación de un nuevo fondo público. Tras la formación del nuevo gobierno, el diálogo positivo continuó. En octubre, el gobierno **invitó** a 17 OSC a un debate sobre diversos temas sociales, afirmando que este era el comienzo de un diálogo permanente, y señaló el importante papel de las OSC a la hora de dar respuesta a la crisis migratoria. En ese sentido, revirtió la política del gobierno anterior de demonizar a las OSC que ayudan a los migrantes, similar a la de muchos otros países europeos durante 2018. El gobierno también pareció abrirse a las OSC ambientalistas, hacia las cuales había sido hostil en el pasado.

Sin embargo, dada la realidad política fragmentada, la sociedad civil eslovena también trabaja en un clima de desinformación y abusos. En una nueva demostración de que los populistas de derecha de diferentes países comparten sus tácticas, los medios de comunicación **vinculados** a Viktor Orbán apoyaron activamente al SDS durante la elección y continuaron difamando a las OSC, incluidas aquellas que trabajan en temas de migración. Tras la elección hubo varios **ataques** contra periodistas, inclusive ataques físicos, así como agresiones contra quienes se expresan en internet y una creciente cantidad de **ataques** contra artistas, procedentes de grupos nacionalistas y de extrema derecha. Como parte de su estrategia electoral, el SDS vilipendió a la sociedad civil, prometiendo terminar con el financiamiento estatal de las OSC y, como en Hungría e Italia, jugando la “carta Soros”. Las OSC fueron **acusadas** por el líder del SDS de, entre otras cosas, intentar destruir la familia, la nación y la propiedad privada. Albin describe algunos de los desafíos encontrados:

*Hay señales de prácticas y discursos iliberales utilizados por funcionarios gubernamentales, algunos medios de comunicación*

*e intereses organizados. Las OSC han sido criticadas por partidos nacionalistas y anticomunistas desde un punto de vista ideológico, y acusadas de apoyar a una élite poscomunista. Las OSC han sido criticadas y amenazadas por ejercer su rol de guardián.*

*En los últimos años, y especialmente durante el período de controversias en torno de refugiados y migrantes, en 2015 y 2016, enfrentamos una explosión de discurso de odio en las redes sociales. Para la sociedad civil, el punto más bajo de la campaña fue el llamamiento público de un candidato del SDS a cortar todo el apoyo financiero público a las OSC. Esto provocó una reacción conjunta de las OSC y los medios de comunicación, lo cual obligó al candidato y al partido a aclarar sus dichos.*

La sociedad civil respondió promoviendo valores progresistas. Antes de la elección, las OSC publicaron un manifiesto conjunto donde presentaban la perspectiva de la sociedad civil sobre los principales problemas sociales y hacían hincapié en los valores clave que todos los candidatos debían respetar en la elección. Albin explica qué más podría hacer la sociedad civil para responder efectivamente al desafío del populismo de derecha:

*En la última década se ha producido un cambio sin precedentes en la comunicación y el intercambio de información. Ello ha tenido un gran impacto en nuestra toma de decisiones y en la forma en que escogemos nuestras opciones en la vida cotidiana. También ha tenido un impacto sobre la forma tradicional de funcionamiento de la sociedad civil y nos ha planteado interrogantes clave: cómo responder a las políticas del miedo que producen ciudadanos atemorizados, cómo adaptarnos a la realidad cambiante de los medios, cómo llegar a las personas que son vulnerables a lo que sea que le dicen las “noticias falsas”, etc.*

*La historia nos enseña que, en tiempos de desesperación y temor social, las personas se inclinan hacia sus redes sociales y comunidades, a nivel local o nacional, y en consecuencia alimentan*



“  
ES POSIBLE  
DESCRIBIR A  
ESLOVENIA COMO  
UN PAÍS AL FILO DE  
LA NAVAJA ENTRE LA  
SOCIALDEMOCRACIA  
EUROPEA Y EL  
POPULISMO DE  
DERECHA, Y EN  
LA ENCRUCIJADA  
ENTRE LAS ESFERAS  
DE INFLUENCIA DE  
LA UE Y RUSIA.  
”

*estrechas lealtades grupales y la exclusión de otros. Esta es la razón por la cual la agenda neoconservadora incluye las prácticas de atacar la credibilidad de las OSC (“¿quién te paga?”) y nuestra legitimidad (“¿a quién representas?”). Esto nos lleva a pensar en el valor de nuestra credibilidad y legitimidad personales, y en su importancia para nosotros y las comunidades a las que servimos.*

*Desde el punto de vista de las OSC, son necesarios un replanteo estratégico, cooperación y priorización a nivel nacional y local para fortalecer el apoyo a una sociedad liberal basada en el respeto de los derechos humanos, las acciones afirmativas, la tolerancia, el estado de derecho y un gobierno transparente y responsable.*

Es posible describir a Eslovenia como un país al filo de la navaja entre la socialdemocracia europea y el populismo de derecha, y en la encrucijada entre las esferas de influencia de la UE y Rusia. Como lo muestra la forma en que los medios conectados a Orbán intentaron influir en las elecciones, poderosos actores externos tienen interés en inclinar a Eslovenia hacia uno u otro lado. En un contexto fragmentado, el frágil gobierno actual parece estar tratando de vincularse con la sociedad civil; tal vez se da cuenta de que necesita construir una alianza para defender y fortalecer el apoyo a los valores compartidos.

## **POLONIA: POLARIZACIÓN Y DIVISIÓN**

**Polonia** es otro país donde en los últimos años los grupos conservadores y anti-derechos han realizado avances. Estrechamente alineados con miembros del partido gobernante, han alimentado una polarización política cada vez más divisiva, incluso en el terreno de la sociedad civil. En enero de 2019, el asesinato del alcalde de Gdansk, **Paweł Adamowicz**, puso en evidencia la necesidad de reflexionar sobre la polarización y sus impactos.

En ese sentido explica **Martyna Bogaczyk**, de la **Fundación Educación para la Democracia**:

*Actualmente estamos divididos en dos “clanes”, cada uno con su propia historia, memoria histórica, valores, diagnósticos y posiciones políticas. Este para nosotros es el mayor desafío democrático, porque hemos llegado a una situación en que nos resulta difícil hablar entre nosotros. Como resultado de ello, ya no es posible mantener una conversación política civilizada y significativa. Las familias ya no pueden hablar normalmente alrededor de la mesa de Navidad. Las personas que están a ambos lados de la grieta cultural y política ya no están hablando entre sí.*

*La sociedad civil incluye a una serie de organizaciones que están librando una guerra cultural y profundizando la grieta. Estos grupos están ocupando espacios destinados a la sociedad civil e incluso apropiándose del lenguaje de los derechos humanos para sus propios fines, usándolo contra el avance de los derechos. Estamos viendo cada vez más el lado oscuro de la sociedad civil, en la forma de un discurso anti-derechos que es antisemita, anti-migrantes y anti-refugiados. Este discurso se está normalizando hasta el punto de que, para un sector creciente de la población, se ha vuelto perfectamente aceptable.*

*Los derechos se han convertido en algo que está sujeto a negociación. En lugar de ser reconocidos como universales, pueden serles negados a “ellos” si eso supone que habrá más beneficios para distribuir entre “nosotros”. Muchos ciudadanos polacos están votando por partidos de derecha que les prometen beneficios sociales que no les serán “arrebataados” por extranjeros, porque ellos los mantendrán alejados.*

En los últimos años se observa la instalación de una desagradable tradición de marchas de extrema derecha y ultranacionalistas sobre la capital, Varsovia, cada 11 de noviembre, el aniversario de la recuperación de la independencia de Polonia tras la Primera Guerra Mundial. Últimamente se han observado contra-protestas y **violencia**, ya que la marcha ha atraído a partidarios de la extrema derecha de toda Europa. La marcha de 2018 fue particularmente significativa, porque marcó el centenario de la recuperación de la independencia. En noviembre el alcalde de Varsovia **prohibió** la marcha que planificaban los grupos de extrema derecha, afirmando que había riesgo de violencia y que el país ya había sufrido suficiente “nacionalismo agresivo”.

El grado de polarización de Polonia se manifestó en el hecho de que entonces se llevaron a cabo dos marchas diferentes. Luego de que un tribunal **revirtiera** la prohibición impuesta por el alcalde, el presidente Andrzej Duda

y el primer ministro Mateusz Morawiecki **celebraron** una marcha oficial con el mismo recorrido que la marcha nacionalista, mientras que Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo y ex político polaco en frecuente desacuerdo con el partido gobernante, organizó un evento aparte. Afortunadamente, los símbolos y las consignas nacionalistas tuvieron una presencia mucho menor que en ocasiones anteriores, aunque **se informó** que se desplegaron algunas pancartas fascistas y se dispararon bengalas ilegales.

Otra polémica de 2018 fue generada por la ley conocida como **Ley del Holocausto**, aprobada en febrero. Al igual que en la República Checa y en Eslovenia, en un presente controvertido las narrativas acerca del pasado habían cobrado nuevo relieve. Una cláusula de la ley tipificó como delito el hecho de acusar al estado polaco de complicidad en los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno experimentó una fuerte reacción nacional e internacional centrada en las consecuencias de la cláusula para la libertad de expresión, y en junio modificó la ley, **rebajando** el delito de lo criminal a lo civil. Si bien este retroceso fue acogido con beneplácito, muchos actores de la sociedad civil continuaron expresando preocupación por la ley y presionaron para obtener más concesiones.

## LETONIA: UNA NUEVA ERA DE INCERTIDUMBRE

En **Letonia**, las elecciones parlamentarias de octubre inauguraron un nuevo capítulo de incertidumbre política. El Partido Socialdemócrata ‘Armonía’, generalmente considerado un partido pro-ruso con el cual otros partidos se niegan a trabajar, obtuvo la mayoría de los escaños, mientras que el nuevo partido ‘¿A quién pertenece el estado?’, populista, **personalista**, y **posicionado** como fuerza anti-establishment, quedó en segundo lugar con el 14% de los votos, con lo cual por primera vez ingresó al parlamento. Otro partido nuevo, el euroescéptico Nuevo Partido Conservador, quedó tercero, también con el 14%. Los resultados revelaron el amplio rechazo de la ciudadanía hacia los partidos establecidos. Las elecciones fueron precedidas de una serie de escándalos financieros que incluyeron el **colapso** del banco

ABLV, ocurrido luego de que el gobierno de los Estados Unidos lo acusara de lavado de dinero y presentara **acusaciones** de corrupción contra el **director** del Banco Central.

El período preelectoral se caracterizó por el **declive** del espacio cívico en Letonia. Las OSC reportaron mayores dificultades para dialogar con el gobierno y crecientes ataques políticos provenientes de los partidos de derecha, incluida la ya familiar acusación de que la sociedad civil estaba financiada por Soros. La sociedad civil letona comenzó a preguntarse si las medidas restrictivas que estaban siendo tomadas en otros lugares de Europa habrían llegado a su país.

En febrero la Alianza Cívica de Letonia fue **atacada** con la acusación de ser una fachada de las operaciones de Soros, y al mes siguiente la Alianza Nacional, un partido de derecha que obtendría el 11% de los votos en las elecciones, **instó** al gobierno a no trabajar con el centro de pensamiento PROVIDUS sobre la base de que supuestamente propagaba “propaganda a favor de la inmigración”. En septiembre, el capítulo letón de PEN International **expresó su preocupación** por la estrategia de grupos políticos de presentar quejas ante las autoridades de seguridad en relación con el trabajo de investigación de periodistas durante la campaña electoral y el efecto silenciador de dichas quejas. En octubre, 11 miembros del parlamento escribieron al primer ministro solicitando una **investigación** de las OSC que hacen trabajo de incidencia, con el foco puesto particularmente en Papardes Zieds, una OSC que promueve la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que recibe fondos del estado y de la OSF. Papardes Zieds había sido muy crítica de las “enmiendas morales” a la Ley de Educación que obstaculizaron el debate sobre temas de salud reproductiva en las escuelas. Pero cuando fue difamada como OSC con financiamiento extranjero, otros parlamentarios expresaron su preocupación ante esta retórica al estilo ruso y votaron por no tomar ninguna medida.

En el momento de redactar este informe y tras casi cuatro meses de negociaciones se había **formado** un nuevo gobierno de coalición de

centroderecha, que incluyó entre los cinco partidos integrantes a ¿A quién pertenece el estado?, a Nuevo Partido Conservador y a Alianza Nacional. La sociedad civil enfrentará el desafío de tratar de entablar relaciones más constructivas con el que podría ser un gobierno fragmentado, y esperará que por lo menos la retórica se atenúe.

## SUECIA: ¿RETROCEDEN LOS VALORES SOCIALDEMÓCRATAS?

Los valores y la identidad nacional también han sido foco de atención en **Suecia**. En las elecciones de septiembre, el Partido Socialdemócrata, el partido político dominante en la historia moderna de Suecia, alcanzó su nivel de apoyo más bajo desde 1911; también perdió votos el principal partido de la oposición moderada. En cambio, el partido de los Demócratas Suecos, de derecha y anti-inmigración, realizó grandes progresos, alcanzando el 18% de los votos. Estos niveles de apoyo propinaron un golpe al orden socialdemócrata establecido en el país que suele encontrarse en el tope de las mediciones de libertades y calidad de vida. Después de cuatro meses de negociaciones, en enero de 2019 se cerró un **acuerdo** para formar un gobierno de minoría de centro-izquierda; todos los partidos se negaron a llevar a los Demócratas Suecos al gobierno.

**Anna-Carin Hall**, de la OSC sueca **Kvinna till Kvinna** (Mujer a mujer), describe las motivaciones del sentimiento anti-inmigración en su país:

*Parte de la explicación es, como siempre, el temor a la globalización, ya que los empleos tradicionales se están yendo de Suecia y la gran afluencia de migrantes en un período breve, especialmente durante 2015, creó una gran presión sobre el sistema de bienestar sueco, incluidos los servicios de educación y salud, así como escasez de viviendas.*

*Antes de la elección hubo una discusión pública sobre la brecha entre las áreas urbanas y rurales de Suecia y sobre el cierre de servicios de salud en áreas remotas. El apoyo a los Demócratas Suecos es más*



común en las regiones con bajo nivel de educación, bajos ingresos y alto desempleo.

Sin embargo, la economía sueca sigue siendo muy fuerte, y los suecos no están sufriendo económicamente debido a la fuerte inmigración. Pero los grandes centros de migración establecidos en zonas rurales han alterado muy rápidamente la composición de la población, causando tensión en esos lugares. Además, los estudios a largo plazo han demostrado que durante muchas décadas la opinión pública sueca ha sido menos pro-inmigración que las políticas de los partidos dominantes, cosa que están capitalizando los Demócratas Suecos.

Aparte de la economía, los problemas de inseguridad también han sido utilizados para estimular el sentimiento anti-inmigración. El aumento en el número de **tiroteos espectaculares** entre bandas criminales en algunos suburbios dominados por migrantes ha atraído la atención de los medios suecos e internacionales; uno de esos eventos incluso fue **mentado** por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó incorrectamente que había sido un ataque terrorista. Esto es algo que los sitios web de extrema derecha han explotado políticamente.

En este momento se discute en los medios de Suecia si el apoyo a los Demócratas Suecos se debe principalmente a la xenofobia y al racismo. Algunos formadores de opinión afirman que es así, pero hay encuestas que afirman que los suecos creen que el problema es la integración fallida, más que la migración en sí misma. La sociedad sueca no ha podido proporcionar a los grupos de inmigrantes una educación adecuada en sueco, orientación sobre el funcionamiento de la comunidad sueca, empleos decentes, etc.

Si bien muchos habían temido que los Demócratas Suecos obtuvieran un apoyo aún mayor, el hecho de que un partido populista de derecha sea ahora el tercero de Suecia es motivo de preocupación para la sociedad civil del país, entre otras cosas porque en respuesta a este desplazamiento a la



Jóvenes refugiados afganos protestaron en Estocolmo, Suecia, luego de que sus solicitudes de asilo fueran rechazadas.

Crédito: Atila Altuntas/Anadolu Agency/Getty Images

derecha otros partidos están haciendo concesiones en temas tales como la inmigración, permitiendo que los Demócratas Suecos definan el terreno y los términos del debate político. De ahí la pregunta de cómo dar una respuesta a las preocupaciones que ellos representan. Anna-Carin esboza el debate:

*Algunos analistas han afirmado que los Demócratas Suecos se han hecho populares porque los otros partidos con representación parlamentaria han tratado de excluirlos. En consecuencia, los Demócratas Suecos y sus partidarios han podido desempeñar el papel de víctimas y afirmar que la elite política no se interesa por las opiniones de la gente común. De ahí que algunos argumenten que debería incluirse a los Demócratas Suecos en el gobierno; en su apoyo refieren al caso de **Finlandia**, donde el partido nacionalista Sannfinnlandarna llegó al gobierno y se mostró incapaz de gobernar, como resultado de lo cual su apoyo se redujo rápidamente. Esta estrategia es sugerida como una forma potencialmente fácil de sacar a los Demócratas Suecos de la agenda.*

*Los principales partidos han respondido mediante un desplazamiento hacia una política migratoria más moderada y con la imposición de mayores exigencias sobre los migrantes, tales como requisitos adicionales que deben cumplir para recibir ayuda social y subsidios. Los grupos de la sociedad civil que promueven derechos todavía están tratando de alzar la voz en favor de una política migratoria generosa basada en valores humanitarios, pero en estos días no reciben mucha atención.*

*El cambio en el clima político se expresa en la existencia de un debate más abierto sobre los costos de la inmigración y su impacto sobre el sistema de bienestar sueco. También se observa una discusión más intensa sobre el comportamiento cultural o tradicional, como los crímenes de honor, y hay quienes sostienen que durante mucho tiempo Suecia no ha tomado una posición firme contra esto y ha*

*eludido los temas conflictivos relacionados con la inmigración y la integración que se consideraban culturalmente sensibles.*

*La normalización de los Demócratas Suecos, un partido originado en el movimiento neonazi de los años setenta y ochenta, también ha hecho resurgir un más ruidoso movimiento de extrema derecha neonazi en Suecia, que aunque todavía es limitado en número, recibe una gran atención de los medios. Varios medios de comunicación de extrema derecha están difundiendo noticias falsas sobre las tasas de delincuencia entre los migrantes. Los grupos de extrema derecha también están difundiendo amenazas, propagando el odio y llevando a cabo campañas de desprestigio en las redes sociales. Este clima puede muy bien conducir a la autocensura entre los grupos pro-migración, feministas y LGBTQI.*

En respuesta, concluye Anna-Carin, la sociedad civil necesita reunir apoyo en torno de los valores que la mayoría de los ciudadanos suecos ha apreciado durante largo tiempo:

*El racismo abierto y la xenofobia no son de ninguna manera tolerados por la gran mayoría de los suecos, y tanto antes como después de las elecciones se han organizado varios mítines locales contra el racismo y el movimiento neonazi. La sociedad civil defensora de derechos se ha preparado durante mucho tiempo para contrarrestar estas tendencias, pero aún necesita el apoyo de grandes grupos de personas para tener un impacto sobre el discurso oficial y la conversación pública.*

*Los suecos se enorgullecen de su sociedad abierta, y probablemente defenderán la libertad de prensa, la libertad de expresión y la igualdad de género, entre otros valores. Las amenazas y el odio contra migrantes, periodistas, feministas y activistas LGBTQI reciben mucha atención en los medios de comunicación y se han organizado varias acciones políticas para prevenirlos. Entonces, si se forma un gobierno de derecha con el apoyo parlamentario, ya sea silencioso*

*o abierto, de los Demócratas Suecos, es probable que se produzcan muchas reacciones enérgicas tanto del establishment político y cultural como de la sociedad civil.*

*A largo plazo, la sociedad civil sueca debe trabajar a diario para defender la democracia en el territorio, y quizás deba también correr a las barricadas para construir opinión y modificar lo que podría resultar ser una peligrosa deriva de la historia.*

## LA RESISTENCIA FRENTE A LA EXTREMA DERECHA: OTRAS RESPUESTAS

Los casos arriba descriptos muestran que, frente a la ira, el odio y la desinformación de la extrema derecha, la sociedad civil ha respondido defendiendo derechos, defendiendo a los grupos excluidos y afirmando valores progresistas. Los citados no fueron los únicos países que experimentaron esa respuesta. En todos los sitios en que la extrema derecha se movilizó, enfrentó protestas en su contra que a menudo fueron más numerosas, más asertivas, e indudablemente más diversas que las suyas propias.

En **Bulgaria**, contra-manifestantes **se movilaron** en oposición a una marcha pronazi en febrero, bajo los lemas “No a los nazis en nuestras calles” y “No a la Fortaleza Europa”. Un petitorio internacional contra la marcha pronazi reunió más de 178.000 firmas.

En agosto, en la ciudad de Turku, en **Finlandia**, el neonazi Movimiento de Resistencia Nórdica realizó una marcha de varios cientos de personas en el aniversario de un ataque terrorista llevado a cabo por un ciudadano marroquí; en respuesta, otros cientos **organizaron** una animada contraprotesta. En septiembre, un tribunal de apelación **confirmó** una prohibición que impide al Movimiento de Resistencia Nórdica movilizarse y distribuir propaganda.

Las movilizaciones que tuvieron lugar en octubre en **Japón** hicieron las veces de recordatorio de que el desafío de la extrema derecha y la necesidad de respuestas de la sociedad civil no se limitan a Europa. En respuesta a una

serie de marchas del nuevo partido de extrema derecha Japón Primero, grupos antirracistas organizaron **manifestaciones** masivas en ciudades de todo Japón. Las protestas racistas se organizaron en reacción a la intención del gobierno de facilitar a los trabajadores extranjeros la obtención de visas de trabajo a largo plazo, en respuesta al envejecimiento de la población japonesa.

## DEMOCRACIAS DEFECTUOSAS: UN AÑO DE LIBERTADES DEMOCRÁTICAS LIMITADAS

### VENEZUELA: ELECCIONES CUESTIONADAS ALIMENTAN LA CRISIS

En **Venezuela**, el presidente Nicolás Maduro obtuvo un segundo mandato en las elecciones de mayo; sin embargo, el resultado corrió el riesgo de convertirse en una mera nota a pie de página en el contexto de una grave crisis política, económica y social que en 2018 se convirtió en crisis humanitaria (**véase sección 2**).

El desalentador nivel de participación – que, con apenas alrededor del 26%, fue el más bajo de la historia – evidenció la desafección generalizada frente a la ausencia de opciones reales entre las cuales escoger. A muchos candidatos de la oposición se les había impedido presentar sus candidaturas, mientras que otros habían sido encarcelados o habían debido abandonar el país para huir de la persecución. En un contexto en que el poder presidencial se impone rutinariamente sobre el resto de las instituciones de gobierno y prevalece la **impunidad** por las violaciones de los derechos humanos, las elecciones estuvieron plagadas





Numerosas protestas se produjeron alrededor de las elecciones de mayo en Venezuela, que fueron criticadas como manipuladas y fraudulentas.

Crédito: Joe Raedle/Getty Images

de irregularidades de cronograma y de procedimientos, incluidos el uso partidista de los recursos estatales y la compra de votos. La mayoría de los partidos de la oposición boicotearon las elecciones por no considerarlas libres ni justas, mientras que organismos internacionales clave tales como la UE, el G7 y el Grupo de Lima – este último, un grupo de 14 estados del continente americano que persigue un fin pacífico para la crisis venezolana – rechazaron los resultados. La magnitud de la crisis fue tal que en septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó su primera **resolución** sobre Venezuela, en la cual expresó su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en el país e instó al gobierno a cooperar con los mecanismos de derechos humanos.

Antes de las elecciones, el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, **declaró** que el contexto no “satisfacía las condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres y creíbles”. Las restricciones del espacio cívico aumentaron en el período preelectoral; solamente el día de las elecciones, la OSC Espacio Público **documentó** 28 casos individuales de violaciones de la libertad de expresión, de las cuales la más común fue la denegación de acceso a los centros de votación a los periodistas.

**Beatriz Borges**, del **Centro de Justicia y Paz** (Cepaz), analiza la elección y el difícil contexto en el que se llevó a cabo:

*La situación es muy compleja y predomina la incertidumbre. La emergencia humanitaria compleja en curso se cobra vidas y sufrimiento de los venezolanos, al tiempo que la ruptura de la institucionalidad democrática y la desaparición de todo vestigio de estado de derecho e instituciones independientes nos deja en la más completa indefensión, sin garantía alguna para ejercer nuestros derechos. Pero a pesar de lo adverso del contexto contamos con una sociedad civil activa y un liderazgo democrático muy debilitado pero que sigue en la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela.*

En junio Cepaz presentó un **informe** que resume los hallazgos de un análisis del proceso iniciado el 23 de enero, con la convocatoria a la elección presidencial del 22 de abril, posteriormente reprogramada para el 22 de mayo, desde la perspectiva de su impacto sobre el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Nuestro informe concluyó que el proceso electoral no contó con las garantías y condiciones mínimas necesarias para poder ser considerado justo, equitativo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.

Cepaz ha **informado** a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los derechos políticos de los venezolanos han sido restringidos y que hoy en día no contamos con la herramienta ciudadana del voto para lograr un cambio político. En mayo, poco antes de las elecciones, participamos junto con otras organizaciones en una **audiencia** en la que solicitamos atención ante eventuales represalias u obstrucciones a la labor de los defensores de derechos humanos y observadores electorales nacionales y pedimos que se instara al Estado a respetar la labor de periodistas y medios de comunicación en el proceso electoral.

En diciembre tuvimos participación en otra **audiencia** en la cual volvimos a alertar sobre el deterioro de los derechos políticos y la participación ciudadana en Venezuela, con énfasis en el proceso deliberado de debilitamiento y extinción de los partidos políticos de oposición – resultante en la desaparición del 90% de los partidos políticos durante los últimos ocho años –, la falta de independencia e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, y la vigencia de un régimen de represión y persecución que se ha convertido en política de Estado, y que incluye detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, muertes en custodia y reiteradas violaciones al debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia.

Lo que vemos actualmente es el resultado acumulado de muchos años de deterioro, de socavamiento de la democracia y de criminalización del ejercicio de los derechos. Las OSC se han visto profundamente afectadas, y no solamente mediante la aplicación de leyes restrictivas que limitan su funcionamiento, sino también y sobre todo mediante el establecimiento de un ambiente de alto riesgo, en el cual las amenazas y los ataques contra defensores de derechos humanos y OSC se han convertido en asunto cotidiano. La hiperinflación que vivimos también afecta grandemente el funcionamiento y la estabilidad de las OSC, lo mismo que el éxodo en curso, ya que muchos integrantes y activistas se han ido del país, lo cual ha mermado sus equipos de trabajo.

Lo que resulta esperanzador, sin embargo, es que muchos siguen trabajando desde fuera de Venezuela, y que dentro del país las organizaciones que siguen activas trabajan con un extremo compromiso por la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Si bien hemos sido muy afectadas, hemos encontrado vías y mecanismos que nos permiten seguir trabajando y acompañar a las víctimas en este contexto tan adverso, tales como la integración de redes, el trabajo colaborativo, la conciencia de la necesidad de protegernos y el establecimiento de protocolos de seguridad.

La creciente crisis política y **económica** provocó un gran aumento de las protestas: según lo informó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en enero las protestas fueron un 199% más numerosas que en enero de 2017, mientras que los saqueos aumentaron 642%, indicación de la magnitud de la crisis económica y las reacciones cada vez más desesperadas de la población ante la pobreza y la escasez. La misma fuente reportó 2414 protestas durante los primeros cuatro meses del año, el 85% de las cuales fueron motivadas por la escasez de **alimentos** y servicios básicos. De manera similar, según el análisis **publicado** por el partido de oposición Voluntad Popular, las demandas más comunes formuladas por

“  
 LAS DEMANDAS  
 MÁS COMUNES  
 FORMULADAS POR  
 LAS MÁS DE 400  
 PROTESTAS QUE  
 TUVIERON LUGAR EN  
 LOS DOS PRIMEROS  
 MESES DE 2018 SE  
 RELACIONABAN  
 CON ALIMENTOS,  
 SERVICIOS DE SALUD,  
 CAMBIO POLÍTICO  
 Y DERECHOS  
 LABORALES.  
 ”

las más de 400 protestas que tuvieron lugar en los primeros dos meses de 2018 se relacionaban con alimentos, servicios de salud, cambio político y derechos laborales. Las protestas continuaron durante los meses siguientes: en julio, por ejemplo, se documentaron **2163 protestas**.

Las protestas fueron sistemáticamente reprimidas y los manifestantes criminalizados. Incluso cuando no hicieron demandas políticas, cientos de manifestantes fueron **arrestados arbitrariamente**; aquellos que fueron acusados de instigación bajo la nueva **Ley contra el odio, para la convivencia pacífica y la tolerancia** enfrentaron la perspectiva de hasta 20 años de prisión. Según la OSC PROVEA, al menos siete manifestantes fueron **asesinados** a principios de enero, mientras que el OVCS **documentó** el asesinato de 10 manifestantes durante los primeros tres meses de 2018 y de **cinco más** en los tres meses siguientes.

Los activistas – incluidos manifestantes, dirigentes de OSC, líderes sindicales, defensores de los derechos de los pueblos indígenas y políticos de la oposición – continuaron enfrentando restricciones tales como detenciones sobre la base de acusaciones infundadas, campañas de difamación como la **orquestada** contra Francisco Valencia, presidente de la coalición de sociedad civil por el derecho a la salud CODEVIDA, y allanamientos de sus viviendas, como el que experimentó la activista de derechos humanos **Marvinia Jimenez** en enero. En marzo, **dos líderes estudiantiles** fueron arrestados luego de salir en televisión convocando a una protesta pacífica por la crisis, tras lo cual fueron acusados de incitación al odio, posesión ilícita de un arma de fuego y resistencia a la autoridad. En enero, dos activistas de una organización de la sociedad civil que brindaba educación y capacitación a personas de sectores desfavorecidos fueron **detenidos** bajo cargos endebles de conspiración e incitación pública, y retenidos durante meses a pesar de una **orden judicial** para su liberación.

En julio, PROVEA informó que durante el primer semestre del año 85 personas habían sido **secuestradas** por el estado, detenidas sin acusación ni orden judicial, por motivos políticos. En 51 de estos casos no se había proporcionado ninguna información adicional sobre el paradero de los detenidos. En promedio, estas personas permanecieron desaparecidas por el estado durante 11 días antes de ser llevadas ante un tribunal. La sociedad civil expresó **preocupación** por el **deterioro de la salud** de muchos presos políticos a quienes se les negó atención médica. Fue por esta razón que la CIDH emitió **medidas cautelares** a favor de Juan Carlos Caguaripano, un ex oficial de policía recluido bajo acusaciones de rebelión. En octubre, el maltrato y la tortura de los detenidos quedaron en primer plano cuando el cuerpo de un concejal opositor, **Fernando Albán**, fue hallado fuera del cuartel general del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El gobierno afirmó que Albán se había suicidado, lo cual fue



rechazado por muchos actores de la sociedad civil, que pidieron que se realizara una investigación independiente sobre su muerte. Albán había sido **detenido** cinco días antes, bajo la acusación de participar en un ataque contra el presidente Maduro, cuando regresaba de Nueva York, adonde había asistido a eventos en torno de la Asamblea General de la ONU.

Periodistas que cubrían protestas, informaban sobre temas delicados o reflejaban puntos de vista asociados con la oposición fueron estigmatizados, amenazados, intimidados, atacados y censurados. En enero, durante una protesta en la capital, Caracas, oficiales de policía **obligaron** a un periodista a borrar imágenes que mostraban a las fuerzas de seguridad del estado **intimidando a manifestantes**. La Guardia Nacional también **impidió** a los periodistas filmar escenas en la frontera con **Colombia**, donde la gente huía de Venezuela. En marzo, siete periodistas fueron **detenidos** cuando intentaban informar sobre la situación fuera de la casa del líder opositor Leopoldo López, donde los agentes de seguridad habían ingresado ilegalmente. En julio, oficiales militares **amenazaron** a un grupo de periodistas que cubrían una protesta de pacientes fuera de un hospital en el estado de Lara, e impidieron que siguieran filmando. El mes siguiente, la periodista Ana Rodríguez fue amenazada con violencia física y arresto y se le impidió **cubrir una protesta** de empleados de la empresa petrolera estatal PDVSA. Ese mismo mes, un juez **ordenó** el encarcelamiento del prominente periodista independiente Jesús Medina, **detenido** bajo acusaciones de promover el odio y lavado de dinero. Otras personas fueron criminalizadas por diseminar información que el estado intentaba ocultar, como ocurrió en el caso de un trabajador de PDVSA que **informó** sobre la crisis de la producción petrolera; en represalia, miembros de su familia fueron **arrestados** sin orden judicial.

Estaciones de radio críticas como **Visionaria 104.7** y **Radio Mundial 860 AM** fueron atacadas repetidamente, a veces con violencia, sus equipos fueron destruidos y sus líderes **detenidos**. Una emisora de radio universitaria, **ULA FM**, recibió una advertencia del organismo regulador de comunicaciones, CONATEL, para que dejara de transmitir mensajes que causaban temor entre la población, luego de transmitir el mensaje de un profesor universitario

que expresó preocupación por las malas condiciones de vida de muchos venezolanos.

La crisis económica también afectó a los **medios de comunicación**. El Instituto Prensa y Sociedad **informó** que durante los primeros cuatro meses de 2018, 11 medios de comunicación cancelaron sus ediciones impresas debido a la falta de recursos y suministros. A fines de agosto, tres periódicos se vieron obligados a **cerrar** definitivamente tras el anuncio de nuevas medidas económicas. El Nacional, el único periódico independiente capaz de mantener una edición impresa, fue sometido a **hostigamiento judicial**.

La pérdida de medios impresos volvió aún más importante a internet; en ese contexto los sitios web de varios medios de comunicación fueron **bloqueados** y sus servidores hackeados, al igual que las **cuentas de redes sociales** de la Asamblea Nacional. Liderado por la oposición, en 2017 el órgano legislativo había sido reducido por el presidente Maduro a una virtual impotencia, a través de la creación de una estructura paralela leal a su liderazgo, la Asamblea Nacional Constituyente. Adicionalmente, tres sitios web reportaron ataques de denegación de servicio en agosto. Una **investigación** identificó un patrón de censura en internet centrado en el bloqueo intermitente de sitios de noticias. Hubo medios de difusión censurados a través de ese mecanismo: en agosto, la estación de televisión en español de Deutsche Welle fue temporariamente **inhabilitada** en el país, justamente mientras emitía un documental sobre la crisis venezolana.

La crisis escaló una vez en enero de 2019, cuando Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino, citando disposiciones de la Constitución venezolana, luego de que el presidente Maduro se juramentara para su segundo mandato. Siguió más protestas, las cuales fueron reprimidas con **violencia**, con el resultado de decenas de muertos y cientos de detenidos. Aliados y enemigos internacionales de Venezuela se alinearon para apoyar ya sea al presidente, ya a su nuevo rival, y muchos reclamaron nuevas elecciones, esta vez libres y limpias. Por su parte la nueva Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Michelle Bachelet, instó a que se investigara la violencia. Pareció claro que no se podía permitir que la crisis continuara escalando; sin embargo, también quedó en evidencia que la solución que abra paso al cambio que Venezuela necesita no puede llegarle de afuera, sino que debe surgir del propio pueblo venezolano.

## LAS POSTERGADAS ELECCIONES DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Después de grandes retrasos, las elecciones **originalmente** previstas para fines del mandato del presidente Joseph Kabila en noviembre de 2016 finalmente se llevaron a cabo en la **República Democrática del Congo** (RDC) en diciembre. La espera de dos años, durante la cual el presidente Kabila permaneció en el poder, había fomentado especulaciones de que encontraría alguna forma de desafiar a la Constitución y presentarse nuevamente. En una evolución positiva, en agosto **se anunció** que el presidente Kabila respetaría el límite constitucional de dos mandatos. Persistía el temor de que permaneciera como el poder oculto detrás de un sucesor elegido, particularmente porque a algunas figuras importantes de la oposición **no se les permitió** competir. Pero cuando se llevaron a cabo las elecciones, tanto para la Asamblea Nacional y el Consejo Provincial como para la presidencia, salió primero el candidato opositor Félix Tshisekedi. Se trató del primer traspaso pacífico de poder en la historia posterior a la independencia del país; sin embargo, las elecciones, que tuvo lugar en el marco de un espacio cívico cerrado, se vieron empañadas por acusaciones creíbles de irregularidades en la votación, que dieron lugar a disputas sobre los resultados.

Poco después de las elecciones, **Pascal Mupenda**, de la **Asociación para la Protección Integrada** (PPI), describía la situación en los términos siguientes:

*La situación postelectoral ha estado marcada por cuatro elementos principales. Primero tuvo lugar la evaluación de las apelaciones que algunos candidatos presidenciales presentaron ante el Tribunal Constitucional. La ley electoral permite que los candidatos insatisfechos presenten apelaciones a continuación de las elecciones*



Las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas ante las repetidas postergaciones de las elecciones en la RDC.

Crédito: Jc Wenga/Anadolu Agency/Getty Images

nacionales, presidenciales y legislativas. Los resultados finales solo se proclaman una vez que el Tribunal Constitucional ha emitido un dictamen. Desde que se estableció el Tribunal Constitucional en 2006, el pueblo congoleño en general, y los defensores de derechos humanos en particular, han denunciado su composición, dado que varios de sus miembros mantienen vínculos muy estrechos con el gobierno. Las decisiones sobre apelaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional después de las elecciones de 2006 y 2011 no satisficieron a los solicitantes y desencadenaron violentos conflictos postelectorales entre el presidente Kabila y los candidatos que afirmaban ser su sucesor legítimamente electo.

Después de las elecciones celebradas el 30 de diciembre, la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) proclamó provisionalmente la victoria de Félix Tshisekedi, el candidato de la coalición *Cap pour le Changement*. En respuesta, los partidarios de Martin Fayulu, el candidato de la coalición *Lamuka*, comenzaron a protestar y fueron severamente reprimidos por la policía. Mientras tanto, Martin Fayulu presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional para impugnar los resultados provisionales de la CENI y solicitar un recuento de votos en todos los distritos electorales. Varias misiones de observación electoral apoyaron esta perspectiva, afirmando que contaban con evidencia en su respaldo.

La Conferencia Episcopal Católica del Congo (CENCO), que había desplegado el mayor número de observadores electorales – alrededor de 40.000 – afirmó que sus datos no respaldaban la victoria electoral de Félix Tshisekedi. Sobre esta base, Martin Fayulu solicitó la intervención de la comunidad nacional e internacional para garantizar que los votos fueran contados y se respetara la voluntad popular. El 17 de enero de 2019, los jefes de estado de la Unión Africana solicitaron al Tribunal Constitucional que aplazara su decisión, prevista para el 19 de enero, y se ofreció a enviar una delegación que llegaría el 21 de enero para tratar de resolver la

crisis. La misión fue cancelada cuando el Tribunal Constitucional emitió su resolución el 19 de enero.

Como se esperaba, el Tribunal Constitucional confirmó y proclamó a Félix Tshisekedi como presidente de la RDC, luego de rechazar la solicitud de Martin Fayulu afirmando que era infundada. Tan pronto como la decisión se hizo pública, Martin Fayulu realizó una conferencia de prensa en la que dijo que rechazaba la decisión y se consideraba a sí mismo como el único presidente legítimo, e instó a los ciudadanos congoleños a realizar manifestaciones pacíficas para exigir “la verdad de las urnas”. Pero al margen de algunas protestas aquí y allá, en general persistió en todo el país una precaria calma. Sin embargo, a último momento la ceremonia de inauguración, inicialmente programada para el 22 de enero, fue pospuesta y finalmente tuvo lugar el 24 de enero.

En segundo lugar, está el hecho de que los resultados de las elecciones provinciales y nacionales también fueron cuestionados en varias provincias de la RDC. La CENI proclamó estos resultados cuando la mayoría de las papeletas de voto permanecían en las distintas localidades donde se habían hecho las votaciones y aún no habían sido compiladas. De ahí que la gente se pregunte de dónde sacó la CENI esos resultados, dado que la ley no permite el voto electrónico, y mucho menos la transmisión electrónica de resultados.

En varias partes de la RDC se desarrollaron casi a diario protestas en torno a este problema. La gran mayoría de los ciudadanos congoleños, que votaron a favor del cambio, consideran inconcebible que mientras que la candidatura presidencial del sucesor designado por el presidente Kabila fracasó estrepitosamente, su coalición Frente Común para el Congo (FCC) haya ganado en la abrumadora mayoría de las elecciones provinciales y se haya quedado con la mayor parte de los escaños legislativos nacionales en 23 de las 26 provincias de la RDC.



*En tercer lugar, el contexto ha estado marcado por la violación del derecho del pueblo congoleño a acceder a la información. Durante más de tres semanas estuvieron interrumpidas la conexión a internet, las señales de los medios extranjeros y el servicio de mensajería de texto. Para acceder a internet, escuchar radios extranjeras o ver televisión extranjera, uno tenía que recurrir a proveedores de internet extranjeros. El cierre de las comunicaciones, junto con las restricciones a la libertad de reunión después de las elecciones, tuvieron el objetivo de crear un entorno donde los derechos civiles y políticos de los ciudadanos congoleños pudieran violarse más fácilmente.*

*Finalmente, las amenazas contra los defensores de derechos humanos, masivas en el período preelectoral, no han cedido. El artista de Kivu del Sur conocido como Cor Akim desapareció y fue hallado inconsciente tres días más tarde. Yo mismo fui acosado y arrestado durante una misión de observación y fue retenido durante toda la noche en el cuartel de policía de Bukavu. Varios activistas del movimiento social Lucha por el Cambio (LUCHA) fueron arrestados arbitrariamente.*

Las elecciones se llevaron a cabo en un entorno muy difícil para el activismo. Las protestas fueron a menudo recibidas con fuerza excesiva y letal. El Comité Laico de Coordinación, vinculado con la Iglesia Católica, un actor de importancia en la República Democrática del Congo, organizó protestas tras la celebración de misa en enero y febrero de 2018, pero la respuesta fue letal, ya que las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra las multitudes que protestaban. Se **informó** que al menos nueve personas murieron en actos de violencia de las fuerzas de seguridad contra las protestas de enero y febrero. Los manifestantes fueron repelidos con gases lacrimógenos y durante las protestas se cortó el servicio de internet.

No se trató de incidentes aislados. Según un **informe** publicado en marzo por la Misión de Estabilización en la República Democrática del Congo

(MONUSCO), la misión de paz de la ONU, las fuerzas de seguridad asesinaron a por lo menos 47 personas durante las protestas que tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de enero de 2018. La MONUSCO también acusó a las fuerzas de seguridad de intentar encubrir los asesinatos. En febrero se **estableció** una Comisión de Investigación Conjunta sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos durante las protestas de diciembre de 2017 y enero de 2018, que contó con participación de la sociedad civil. Sin embargo, en abril tres OSC **suspendieron** su trabajo en la Comisión en reclamo por la no implementación de las recomendaciones que la Comisión había emitido, y solo **volvieron a participar** cuando el gobierno hizo concesiones relativas a la provisión de atención médica a las personas heridas durante las protestas.

Los activistas de los numerosos movimientos sociales prodemocracia de la RDC fueron **atacados**. En mayo, 27 activistas de LUCHA fueron **arrestados** mientras se preparaban para un evento de celebración del sexto aniversario del movimiento; poco antes, LUCHA había hecho un llamado a la desobediencia civil no violenta en caso de que las elecciones siguieran demorándose. En diciembre, seis activistas de LUCHA fueron **arrestados** mientras realizaban actividades de sensibilización preelectoral. El mes anterior, 17 jóvenes activistas del movimiento Vigilancia Ciudadana fueron **arrestados** y detenidos luego de realizar una campaña de sensibilización contra la compra de votos. Varios activistas prodemocracia del movimiento Filimbi fueron **detenidos** por su participación en una protesta del 31 de diciembre de 2017, y en septiembre recibieron **penas de un año de cárcel**. Según se informó, se encontraban entre un centenar de personas recluidas en detención secreta, y hubo informes fidedignos de la personas detenidas eran sistemáticamente **torturadas**.

Los mítines de oposición fueron blanco de represión letal en el período previo a la elección. En agosto algunas protestas fueron dispersadas con municiones y gases lacrimógenos; al menos dos personas fueron **muertas** y varias más resultaron heridas. Se **informó** que al menos siete personas habían muerto y más de 50 sufrieron heridas a manos de las fuerzas de



seguridad en actos de la oposición desarrollados a lo largo de cinco días en diciembre.

Estas fueron solo algunas de las protestas del período preelectoral que resultaron en detenciones o violencia de las fuerzas de seguridad, y que se caracterizaron por el uso frecuente de municiones. La CENCO **informó** que durante las protestas desarrolladas entre abril y octubre murieron al menos cinco personas, 91 resultaron heridas y 362 fueron arrestadas. Varias de estas protestas tuvieron lugar en septiembre y se centraron en la calidad de los padrones electorales y la adopción de nuevas máquinas de votación. Estas constituían **preocupaciones** clave de la sociedad civil, particularmente después de que el gobierno **rechazara** todas las ofertas internacionales de asistencia logística, incluso las procedentes de la MONUSCO. Mientras tanto, un proyecto de ley sobre asambleas que había sido aprobado por ambas cámaras legislativas y que hubiera facilitado la realización de protestas, y por lo tanto vuelto más difícil para las fuerzas de seguridad reprimirlas con el argumento de que no estaban autorizadas, fue **descartado** por el presidente Kabila.

El período preelectoral también fue testigo de ataques violentos e intimidación de periodistas: al menos 30 periodistas fueron **blanco** de ataques o amenazas entre el 3 de noviembre de 2017 y el 2 de noviembre de 2018, y 54 periodistas fueron detenidos o encarcelados. Las principales fuentes de amenazas fueron el gobierno y las fuerzas de seguridad. A medida que se acercaba el día de las elecciones, varios periodistas más fueron arrestados y algunos medios de comunicación favorables a la oposición fueron **cerrados**.

Esta represión de las libertades fundamentales se produjo en un contexto de inseguridad y conflicto en varios rincones del extenso país. En un indicio de la magnitud de la violencia, un equipo de expertos internacionales comisionados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los abusos contra los derechos humanos en la región de Kasai **informó** en junio que las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad

de la RDC y las milicias locales constituían crímenes de lesa humanidad. Estos incluían el asesinato de civiles, violencia y torturas sexuales y violencia de origen étnico. En algunas partes del país, los elevados niveles de violencia y el **desplazamiento** que ella provocó desencadenaron una **crisis humanitaria** caracterizada por la desnutrición, la inseguridad alimentaria y la violencia de género.

En este difícil contexto, y frecuentemente a costa de grandes riesgos, la sociedad civil hizo lo que pudo. A través de la CENCO, la Iglesia Católica desempeñó un papel muy importante, tratando de acercar a facciones opuestas y asegurándose de que se celebraran elecciones creíbles. En 2016 promovió entre los partidos políticos el llamado **Acuerdo de Año Nuevo**, que se suponía debía garantizar que las elecciones se realizaran a fines de 2017, y reunió a una serie de grupos de la sociedad civil para **desarrollar** el Manifiesto de Ciudadanos Congoleños, que exigió elevados estándares de manejo electoral y respeto del orden constitucional. Una serie de OSC y movimientos ciudadanos también formaron una plataforma de **monitoreo** electoral para evaluar si se habían cumplido diez principios electorales esenciales; a la postre, solo dos de estos diez principios fueron dados por cumplidos.

Pascal describe otros esfuerzos de la sociedad civil para mejorar la calidad de las elecciones:

*La sociedad civil lanzó varias campañas pidiendo la renovación y el rejuvenecimiento de la clase política. Entre ellas se contaron la campaña ‘**Nosotros, los jóvenes, podemos**’, implementada por PPI junto con otras OSC. Muchos jóvenes se postularon como candidatos.*

*La sociedad civil también trabajó arduamente para crear conciencia acerca de la importancia de las elecciones. Contribuyó con campañas y programas de sensibilización para alentar a la ciudadanía no solamente a exigir elecciones, sino también a hacer un uso útil y responsable de su voto para lograr el cambio deseado. Gracias al trabajo realizado por las OSC, la población comprendió*

“

POR PRIMERA VEZ  
EN SU HISTORIA,  
NUESTRO PAÍS  
AHORA PODRÍA  
TENER UN  
PRESIDENTE  
SALIENTE VIVO Y  
UN PRESIDENTE  
ENTRANTE TAMBIÉN  
VIVO.

”

*relativamente bien el método de votación y cómo utilizar una máquina de votación, aunque no fue posible garantizar el dominio total de estas máquinas por parte de una población que tiene más de 80% de analfabetos.*

*Además, muchas OSC denunciaron las violaciones de derechos humanos orquestadas durante la campaña electoral. También colaboraron con la CENI para asegurarse de que se respetara el calendario electoral y todo se hiciera conforme a la constitución y las leyes electorales.*

*La sociedad civil continuó desempeñando un papel importante durante el examen de las apelaciones de los candidatos tanto ante el Tribunal Constitucional, en el caso de la carrera presidencial, como ante los Tribunales de Apelaciones para las elecciones legislativas nacionales y provinciales, proporcionando evidencia de que los resultados procedentes de los centros de votación divergían de los resultados provisorios que fueron proclamados.*

Pascal concluye con una evaluación del modo en que la experiencia de 2018 se quedó corta y lo que se necesita para mejorar la calidad de la democracia congoleña:

*Las elecciones fueron más significativas en términos de las aspiraciones de los votantes que por sus resultados.*

*Para el pueblo congoleño, las elecciones de 2018 representaron la esperanza de un cambio, que se había mantenido en suspenso desde 2016. Por primera vez en su historia, nuestro país ahora podría tener un presidente saliente vivo y un presidente entrante también vivo.*

*Algunos candidatos fueron excluidos como resultado de procesamientos políticamente motivados. Además, la CENI socavó enormemente la credibilidad de las elecciones, especialmente por la forma en que compiló los resultados. Actualmente la mayoría de los funcionarios electos son jóvenes, pero al mismo tiempo muchos son también del FCC, lo cual significa que las expectativas de cambio de los votantes no necesariamente se cumplirán.*

*Es posible que el estado de la democracia en la RDC mejore, pero para ello es necesario que se cumplan algunas precondiciones. Primero, debe haber un cambio sistémico y sistemático del personal gubernamental. Si la CENI proclamara los resultados reales de las urnas, estaría contribuyendo a evitar un levantamiento popular. También sería prudente que el Tribunal Constitucional y los tribunales de apelación provinciales administraran adecuadamente los casos relativos a los escaños legislativos nacionales y provinciales, para no abrir las puertas a la violencia.*

*En segundo lugar, deben celebrarse elecciones locales y municipales, según lo dispuesto por la ley electoral, a fin de cerrar la brecha entre gobernantes y gobernados.*

*Tercero, el sector de la justicia debe ser reformado, entre otras cosas mediante el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y de gestión.*

*Cuarto, deberían establecerse asociaciones bilaterales entre los cuerpos técnicos de los gabinetes ministeriales y las OSC, en vistas de la adopción de enfoques conjuntos para hacer frente a los desafíos de la democracia.*

*Finalmente, se debe respetar las libertades fundamentales y alentar la tolerancia, para que el espacio público gradualmente se abra.*

Lo que está claro es que el presidente entrante, Félix Tshisekedi, enfrenta una gran variedad de desafíos, exacerbados por el hecho de que es probable que muchos continúen cuestionando la legitimidad de su gobierno. Para muchos ciudadanos movilizados, las elecciones de 2018 no satisficieron sus esperanzas de un cambio real. El nuevo presidente debe demostrar que entiende que el deseo cambio en la RDC aún no se ha cumplido y actuar de manera tal de ayudar a lograr ese cambio. Solo podrá hacerlo si trabaja con la sociedad civil y abre el espacio cívico.

## PAKISTÁN: UN CAMBIO QUE PUEDE NO SER TAL

Las elecciones de **Pakistán** también resultaron en un cambio de gobierno. En agosto Imran Khan se convirtió en primer ministro, luego de que su partido, Tehreek-e-Insaf Pakistán (PTI), saliera primero en las elecciones generales de julio. En ese acto rompió el duopolio establecido entre el Partido Popular de Pakistán (PPP) y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PMLN), el partido gobernante saliente, cuyo líder – Nawaz Sharif, preso por corrupción e inhabilitado para ocupar cargos en 2018 – se había enfrentado con el ejército pakistaní. Un factor crucial para el éxito del PTI fue el apoyo

de las poderosas fuerzas militares de Pakistán; sin respaldo militar, todo gobierno de Pakistán tendrá problemas. Se **especuló** con que los militares habían encontrado un líder sobre quien podían ejercer influencia, tras algunos intentos recientes de frenar su poder. De ahí que el cambio en la cima pueda suponer un escaso cambio real.

En el **período preelectoral** tuvieron lugar cientos de arrestos de miembros de la PMLN y **se supo** que los militares estaban acosando y amenazando a miembros prominentes de la PMLN y el PPP para que apoyaran al PTI. Hubo muchos ataques e **intimidaciones** a **periodistas**, los cuales fomentaron un clima de **autocensura**, en particular en lo que respecta a la cobertura de cuestiones económicas, disputas sobre tierras, extremismo, cuestiones religiosas, el uso de la ley antiterrorista, **abusos** de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos extremistas, y las conexiones entre los militares y el PTI. La estación de televisión independiente Geo TV fue **sacada del aire** en abril, y en mayo se **impidió** la circulación de Dawn, el periódico en inglés más antiguo de Pakistán. En junio, los militares reconocieron que estaban monitoreando los perfiles de redes sociales de destacados periodistas. En julio, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, un órgano independiente, advirtió sobre los intentos “flagrantes, agresivos y descarados” de manipular los resultados de las elecciones.

**Aasim Saeed**, un bloguero que en 2017 fue secuestrado, detenido y torturado antes de ser liberado en respuesta a las protestas de la sociedad civil, y que ahora vive en asilado en el Reino Unido, describe las numerosas restricciones impuestas sobre la libertad de expresión en el contexto de las elecciones de 2018 y la subsiguiente manipulación de los resultados:

*El gobierno utiliza el hostigamiento, las amenazas, el secuestro, el chantaje a través de miembros de la familia, la tortura y, en algunos casos, la muerte para frenar el disenso. Las restricciones a la libertad de expresión han aumentado y muchos medios de comunicación han recurrido a la autocensura. Los periódicos se ven obligados a no dar cobertura a voces disidentes.*





Una mujer pakistaní muestra que votó en las elecciones de julio.

Crédito: Sabir Mazhar/Anadolu Agency/Getty Images

*Lo que resulta más amenazante es el uso que hacen las agencias de inteligencia de Pakistán de medios electrónicos e impresos y redes sociales para acusar de sedición a activistas. Cuando la religión es usada como herramienta y los activistas son acusados de blasfemia, se vuelve realmente peligroso. El Código Penal obliga a aplicar la pena de muerte a quienes son hallados culpables de blasfemia. Los acusados de este delito casi nunca se presentan a los tribunales, porque a menudo son linchados por grupos extremistas.*

*Muchas personas no se dan por vencidas y aún hacen oír sus voces, pero hacerlo es cada vez más peligroso, porque se está secuestrando gente por publicaciones de Facebook o tweets contra la poderosa junta militar o el primer ministro 'seleccionado' por ella. Han empezado a reaccionar si haces críticas en internet al primer ministro o a cualquier ministro. Decir que el primer ministro es ladrón puede llevarte a la cárcel. Antes las críticas a políticos solían estar permitidas, pero ya no.*

*La situación empeoró a medida que se acercaban las elecciones de julio, dado que otros partidos estaban desafiando al partido respaldado por el ejército, que eventualmente ganaría. Los demás partidos no recibieron mucha cobertura en los medios de comunicación tradicionales y el día de las elecciones sus resultados se retrasaron. Se plantearon serias acusaciones de fraude electoral a gran escala, ya que se hizo aparentar que el sistema de transmisión de resultados electrónicos había fallado, aunque en realidad no lo había hecho; la demora fue causada intencionalmente para que las papeletas de votación de los distintos partidos de oposición pudieran ser anuladas manualmente. En varios distritos, el número de votos rechazados fue mucho mayor que el margen de la derrota. El número de votos rechazados fue más alto que nunca. En algunos lugares se hizo un recuento y la oposición obtuvo varios escaños adicionales; sin embargo, no se permitió el recuento en distritos clave, donde la elección de títeres de los militares estuvo asegurada.*

Además de las restricciones impuestas por el gobierno, otra amenaza para la sociedad civil de Pakistán provino de grupos **extremistas** violentos, que hicieron sentir su sombría presencia durante el período de campaña. En julio, al menos 128 personas fueron **asesinadas** durante un mitin del Partido Awami de Balochistán, incluido su candidato Siraj Raisani; ese mismo mes, al menos 20 personas **murieron** en un ataque durante un encuentro del Partido Nacional Awami, incluido su líder Haroon Bilour.

En este contexto, **Peter Jacob**, del **Centro para la Justicia Social en Pakistán**, describe los desafíos que enfrentan las OSC al tratar de participar en las elecciones.

*Un sector del gobierno siempre ha sido escéptica respecto de las OSC; de ahí que la acción contra las OSC, tanto internacionales como nacionales, comenzara en 2015. Se canalizó en gran parte a través de leyes de registro que se usaron para limitar sus operaciones o su rol en las esferas social y pública. También se ha llevado a cabo una campaña de desprestigio, en particular contra grupos defensores de derechos, que los ha obligado a justificar y a concentrarse en mantener su propia existencia. Las OSC también se convirtieron en víctimas del terrorismo, y aunque los ataques terroristas han disminuido gradualmente desde 2015, no se han recuperado de esa situación. Por lo tanto, las elecciones de julio no hicieron gran cosa para mejorar las condiciones de la sociedad civil.*

*Debido a estas amenazas, durante las elecciones hubo pocas organizaciones que pudieron participar o incluso prepararse para movilizar la opinión en torno de las elecciones.*

A pesar de tantos desafíos, Peter encuentra en los niveles de participación electoral de la ciudadanía motivos para un cauto optimismo:

*Las elecciones se llevaron a cabo en un momento en que el gobierno anterior enfrentaba juicios por corrupción y otras acusaciones, por lo que hubo muchas especulaciones y denuncias de fraude. El gobierno*

*y la oposición acordaron formar una comisión parlamentaria para investigar estas denuncias. Cualquiera que sea el resultado, uno espera que ayude a traer madurez y estabilidad a la política y el gobierno de Pakistán.*

*Pakistán ha enfrentado enormes desafíos, tales como el terrorismo y la anarquía, el bajo rendimiento económico y una población en expansión. Es comprensible que el sistema de gobierno sea débil y cabe esperar que la recuperación sea incremental. Además, el sistema electoral no es lo suficientemente fuerte como para lograr un proceso electoral completamente transparente.*

*Pakistán también enfrenta un desafío intrínseco por el hecho de que su constitución establece al mismo tiempo una teocracia y una democracia, es decir una mezcla de religión y política, lo cual plantea riesgos específicos para los derechos de las minorías religiosas.*

*Sin embargo, se puede decir que en las recientes elecciones hubo una amplia participación ciudadana y, por lo tanto, la continuidad del proceso democrático crea esperanzas de construir una democracia más plena. La decisión de la oposición de integrar el parlamento al menos ha asegurado que no haya una crisis política en la fase inmediatamente posterior a las elecciones.*

Si bien muchos coincidían en que había que darle tiempo al gobierno entrante de Imran Khan, este optimismo fue puesto a prueba en diciembre, cuando 18 OSC internacionales recibieron la **orden** de abandonar Pakistán, mientras que otras 20 enfrentaban riesgos de expulsión. A las 18 expulsadas, incluidas *ActionAid*, *International Alert* y *Plan International*, en noviembre de 2017 se les había rechazado la reinscripción sin explicaciones. La decisión afectará a las comunidades atendidas por estas OSC; las OSC internacionales en Pakistán brindan asistencia humanitaria y apoyo para el desarrollo a unos 34 millones de personas, y la ausencia de esta labor vital no podrá dejar de afectar la capacidad de Pakistán para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La orden llegó en medio de un

contexto ya muy restringido para las OSC internacionales que trabajan en Pakistán, a las que se les impide hacer campaña y labor de incidencia. Fue emitida a pesar del **llamamiento** de muchas OSC nacionales para que se permitiera a las OSC internacionales continuar trabajando en Pakistán. Las OSC nacionales seguramente saben que cuando se aplican restricciones a las OSC internacionales, la represión de la sociedad civil nacional suele ser lo que viene a continuación.

Otra prueba clave que debió pasar el Primer Ministro Khan tomó la forma del caso de Asia Bibi, aun en curso al momento de redactar este artículo. Tras cumplir ocho años de prisión a la espera de una sentencia de muerte por blasfemia, Asia, de fe católica, fue **absuelta** en octubre por la Corte Suprema. Pero este no fue el final de la historia: el veredicto provocó protestas de grupos islamistas, que bloquearon carreteras en la capital, Islamabad, insistiendo en que se ejecutara la sentencia de muerte. El Primer Ministro Khan, que originalmente defendió la decisión, intentó sofocar las protestas poniendo a Asia bajo custodia de protección y **prohibirle** que saliera de Pakistán hasta que la Corte Suprema revisara su veredicto. Mientras tanto, **se informó** que su familia estaba siendo perseguida por extremistas, y el abogado de Asia debió huir de Pakistán cuando pensó que su vida corría peligro. Si bien la acción del gobierno tuvo el efecto de detener las protestas violentas, el hecho de que el gobierno apaciguara tan fácilmente al extremismo generó preocupación.

El caso de Asia Bibi expuso las fisuras de la sociedad pakistaní en torno del tema de la blasfemia y las formas en que las acusaciones de blasfemia reprimen los derechos humanos. Se convirtió en un caso testigo y una prueba del compromiso del nuevo gobierno con los derechos humanos fundamentales. La sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, instará al nuevo gobierno a mantener estándares elevados, y espera que Imran Khan demuestre que es independiente y no un peón del ejército.

## CAMBOYA: ELECCIONES DE PARTIDO ÚNICO

Una elección que de ningún modo podía producir un cambio tuvo lugar en **Camboya**. Las elecciones de julio no pudieron sino renovar el mandato del primer ministro Hun Sen, el primer ministro más antiguo del mundo, en funciones desde 1985. El opositor Partido para el Rescate Nacional de Camboya (CNRP) fue **prohibido** en noviembre de 2017, y muchas de sus personalidades principales, incluido su líder Kem Sokha, fueron detenidas o encarceladas bajo acusaciones de insurrección y traición.

Una **representante de la sociedad civil** de Camboya, que por razones de seguridad pidió permanecer en el anonimato, describe el alcance de la represión, que hizo muy difícil que la sociedad civil pudiera movilizarse en torno de las elecciones:

*Esta fue una elección sin oposición, porque después de que el CNRP obtuviera réditos sin precedentes en las elecciones locales de junio de 2017, el Tribunal Supremo lo **disolvió** con el argumento de que fomentaba el disenso con el apoyo de potencias extranjeras. Como era de esperar, el gobernante Partido Popular de Camboya ganó casi todos los 125 escaños que estaban en juego.*

*El gobierno inicialmente invitó a las OSC internacionales a participar en el monitoreo de las elecciones. Sin embargo, la mayoría declinó luego de confirmar la existencia de problemas estructurales, entre los que se contaban la disolución del partido de oposición y la falta de independencia del Comité Electoral Nacional, lo cual no podía sino resultar en elecciones injustas y excluyentes.*

*Había muy poco espacio para que la sociedad civil interactuara con el gobierno. Debido al vago requisito de “neutralidad política”, impuesto por la Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (LANGO) de 2015, se supone que las OSC deben ser políticamente neutrales incluso cuando participan en foros de diálogo relacionados*



con procesos políticos. La cláusula de neutralidad política se ha utilizado repetidamente para cerrar OSC independientes o negarles la personería. Además, el gobierno prohibió el funcionamiento de la plataforma informal de monitoreo electoral organizada por la sociedad civil. Los grupos de monitoreo **aprobados por el gobierno**, que **respaldaron** los resultados, mantenían vínculos estrechos con el partido gobernante.

Se utilizaron contra la sociedad civil varias leyes y reglamentaciones, tales como la LANGO, la Ley Anticorrupción y la Ley de Impuestos. Las acusaciones de corrupción contra activistas de OSC, el cierre de medios de comunicación y variadas formas de intimidación introdujeron restricciones adicionales sobre el funcionamiento de la sociedad civil. El gobierno aplicó una regulación, que sería **rescindida** en noviembre, que exigía a las OSC notificar al gobierno

local tres días antes de realizar cualquier actividad en el terreno. Al ver que se introducían nuevas reglamentaciones que eran aplicadas severamente, la sociedad civil también recurrió a la autocensura durante el período electoral.

Un documento producido por la Unidad de Prensa y Reacción Rápida del Consejo de Ministros, el **Libro Blanco sobre la situación política en Camboya**, destacó que varias OSC estaban **vinculadas** a un intento de “Revolución de colores”, supuestamente respaldado por extranjeros. Los medios alineados con el gobierno también difundieron la idea de que algunos líderes de OSC mantenían vínculos con la Revolución de colores y el CNRP. Además, algunos líderes de OSC se desplazaron de la sociedad civil hacia la arena política. Todo esto tuvo un impacto negativo en la visibilidad de la sociedad civil de cara a la ciudadanía.

La mayoría de los medios independientes fueron cerrados o suspendidos. Como resultado, la sociedad civil careció de canales adecuados para expresar sus preocupaciones. Los espacios alternativos en las redes sociales también declinaron, ya que proliferaron los casos de activistas de las redes sociales que fueron **arrestados** por sus publicaciones o blogs en línea. Antes de las elecciones hubo una **ofensiva** contra las libertades en internet y aumentó la censura. Se utilizó tecnología de vigilancia para monitorear las comunicaciones digitales. Se publicaron muchos clips de conversaciones que involucraban a miembros del partido opositor, activistas de la sociedad civil y líderes de OSC, los cuales fueron presentados como prueba en apoyo de acusaciones contra la sociedad civil.

En resumen, el espacio ya reducido para la sociedad civil se redujo aún más en torno de las elecciones, debido a la existencia de oportunidades extremadamente limitadas para el diálogo multiactor, el uso intensivo de un marco legal represivo, ataques



El gobierno utilizó intensivamente leyes draconianas tales como la LANGO, fuertemente resistida por la sociedad civil desde su aprobación en 2015.

Crédito: LICADHO

“

EL RESULTADO DE LA  
ELECCIÓN VOLVIÓ  
A CATALOGAR A  
CAMBOYA COMO  
UN ESTADO  
DELIBERADAMENTE  
DISEÑADO PARA  
FUNCIONAR CON UN  
PARTIDO ÚNICO.

”

*contra la imagen de la sociedad civil, reducción de su visibilidad pública y falta de acceso a los medios tradicionales, aunado a restricciones en internet y problemas de seguridad digital.*

La **represión** de los medios hizo que fuera prácticamente imposible compartir algo diferente de la narrativa oficial. En mayo, el gobierno **anunció** que supervisaría y controlaría las noticias en línea que tuvieran la intención de causar “inestabilidad” y obligó a los proveedores de servicios de internet a filtrar o bloquear contenido considerado violatorio de la ley. En junio, el gobierno emitió un código de conducta para los periodistas, prohibiéndoles realizar entrevistas improvisadas en lugares de votación y difundir noticias que llevaran a “confusión y pérdida de confianza”. Y a principios de julio, el gobierno **emitió** una nueva directiva sobre las “noticias falsas” en internet, que le confirió el poder de imponer penas de hasta dos años de cárcel y multas de hasta mil dólares estadounidenses, así como de obligar a los sitios web a registrarse en el Ministerio de Información. Esta última disposición demostró, una vez más, el modo en que los estados se han apropiado de la terminología de las “noticias falsas” para suprimir el disenso legítimo. En mayo, el último diario independiente, Phnom Penh Post, fue **expropiado** en circunstancias turbias; 13 integrantes de su personal directivo dimitieron y su redactor jefe fue destituido. También fueron **clausuradas** unas 32 estaciones de radio que transmitían en idioma jemer.

El resultado de la elección volvió a catalogar a Camboya como un estado deliberadamente diseñado para funcionar con un partido único. Pero si acaso se había supuesto que la falsa elección conferiría un sello de legitimidad, hubo señales de que tan vez Hun Sen había ido demasiado lejos. La UE y los gobiernos de Japón y Estados Unidos se negaron a enviar observadores electorales, cuidándose de no reconocer a la elección como genuina. El Relator Especial de la ONU sobre Camboya **cuestionó** la autenticidad de las elecciones. Después de la elección, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que impuso sanciones a Hun Sen y a su círculo interno, y la UE inició un proceso que suspenderá el acuerdo de libre comercio con Camboya a menos que en el próximo año se consigan avances. Antes de las elecciones, 45 países también **se unieron** para pedir al gobierno que restableciera el CNRP. La sociedad civil nacional e internacional **sumó sus voces** de condena. Frente a esto, la superpotencia local, **China**, se mantuvo previsiblemente en silencio. Nuestro entrevistado describe estas diferentes presiones internacionales, así como el modo en que el gobierno de Camboya a menudo logra sostenerse en el filo entre ellas:

*Los países europeos, Estados Unidos y **Australia** mostraron preocupación por la falta de avances hacia la democracia y la ausencia de garantías para el proceso electoral. Hicieron algunas*

*preguntas clave y presionaron al gobierno para que respondiera a sus preocupaciones. Han presionado al gobierno mediante el establecimiento de condiciones para una futura colaboración, suspendiendo los **beneficios comerciales preferenciales** de Camboya bajo el esquema de libre comercio de la UE ‘Todo menos Armas’ y retirando el apoyo a sectores específicos.*

*Al mismo tiempo, **China** y otros países mantuvieron su pleno apoyo al gobierno durante el proceso electoral, y más recientemente cuando la UE **inició procedimientos** para suspender temporalmente el trato comercial preferencial de Camboya. En general, se percibe a Camboya como encerrada entre dos potencias y sin necesidad de tomar partido por ninguna.*

Si bien amenazó con tomar represalias contra la UE, también hubo indicios de que el gobierno podría hacer concesiones ante estas presiones internacionales. El mes posterior a la elección, 14 militantes opositores fueron **indultados** y liberados de la cárcel, mientras que en septiembre fue el turno de Kem Sokha de ser liberado. En diciembre se **avanzó** en una reforma legal que podría permitir a los líderes opositores proscriptos regresar a la política. Parecía que el gobierno se había dado cuenta de que se había pasado de la raya, y en vez de ganar legitimidad internacional la había perdido. Ahora que el trabajo sucio ya estaba hecho, tal vez podría permitirse cierta generosidad.

Pero los viejos hábitos son difíciles de abandonar: en septiembre un antiguo integrante del partido de oposición, **Ban Samphy**, fue encarcelado por un año por compartir una publicación en Facebook en la que criticaba al rey. Se trató de la primera aplicación en Camboya de la nueva ley de lesa majestad, similar a la infame ley de **Tailandia** que penaliza la crítica de la familia real y de ese modo permite acallar a una amplia gama de disidentes. Ese mismo mes, cinco personas vinculadas con la Asociación de Derechos Humanos y Desarrollo de Camboya **recibieron** una sentencia de cinco años de prisión por lo que parecieron ser acusaciones arbitrarias de sobornar a un testigo.

En los primeros meses de 2019 se produjeron **nuevos actos** de represión de las libertades de la sociedad civil.

Claramente, todavía queda mucho por hacer para revertir la maquinaria de represión de Camboya antes de que el país pueda ser considerado una democracia en funcionamiento. Nuestro entrevistado concluye exponiendo algunos de los pasos que sería posible dar:

*Para convertir a Camboya en un estado democrático con un régimen pluralista, el gobierno debe, ante todo, brindar oportunidades a los líderes del antiguo partido de oposición para que reanuden sus actividades, incluso a través de la formación de nuevos partidos políticos. Si fuera posible votar por individuos en vez de por partidos políticos, eso podría ayudar.*

*En segundo lugar, el gobierno debe recuperar la cultura de diálogo entre el partido gobernante y el antiguo partido de la oposición y ver la forma de entenderse mejor y asegurarse de que sus actividades causen el mínimo daño posible unos a otros y a la nación.*

*Finalmente, el gobierno debe solicitar el apoyo de la comunidad internacional, y en particular de los estados signatarios del **Acuerdo de Paz de París (PPA)**. Este acuerdo de 1991 puso fin a la guerra entre Camboya y Vietnam, y además de prever el alto el fuego, el fin de la asistencia militar externa y el retiro de las fuerzas extranjeras, incluyó disposiciones para garantizar el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo camboyano, a través de elecciones libres y justas, y medidas de reconciliación nacional. Necesitamos revivir el espíritu del PPA.*

## RUSIA: PUTIN SE MANTIENE INVICTO

Otro país donde el resultado nunca estuvo en duda fue **Rusia**. El gobierno ha sido acusado en repetidas ocasiones de entrometerse en las elecciones de otros países, pero en 2018 tuvo también las suyas propias de que ocuparse. En la elección de marzo, el presidente en ejercicio, Vladimir Putin, se aseguró



el 77% de los votos, con los cuales se hizo acreedor de un cuarto mandato. No cabe duda de que el presidente Putin disfruta de cierto nivel de apoyo popular: las encuestas de opinión siempre le dieron una ventaja importante. Sin embargo, parece que no solo importa ganar, sino también obtener el mayor número posible de votos. Al igual que ocurrió en el referéndum de Burundi, toda vez que el resultado está asegurado el ganador pasa a priorizar la obtención de una elevada participación. Violaciones electorales en gran escala fueron reportadas a lo largo de este vasto país; entre otras cosas, se **denunció** el relleno de urnas y la inflación de las cifras de presentismo, que podría haber aumentado en hasta **10 puntos** la tasa de participación.

El **veredicto** de la OSCE fue que la elección se llevó a cabo en un “entorno legal y político excesivamente controlado, marcado por la presión continua sobre las voces críticas”, en “ausencia de competencia genuina” y con una amplia cobertura mediática del Presidente Putin. La Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE) **informó** que muchos observadores electorales eran conocidos partidarios del presidente Putin.

En enero se inhabilitó la candidatura del contendiente con mayores probabilidades de constituir una amenaza para la continuidad del presidente Putin, el activista anticorrupción Alexei Navalny, sobre la base de una sentencia previa por malversación de fondos que muchos creen que fue fabricada. Esta proscripción disparó protestas durante las cuales Alexei Navalny fue **arrestado**. Alexei se contó entre las aproximadamente 350 personas arrestadas durante las protestas contra la decisión de prohibir su candidatura. Justo antes de las elecciones de marzo, un grupo de jóvenes activistas que parecían ser parte de un movimiento previamente desconocido, llamado “Nueva Grandeza”, fueron **arrestados** y detenidos, aparentemente con la acusación de ser un grupo extremista con planes para derrocar al gobierno.

Estos arrestos fueron parte de una **campaña** represiva que se redobló en el período preelectoral. En los primeros meses de 2018 **se informó** de torturas y detenciones de activistas. Fue difícil escapar de la sospecha de

que cualquiera que pudiera dejar mal parado al gobierno sería sacado del camino antes de la elección. Unos días antes de la elección, dos OSC activas en el monitoreo electoral fueron consideradas “**indeseables**” en virtud de la Ley sobre organizaciones indeseables promulgada en 2015, que permite al gobierno prohibir organizaciones a las que designe como indeseables, así como penalizar a las organizaciones rusas que trabajan con ellas. Una de las organizaciones prohibidas fue precisamente la EPDE, y como resultado de su proscripción, su aliado ruso, Golos, se vio obligado a dejar de cooperar con ella en la observación electoral.

El gobierno de Putin, más confiado que nunca tras el triunfo electoral, endureció su control del disenso. En abril **bloqueó** la aplicación de mensajería encriptada Telegram, una plataforma muy popular en Rusia, luego de que la compañía se negara a entregar sus claves de encriptación a las fuerzas de seguridad del estado. Miles de personas protestaron y según se informó, 13 personas fueron detenidas. En julio, el estado **extendió** aún más su ya represiva ley del “agente extranjero”, que exige que las OSC y los medios de comunicación que reciben apoyo internacional se autodesignen como “agentes extranjeros”, una categoría claramente destinada a promover la desconfianza pública hacia ellos. Quienes son designados como “agentes extranjeros” también quedan sujetos a regulaciones intrusivas. Según las últimas enmiendas aprobadas por el parlamento ruso, la Duma, los y las periodistas – incluidos los que hacen periodismo ciudadano, tales como los blogueros – también pueden ser designados como “agentes extranjeros”, al igual que cualquier persona que acepte dinero de una organización rusa que a su vez reciba fondos internacionales. También se hicieron modificaciones legales para hacer más difícil que las OSC extranjeras puedan abrir oficinas en Rusia, y más fácil para las autoridades suspender a las OSC registradas como agentes extranjeros. En suma, el poder apretó el puño después de las elecciones.

Estos cambios para volver a las leyes más estrictas tienen importancia a nivel internacional, ya que restricciones como las impuestas en Rusia sobre los “agente extranjero” han sido imitadas en otros países, tales como **Hungría**

e **Israel**; En todas partes donde el populismo de derecha nacionalista está en ascenso, la sociedad civil progresista es difamada por estar supuestamente financiada por extranjeros, o en calidad de agentes de potencias extranjeras. Rusia es un laboratorio en el cual se están probando estrategias de exportación para reprimir a la sociedad civil. Irónicamente, en 2018 una ley de “agente extranjero” fue **propuesta** en **Ucrania**, país con el que Rusia continúa manteniendo un amargo conflicto, con el objetivo declarado de frenar la influencia rusa en el trayecto a las elecciones ucranianas de 2019.

Las numerosas leyes represivas de Rusia no impidieron nuevas protestas, aunque estas a menudo se encontraron con el patrón ahora **familiar** de violencia y detenciones. Más protestas saludaron la toma de posesión del presidente Putin en mayo; estas terminaron con alrededor de 1600 personas **detenidas**, entre ellas Alexei Navalny, quien fue **sentenciado** a 30 días de cárcel. En septiembre también se llevaron a cabo en toda Rusia **protestas** masivas contra un proyecto para aumentar la edad de jubilación; nuevamente la policía utilizó la fuerza para dispersarlas, y según se informó más de 800 personas fueron detenidas.

En agosto, los padres de los jóvenes activistas integrantes del grupo “Nueva Grandeza”, que habían sido arrestados en marzo, **protestaron** en la capital, Moscú, y en otras ciudades, por la continuidad de su detención y denunciaron los malos tratos recibidos por sus hijos. Además, insinuaron que estos habían sido víctimas de **argucias** de miembros de las fuerzas de seguridad para incriminarlos. Según parece, agentes de las fuerzas de seguridad se habían infiltrado en las redes sociales, habían inventado el movimiento y luego habían detenido a quienes le manifestaron su apoyo. Tras las protestas, algunos de los detenidos fueron puestos en arresto domiciliario; sin embargo, el activista de derechos humanos Lev Ponomaryov fue **condenado** a 25 días de cárcel por una publicación en Facebook en la que había convocado a una protesta en apoyo de los jóvenes incriminados.

El presidente Putin puede estar seguro de que cuenta con seis años más para moldear al país a su imagen y semejanza. Durante este tiempo podría elegir un sucesor o, en cambio, instalarse en la presidencia de por vida. Las protestas continuarán exigiendo mejoras en Rusia, pero cabe esperar que enfrenten la represión creciente de un régimen envalentonado por el resultado de las elecciones.

## CAMERÚN: 26 AÑOS Y CONTANDO

También hubo pocas posibilidades de cambio en las elecciones presidenciales de octubre en **Camerún**. El presidente Paul Biya se presentó a la elección tras 36 años en el poder y obtuvo su séptimo mandato con el 71% de los votos.



Activistas de Pussy Riot invadieron el campo de juego durante la final de la Copa del Mundo en julio en Moscú.

Crédito: Ian MacNicol/Getty Images

Lo ayudó la existencia de una oposición dividida que no pudo converger en torno de un candidato de unidad. Las elecciones tuvieron lugar en un país también dividido: las regiones minoritarias anglófonas de Camerún son sede de violentos conflictos entre separatistas armados y fuerzas de seguridad, que **se intensificaron** durante 2018. La represión gubernamental contra lo que comenzó como un movimiento pacífico de independencia fue acompañada de numerosas **violaciones** de derechos humanos, incluidos el asesinato y la detención de personas sospechosas de ser partidarias de la secesión, así como la quema de aldeas. El conflicto **desplazó** a cientos de miles de personas, y alrededor de 25.000 huyeron a la vecina **Nigeria**. En el momento de la elección **se informó** que al menos 400 civiles y 170 policías y militares habían muerto en las regiones anglófonas durante el año precedente. Los activistas anglófonos no estuvieron solos: el año también fue testigo de ataques contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y las personas LGBTQI. Mientras tanto, las fuerzas terroristas de Boko Haram seguían propagando la violencia en el norte.

Con este telón de fondo, y con algunos centros de votación establecidos en **cuarteles militares**, no resultó sorprendente que la participación en las regiones anglófonas fuera muy baja; según **se informó**, alcanzó apenas el 5%. Esto dio cuenta tanto el descontento que predominaba entre los ciudadanos anglófonos como del poder de las amenazas de los separatistas sobre los potenciales votantes.

Pero, aun así, al igual que en Camboya, la élite gobernante no quiso correr riesgos y se esforzó por inclinar aún más la votación a su favor. Entre las irregularidades **alegadas** por los grupos de oposición se contaron la violencia, la intimidación de votantes y el relleno de urnas; asimismo, varios candidatos presidenciales de oposición **acusaron** a la emisora pública de parcialidad en su cobertura. Una protesta de la oposición programada para septiembre para denunciar el uso de cuarteles militares como centros de votación fue **prohibida** por motivos de orden público. Y, antes de que se anunciaran los resultados, se prohibieron las protestas y las reuniones y se **impusieron** restricciones sobre internet, tales como reducciones de velocidad y

limitaciones del ancho de banda. El gobierno de Camerún está acostumbrado a usar estas tácticas, como lo demostró en 2017, cuando **interrumpió el servicio** de internet durante tres meses en las regiones anglófonas.

La victoria desató lo que pareció ser una nueva ola de represión contra la libertad de expresión, con al menos seis periodistas **detenidos** por su cobertura de la situación política y la crisis en las regiones anglófonas. En octubre, la policía **impidió** que tres organizaciones de la sociedad civil dieran una conferencia de prensa sobre los resultados de las elecciones, rodeando el hotel donde se iba a llevar a cabo el evento. Ese mismo mes, se **prohibió** una marcha de la oposición en protesta contra los resultados en la ciudad más grande de Camerún, Douala. Las fuerzas de seguridad se desplegaron en gran número al principio y al final de la ruta planificada, y fuera de las viviendas de dos líderes de la oposición. La policía antidisturbios también fue enviada a lugares clave para evitar posibles protestas en Douala y en la capital, Yaoundé.

En el marco de la represión que siguió a las elecciones se produjeron nuevos episodios de violencia: según **se informó**, en noviembre al menos 15 personas murieron en enfrentamientos en las regiones anglófonas. La violencia y la represión parecen continuar. La victoria electoral del presidente Biya hará poca diferencia para buena parte de la ciudadanía de Camerún.

## BANGLADESH: AÑO DE REPRESIÓN PREPARA VICTORIA ABRUMADORA DEL PARTIDO GOBERNANTE

Otro país donde hubo pocas posibilidades de cambio fue **Bangladesh**. Antes de las elecciones de diciembre, la ya precaria situación de derechos humanos **se deterioró** aún más cuando el partido gobernante de la Liga Awami intentó negar sistemáticamente el espacio del disenso y el apoyo de la oposición.

En enero, el gobierno comenzó a arrestar a partidarios del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), en vísperas del anuncio del veredicto



en un juicio por corrupción contra la líder del BNP y ex primera ministra Khaleda Begum Zia. Esta fue declarada culpable y recibió una sentencia de cinco años, lo cual la dejaba fuera de las elecciones. Cerca de 5000 personas, simpatizantes de la oposición o sospechosas de serlo, fueron arrestadas en la redada. El BNP **acusó** al gobierno de hacer arrestos en masa e implicar a personas con acusaciones falsas. Varios candidatos de la oposición fueron **atacados** o sufrieron desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales. En marzo, **Jakir Hossain Milton**, un activista del BNP, murió mientras estaba bajo custodia policial; su familia afirmó que su muerte había sido el resultado de la tortura.

La política de arrestos en masa continuó. En septiembre, un portavoz del BNP declaró que más de 1500 líderes y activistas del partido habían sido arrestados a lo largo de Bangladesh durante un período de dos semanas. Según dicho portavoz, policías uniformados o de civil habían allanado las viviendas de los líderes del BNP y hostigado a sus familiares. Ese mismo mes, policías de civil **arrestaron** a decenas de manifestantes que participaban en una protesta pacífica fuera del Club Nacional de la Prensa para exigir la liberación de Khaleda Zia. También en septiembre, la policía **arrestó** a varios líderes y miembros del BNP antes de una reunión pública planificada en la capital, Dhaka.

A los **numerosos** arrestos y detenciones de figuras de la oposición siguió la apertura de miles de casos judiciales, justificados a partir de una variedad de leyes, contra líderes y partidarios de los partidos de oposición, y en particular del BNP; muchas de las acusaciones parecieron ser infundadas. Hacia noviembre **se afirmó** que se habían presentado 3736 casos contra 313.130 líderes y simpatizantes de la oposición.

A medida que se acercaban las elecciones, agencias de aplicación de la ley y activistas del partido gobernante **continuaron obstruyendo** las reuniones y mítines de oposición. En noviembre, la policía detuvo un evento organizado por el partido político Islami Andolan Bangladesh para exigir elecciones libres y justas. Ese mismo mes, una reunión del BNP fue atacada por

activistas alineados con el gobierno, quienes hirieron a ocho miembros del BNP. Integrantes y militantes de la Liga Awami también atacaron a miembros del BNP durante una reunión interna en la casa de un líder del partido.

La represión se extendió a la sociedad civil, entorpeciendo su tarea de forzar al partido gobernante a rendir cuentas y supervisar las elecciones. El grupo de derechos humanos **Odhikar** fue objeto de una **campaña de desprestigio** por parte de los medios de comunicación alineados con el gobierno, que lo **acusaron** de realizar acciones antiestatales y exigieron su cierre. Durante años, Odhikar ha sido **deliberadamente** sometido a retrasos burocráticos y la Oficina de Asuntos de las ONG ha retenido su registro obligatorio. Miembros del personal y activistas de Odhikar han estado bajo vigilancia y han sido detenidos arbitrariamente por sus actividades. En noviembre, la Comisión Electoral de Bangladesh **canceló** abruptamente la acreditación de Odhikar como observador electoral.

Los medios de comunicación enfrentaron restricciones al cubrir historias que dejaran mal parado al gobierno. En junio, la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones de Bangladesh (BTRC) bloqueó brevemente dos sitios web nacionales de noticias. En julio, en una de las varias instancias en que grupos estudiantiles **se movilizaron** a favor del gobierno para reprimir el disenso, miembros de la Liga Chhatra de Bangladesh, el ala estudiantil de la Liga Awami, **atacaron** e **hirieron** a Mahmudur Rahman, ex editor de un periódico cerrado que había sido cerrado por el gobierno en 2013. Mahmudur había comparecido ante el tribunal para pedir fianza en un caso de difamación penal abierto contra él por sus supuestos comentarios despectivos sobre figuras políticas de alto nivel. Según un **informe** de Odhikar publicado en junio, solo en los primeros seis meses del año hubo al menos 16 casos de desapariciones forzadas y 40 ataques contra periodistas.

Las restricciones aumentaron por efecto de la Ley de Seguridad Digital, **aprobada** en septiembre para reemplazar algunas secciones de la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ley TIC). Desde 2013 la **Sección 57** de la Ley TIC constituía una herramienta clave para

“  
 EN OCTUBRE,  
 LOS MIEMBROS  
 DEL CONSEJO  
 DE EDITORES DE  
 BANGLADESH  
 FORMARON  
 UNA CADENA  
 HUMANA PARA  
 EXIGIR CAMBIOS  
 A LA LEY DE  
 SEGURIDAD DIGITAL,  
 EXPRESANDO EL  
 TEMOR DE QUE  
 FUERA UTILIZADA  
 PARA ACALLAR A LOS  
 PERIODISTAS.”

la represión de críticos, activistas y otras voces disidentes; **descripta** como una ley de blasfemia de facto, criminalizaba a cualquiera que “cause daño o pueda dañar la creencia religiosa”. La nueva ley no solamente incorporó la Sección 57, sino que también fue más allá al agregar otros delitos definidos de manera amplia y vaga e imponer castigos desproporcionados. Otorgó al estado el poder de bloquear o eliminar cualquier información en medios digitales que se considere que obstaculiza la armonía o el orden público, o que siembra el odio comunitario. La ley incluye severas sanciones por difamación, por herir sentimientos religiosos, y por publicar o difundir deliberadamente algo que pueda propagar el odio y crear enemistad. Criminaliza la difusión de propaganda negativa contra el himno nacional, la bandera nacional, la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1971 y el Jeque Mujibur Rahman, líder de la independencia y padre del actual Primer Ministro Sheikh Hasina. La narrativa en torno de la guerra de independencia sigue siendo controvertida debido a la existencia de afirmaciones encontradas sobre los roles desempeñados por los padres de los principales líderes del partido, y porque los hijos de los luchadores por la libertad continúan disfrutando de una posición privilegiada, ya que un sistema de cuotas les confiere un acceso especial a empleos en la burocracia estatal. Los activistas por la reforma del sistema de cuotas fueron **blanco de ataques**.

La Ley de Seguridad Digital se aprobó pese a la fuerte **oposición** de periodistas y activistas de derechos humanos, **incluido** el Consejo de Editores de Bangladesh. En octubre, los miembros del Consejo formaron una **cadena humana** para exigir cambios a la ley, expresando el temor de que fuera utilizada para acallar a los periodistas. A finales de ese mes, la policía usó sus nuevos poderes para arrestar a Moinul Hosein, un destacado crítico del gobierno y artífice de una coalición entre el BNP y otros partidos, bajo acusaciones de difamación. En octubre, el destacado activista por el derechos a la salud **Zafrullah Chowdhury** fue **acusado de traición** por hacer declaraciones presuntamente falsas contra el jefe del ejército. Posteriormente **se presentaron** contra él otras acusaciones, tales como las de acaparamiento de tierras y extorsión. Muchos creyeron que las acusaciones estaban motivadas por su rol aglutinador de la coalición de oposición.

**Shahidul Alam**, un conocido periodista y activista, fue **arrestado** y detenido en agosto luego de que diera una entrevista sobre las **protestas** estudiantiles, centradas entre otras cosas en el sistema de cuotas, que fueron violentamente **reprimidas** por las fuerzas de seguridad. Shahidul fue acusado bajo la Sección 57 por hacer **declaraciones** “falsas” y “provocativas”. Expertos en derechos humanos de la ONU **condenaron** su detención y exigieron su liberación, y en octubre unos 60 fotógrafos asistieron a una **protesta** para exigir su liberación inmediata. Shahidul fue **liberado bajo fianza** en noviembre, tras pasar 107 días en la cárcel.

Como complemento de esta represión, las autoridades llevaron a cabo una **vigilancia** y un monitoreo intrusivo e intensivo de las redes sociales. La policía registró cientos de quejas, entre otros contra autores de publicaciones en redes sociales y periodistas que criticaban al BNP y a sus líderes. En octubre, el gobierno anunció la formación de un grupo de nueve miembros para “detectar rumores” en las redes sociales -y particularmente en Facebook, una herramienta clave para expresar disenso y organizar protestas en Bangladesh- y denunciarlos a la BTRC para su filtrado o bloqueo. A principios de diciembre, ante la proximidad de las elecciones, la BTRC **bloqueó** 54 sitios web de noticias con el objetivo declarado de prevenir la propagación de rumores. Una unidad de policía de élite arrestó al editor del sitio web de noticias *Daily71* y lo dejó en prisión preventiva bajo la Ley de Seguridad Digital por supuestamente “publicar noticias sediciosas, falsas y sin fundamento” en las redes sociales.

La censura también se hizo sentir en círculos académicos. El profesor Morshed Hasan Khan fue **suspendido** de la Universidad de Dhaka por escribir una columna donde criticaba al jeque Mujibur Rahman, lo que provocó protestas del ala estudiantil de la Liga Awami. Otro prominente académico y escritor, Zafar Iqbal, fue **atacado** con un cuchillo por un agresor que lo acusó de ser un “enemigo del Islam”. Se trata de una acusación grave; desde 2013, **extremistas** religiosos han **asesinado** a más de una docena de escritores, blogueros y activistas seculares, ateos o no musulmanes, evidentemente legitimados por el represivo clima legal.

Durante la evaluación del Examen Periódico Universal (UPR) de Bangladesh en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo, el gobierno respondió con **silencio y negación** a las preguntas sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y ataques contra defensores de derechos humanos. A pesar de estas muchas y graves fallas, Bangladesh fue uno de los varios estados violadores de derechos que en octubre resultaron **elegidos** para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos en el período 2019-2021, poniendo en cuestión la efectividad de la institución para llamar a los estados a rendir cuentas (*véase sección 4*).

Al final del año, la campaña represiva dio sus frutos al BNP y al primer ministro Hasina: el partido gobernante y sus socios de coalición obtuvieron un **asombroso** 96% de los votos, con lo cual se llevaron todos los escaños parlamentarios, excepto diez. El día de las elecciones hubo al menos 17 muertes de activistas partidarios y policías, irregularidades generalizadas en las boletas y acceso limitado para observadores electorales independientes. Parece haber poco espacio para que la oposición responsabilice al gobierno de turno; la sociedad civil independiente y promotora de derechos tiene por delante una larga lucha para hacerse su propio espacio.

## EGIPTO: DESCONTENTO EN FORMA DE BAJA PARTICIPACIÓN

De manera similar, la elección presidencial de **Egipto**, celebrada en marzo, tuvo el solo propósito de mantener en el poder al actual líder, el ex militar Abdel Fattah el-Sisi. Desde que llegó al poder en 2014, el presidente Sisi ha **reprimido** sin piedad a la sociedad civil, y muchos activistas de la sociedad civil y de la oposición están en la cárcel, mientras que algunas de las principales OSC han sido **difamadas** por importantes políticos, acusadas de ser el brazo ejecutor de fuerzas de inteligencia extranjeras. Por si acaso representara algún peligro, Sami Hafez Anan fue **arrestado** y mantenido detenido por violar el código militar de Egipto inmediatamente después de anunciar su intención de competir contra el presidente Sisi en enero. Otro candidato potencial, Ahmed Shafiq, **retiró** su potencial candidatura en enero, tras ser arrestado en su casa de los **Emiratos Árabes Unidos** y deportado a Egipto.

En consecuencia, el presidente Sisi contó apenas con la oposición simbólica de un candidato seleccionado de entre las filas de sus seguidores, y la elección cumplió su función de legitimar la continuidad del titular en el cargo, aunque con una **baja participación** de solo 41% y con un número inusualmente alto de anulación de boletas electorales: en efecto, se **reportó** que más de un millón de votantes tacharon ambos nombres en la papeleta y escribieron en su lugar el nombre del futbolista egipcio Mohamed Salah, al



punto que el jugador de fútbol ocupó informalmente el segundo lugar, con un mayor caudal de apoyos que el candidato ficticio de oposición. Cuando solo queda el ritual de la democracia y la sustancia ha sido desvirtuada, cabe esperar que la ciudadanía recurra a los medios que tenga a mano para comunicar su frustración.

## ZIMBABUE, SIN RUPTURA DECISIVA CON EL PASADO

En **Zimbabwe** las elecciones mantuvieron en el poder al partido gobernante y no se produjo la ruptura decisiva con el pasado que muchos esperaban. Esta elección de presidente y representantes parlamentarios fue la primera desde que el ex presidente Robert Mugabe, que había gobernado el país desde 1980, fuera obligado por el ejército a **renunciar**, en el marco de desacuerdos sobre la designación de un sucesor, en noviembre de 2017. La elección se realizó a fines de julio y sus resultados, anunciados en agosto, mantuvieron en el poder a ZANU-PF, el partido que gobernaba Zimbabwe desde su independencia. Emmerson Mnangagwa, el exvicepresidente que había reemplazado a Robert Mugabe, fue declarado ganador. Con poco más de la mitad de los votos emitidos, logró evitar una segunda vuelta contra el candidato ubicado en segundo lugar. ZANU-PF también mantuvo el control de ambas cámaras del parlamento, con pérdidas para el principal grupo opositor, la Alianza del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC).

Dado lo ajustado del resultado, los partidarios de la oposición **cuestionaron** de inmediato la credibilidad de la elección. Se informaron **irregularidades** en el registro de votantes y actos de **coerción** e **intimidación** -incluida la denegación de ayuda alimentaria a partidarios de la oposición en algunas zonas rurales. Si bien las elecciones fueron mayormente pacíficas, no cabe decir lo mismo del periodo postelectoral, caracterizado por **protestas** que suscitaron una respuesta desproporcionada de las fuerzas de seguridad. En el caso más dramático, al menos seis personas **resultaron muertas** cuando la policía abrió fuego contra una protesta frente a la Comisión Electoral de Zimbabwe el 1 de agosto. La policía también golpeó a la gente y usó contra ella

gases lacrimógenos y cañones de agua. Muchos miembros de la oposición se escondieron cuando las fuerzas de seguridad y sujetos no identificados **entraron a buscar** a funcionarios de la oposición y los **atacaron** y hostigaron. El 2 de agosto la policía **allanó** la sede del MDC, acusando a la oposición de fomentar la violencia, clausurando las oficinas y llevándose a 22 personas para interrogarlos. Al día siguiente, la policía antidisturbios **irrumpió** en una conferencia de prensa del MDC e intentó disolverla. También hubo varios **ataques** contra periodistas, tanto antes de las elecciones como en el marco de la violencia postelectoral.

Los sucesos siguientes mostraron que la dura respuesta a las **protestas** que cuestionaban los resultados electorales no fue un hecho aislado: en enero de 2019 las protestas por los precios del combustible también fueron recibidas con **fuerza letal**, **detenciones** y una **interrupción** del servicio de internet.

Por el momento, el nuevo Zimbabwe se parece mucho al anterior. Las elecciones dejaron en evidencia que, al igual que en Egipto y Pakistán, los **militares** continúan siendo la fuerza dominante en la política nacional. Como la de muchos otros países, la experiencia de Zimbabwe ha **demostrado** que una mera rotación de élites resultante de juegos de poder político más que de una real aspiración de cambio, no alcanza para lograr una verdadera democracia.

## RUANDA: TODO SIGUE COMO SI NADA

Las elecciones parlamentarias de septiembre en **Ruanda** tampoco se salieron de libretto. Mientras que dos partidos de oposición entraron al parlamento por primera vez, la coalición gobernante del Frente Patriótico de Ruanda siguió siendo, de lejos, el partido más grande. Mientras se llevaban a cabo las elecciones, una de las personas que no pudo expresarse fue la ex candidata presidencial **Diane Rwigara**, quien permaneció detenida bajo acusaciones impositivas y de insurrección, con su juicio **aplazado** y sus bienes familiares **subastados** por el gobierno. Finalmente fue **absuelta** en diciembre.

Al igual que en Camboya, el gobierno de Ruanda pareció celebrar su victoria con una muestra de generosidad, una vez que la tarea de conservar el poder parlamentario fue concluida con éxito: poco después de la elección, 2140 presos políticos fueron **liberados** de la cárcel, incluida la líder opositora Victorie Ingabire y el músico Kizito Mihingo. Pero el presidente Paul Kagame, en el cargo desde el año 2000, recordó a los afortunados que fueron liberados quién era la autoridad a cargo, advirtiéndoles que fueran “humildes” y “cuidadosos”, o serían devueltos a la cárcel.

Durante largo tiempo **Ruanda** ha logrado utilizar su estatus de caso exitoso de desarrollo postconflicto para minimizar su falta de libertades democráticas. Pero el ejemplo de Etiopía (*discutido anteriormente*) ha expuesto las limitaciones del modelo de desarrollo dirigido por el estado perseguido por Ruanda. En lo sucesivo, la sociedad civil instará a Ruanda a seguir a Etiopía por el camino de la reforma.

## AZERBAIYÁN: OTRO RESULTADO PREDECIBLE

El presidente de **Azerbaiyán**, Ilham Aliyev, en el poder desde 2003, **convocó** elecciones presidenciales anticipadas para abril, seis meses antes de lo previsto. Arguyó que la situación de seguridad en el disputado territorio de Nagorno-Karabaj requería de una votación anticipada; sin embargo, muchos sospecharon que el verdadero propósito era perpetuar el poder del presidente antes de que pudiera organizarse cualquier oposición. Ninguna elección ganada por el presidente Aliyev ha sido considerada libre o justa por los observadores internacionales, y la edición de 2018 no fue diferente. Tuvo lugar en un contexto de espacio cívico cerrado en el cual muchas voces disidentes permanecen tras las rejas y los medios independientes están estrictamente restringidos.

Los principales partidos de oposición se quejaron de las restricciones y de que el tiempo era insuficiente para organizarse, y boicotearon la elección. Pese a las limitaciones, alrededor de 1000 personas **protestaron** a fines de marzo para exigir elecciones libres y justas y llamar a un boicot de la votación

de abril. Se llevaron a cabo otras protestas, y aunque estas fueron toleradas, se **advirtió** a los manifestantes que no usaran determinadas consignas.

El presidente Aliyev ganó fácilmente las elecciones; como en Egipto, se afirmó que varios de los que compitieron con él habían sido escogidos para ofrecer una oposición meramente simbólica. Una vez más, los observadores decretaron que la elección no había sido ni libre ni justa. La OSCE **concluyó** que la votación había tenido lugar en un entorno restrictivo en el cual eran negadas las libertades fundamentales. Su informe describió el relleno de las urnas y la falta de pluralismo en los medios. En respuesta, los partidarios del presidente invadieron la rueda de prensa de la OSCE y obligaron a suspenderla.

Tras su victoria en las elecciones, el gobierno del presidente Aliyev avanzó en la consolidación de su poder mediante el **bloqueo** de varios sitios web de noticias, la **difamación** de OSC y, en noviembre, la **detención** de varios activistas que realizaban una protesta para conmemorar el Día Nacional del Renacimiento, aniversario del primer levantamiento de masas contra el poder soviético. La reactivación del poder popular sigue estando en el orden del día en Azerbaiyán.

## HONDURAS: REPRESIÓN TRAS ELECCIÓN FRAUDULENTO

En enero, el presidente de **Honduras**, Juan Orlando Hernández, fue juramentado para su segundo mandato a pesar de que su victoria en las elecciones de noviembre de 2017 había sido ampliamente condenada por **fraudulenta**. El resultado provocó protestas masivas, que a su vez enfrentaron represión estatal. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) **concluyó** que se había utilizado fuerza excesiva y letal contra las protestas postelectorales, con por lo menos siete personas muertas en lo que podrían haber sido ejecuciones extrajudiciales. El informe también expresó preocupación por el hecho de que los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de actos de violencia no fueron procesados. Los problemas identificados por el informe



En enero la asunción del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue saludada por protestas, tras una elección que la mayoría percibió como fraudulenta.

Crédito: Valerian Mazataud/Anadolu Agency/Getty Images

volvieron a hacerse presentes en junio, cuando la fiscalía nacional desestimó las acusaciones contra tres agentes de policía denunciados por torturar a un grupo de defensores de derechos humanos el año anterior; en respuesta, el ACNUDH emitió una declaración denunciando la persistente impunidad.

A medida que avanzaba 2018, fueron los ciudadanos de Honduras quienes pagaron el precio de la victoria del presidente, ya que continuaron viviendo en un clima de continuo deterioro de los derechos humanos, mientras el gobierno continuaba negándose a hacer concesiones. Los ataques contra defensores de derechos humanos, manifestantes, periodistas y simpatizantes de la oposición, asesinatos incluidos, continuaron en la medida en que la **crisis post-electoral** se extendió a 2018.

En enero la oposición convocó una huelga de una semana; la policía desplegó innumerables obstáculos para tratar de disuadir a los manifestantes de unirse a la acción; cuando se produjo una protesta en el distrito de Colón, agentes de policía abrieron fuego y mataron a un transeúnte, Anselmo Villarreal. En febrero se utilizaron gases lacrimógenos para **dispersar** protestas estudiantiles.

Ese mismo mes llegó una **delegación de la ONU** con el objetivo de hablar con diferentes grupos, evaluar la situación y convocar a un diálogo nacional. Las recomendaciones de la delegación incluyeron la creación de una comisión de investigación independiente sobre el contexto postelectoral, incluidas las violaciones de derechos humanos. Pero en un indicio de lo difícil que se había vuelto la expresión del legítimo disenso, una protesta fuera de las oficinas de la ONU en Honduras fue reprimida durante un encuentro de la delegación con líderes de la oposición. También volvieron a utilizarse gases lacrimógenos en choques entre estudiantes y policías.

En febrero la CIDH celebró una **audiencia** con representantes de OSC, que llevaron testimonios y pruebas de 38 asesinatos, torturas infligidas a 76 personas, amenazas contra 73 activistas, 1257 arrestos, la detención de 24 presos políticos, lesiones causadas a 393 personas durante las protestas, el desplazamiento de 105 personas por la violencia política y 192 instancias de represión de protestas. La evidencia apuntaba claramente a la existencia de una represión sistemática y organizada.

Sin embargo, el gobierno se negó a apoyar la propuesta de la oposición de crear una comisión independiente para investigar las 23 muertes producidas durante la crisis postelectoral. En lugar de reconocer los problemas o actuar en función de las recomendaciones, el gobierno contraatacó. En febrero, un funcionario de gobierno **acusó** a las OSC de desestabilizar el país y causar una gran parte de los problemas nacionales. El funcionario pareció apuntar específicamente a dos OSC que hacen campaña contra un proyecto minero en la región de Azacualpa, en el cual se ha denunciado que varios políticos tienen un interés financiero.

En marzo, una protesta contra el gobierno en la ciudad de Choluteca fue reprimida con balas de goma; otras dos protestas contra el gobierno fueron reprimidas en abril. Ese mismo mes, el abogado de derechos humanos **Carlos Hernández** fue asesinado en la ciudad de Tela. Los primeros meses de 2018 también revelaron **varios casos** de restricción de protestas de trabajadores y activistas ambientales. En mayo, la policía reprimió una protesta del Día del Trabajo, y otra protesta contra el aumento de los precios de la electricidad fue reprimida con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Cualquiera que sea visto como un obstáculo para el poder del estado, ya sea por cuestionar el resultado de las elecciones o por trabajar en algún otro tema sensible, podría convertirse en objetivo: en mayo, activistas que ocupaban el sitio donde se desarrollaría un proyecto hidroeléctrico fueron **desalojados** con gases lacrimógenos por la policía y el ejército. En julio se llevó a cabo una **huelga** nacional de transporte de cinco días en contra de los peajes y los precios del combustible; las protestas fueron repelidas con arrestos y el habitual empleo de gases lacrimógenos. También hubo varios casos de ataques contra periodistas que informaban sobre las acciones policiales. Los estudiantes que protestaban por los costos de transporte fueron **amenazados** con la expulsión de sus instituciones, y los maestros que permitieron las acciones de protesta se arriesgaron a ser despedidos. En agosto se hizo público un video que mostraba a dos manifestantes estudiantiles, Mario Suárez y Gerson Meza, cuando eran **secuestrados** por agentes de seguridad. Ambos fueron hallados muertos al día siguiente.

No es de extrañar, entonces, que cuando el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, **Michel Forst**, visitó Honduras en abril y mayo, determinara que la gran mayoría de los defensores de derechos humanos no trabajan en un contexto seguro y habilitante. El relator subrayó específicamente los conflictos en torno a los recursos naturales y el derecho de la tierra. De manera similar, el **informe** de una delegación de la CIDH que visitó Honduras en julio y agosto delineó las condiciones de riesgo extremo que enfrentan los y las defensoras de derechos humanos y el aumento de la criminalización de la labor de derechos humanos. El informe concluyó que las protestas postelectorales habían sido reprimidas con fuerza indiscriminada y desproporcionada.

Desafortunadamente, Honduras continúa ofreciendo un caso testigo de las consecuencias de elecciones defectuosas que, aunque permiten a las élites retener el poder, terminan necesitando ser apuntaladas por una continua represión y la permanente violación de derechos.

## MALI: UN PEQUEÑO PEDAZO DE HISTORIA ELECTORAL

Un pequeño capítulo de la historia electoral se escribió en **Mali** en agosto, cuando por primera vez las elecciones presidenciales requirieron de una segunda vuelta antes de darle el triunfo al gobernante

“

HONDURAS  
OFRECE UN CASO  
TESTIGO DE LAS  
CONSECUENCIAS  
DE ELECCIONES  
DEFECTUOSAS QUE,  
AUNQUE PERMITEN A  
SUS ÉLITES RETENER  
EL PODER, TERMINAN  
NECESITANDO SER  
APUNTALADAS POR  
UNA CONTINUA  
REPRESIÓN Y LA  
PERMANENTE  
VIOLACIÓN DE  
DERECHOS.

”



de turno. La votación se llevó a cabo en un ambiente tenso, con **crecientes restricciones** al uso de internet, **incluida** la desaceleración de las conexiones y el bloqueo de algunos sitios de redes sociales. La estación de radio Renouveau FM fue **clausurada** en agosto por el gobernador de la capital, Bamako, luego de que uno de sus programas transmitiera los reclamos de fraude electoral de un activista opositor; cuando se le **permitió** reabrir, lo hizo sin el programa cuestionado. Tres periodistas de la televisión francesa también fueron **detenidos** e interrogados cuando llegaron para cubrir las elecciones.

Antes de la elección, una protesta de la oposición **fue dispersada** con gases lacrimógenos y golpizas; varios periodistas fueron atacados físicamente. La protesta había sido previamente prohibida por el gobernador de Bamako. Después de la votación, las denuncias de fraude electoral de la oposición provocaron protestas, incluida una que **reunió** a varios miles de personas en Bamako en agosto y que primero había sido prohibida aunque luego se le permitió continuar. También se **prohibió** otra protesta de la oposición en vísperas de la ceremonia de inauguración en septiembre; cuando desafió la prohibición y siguió adelante, se produjeron violentos enfrentamientos y se emplearon gases lacrimógenos. Otra protesta de la oposición fue **prohibida** y dispersada en noviembre, y una nueva protesta fue prohibida en diciembre. Todo parece indicar que el malestar no cederá.

## SENEGAL: PREOCUPACIÓN ANTE LAS ELECCIONES DE 2019

Con una elección presidencial celebrada en febrero, 2018 fue testigo de varias protestas en defensa de las libertades democráticas en **Senegal**, incluidas algunas organizadas por la oposición. Las relaciones entre los partidos de gobierno y oposición han sido tensas luego de las **irregularidades** reportadas en las elecciones legislativas de 2017, cuando muchas personas se quejaron de que se les había impedido votar porque no habían recibido sus documentos de identidad biométricos. Otros temas importantes de disputa fueron la **exclusión** de las candidaturas de algunos líderes clave

de la oposición de cara a las elecciones de 2019, a causa de condenas por corrupción que muchos **cuestionaron** como políticamente motivadas, los cambios en el código electoral que aumentaron el número de firmas de apoyo que un candidato presidencial debe reunir, y el hecho de que las elecciones fueran organizadas por el Ministerio del Interior y no por un organismo independiente.

En febrero, más de mil personas **protestaron** en la capital, Dakar, por los problemas con la emisión de documentos de identidad. En abril, otra **protesta** de la oposición fue prohibida en Dakar. Cuando la gente protestó de todos modos, se desplegó una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, que usó gases lacrimógenos contra la multitud; varios manifestantes fueron detenidos, incluidos líderes de la oposición y miembros del movimiento social *Y'en a marre* ('estoy harto'). Este grupo había desempeñado un **rol destacado** a la hora de instar a la ciudadanía a derrotar al presidente Abdoulaye Wade en 2012, cuando este se postuló para un tercer mandato en abierto desafío a la Constitución. También hubo protestas en julio, agosto y septiembre, cuando nuevamente se usaron gases lacrimógenos y varios líderes de la oposición fueron **arrestados**.

En Senegal las fuerzas de seguridad tienen un largo historial de uso de violencia para reprimir protestas: en mayo, una protesta estudiantil fue recibida con munición real y el estudiante **Mouhamadou Fallou Sène** fue asesinado. En enero se utilizaron gases lacrimógenos contra otra **protesta** estudiantil, y en febrero otra protesta de estudiantes terminó en violentos enfrentamientos. El año también fue testigo de **ataques** contra periodistas que daban cobertura a políticos de la oposición. Las OSC fueron atacadas: en noviembre, el gobierno **retiró** la licencia para operar a Lead Afrique Francophone, una OSC que, entre otras cosas, daba financiamiento al movimiento *Y'en a marre*. Varias organizaciones de la sociedad civil **condenaron** la medida.

En el momento de redactar este informe se **anunciaba** que el presidente en funciones, Macky Sall, había obtenido un segundo mandato. En lo sucesivo

deberá responder a las expectativas de la sociedad civil de contrarrestar la polarización y respetar los derechos fundamentales que tanto sufrieron durante el período conducente a su victoria.

## ESTADOS UNIDOS: LA SOCIEDAD CIVIL DESAFÍA LA EXCLUSIÓN DE VOTANTES

Aparentemente, los estados democráticos no son inmunes a la tentación de impedir que determinadas personas desempeñen el papel que les toca en las elecciones. En los **Estados Unidos**, el tema de la supresión de votantes ocupó un sitio central en la agenda en vísperas de las elecciones de renovación legislativa de noviembre, en la medida en que varios gobiernos estatales y locales, en su mayoría en manos republicanas, tomaron medidas para impedir que votantes elegibles ejercieran su derecho de voto.

Las tácticas contemporáneas de supresión de votantes son el equivalente moderno de los **impuestos electorales** y las **pruebas de alfabetismo** que se utilizaban en los estados del sur durante la infame era de Jim Crow, y apuntan a la exclusión de las mismas poblaciones. Su introducción en la era moderna subraya la degradación de las prácticas democráticas, en la medida en que las elecciones van dejando de ser una competencia por los votos de los ciudadanos y se convierten, cada vez más, en una disputa sobre quién tiene derecho a votar y, por consiguiente, quién es o no es considerado ciudadano. Las reglas de votación son escritas con una clara **intención partidista**, como se observa en Texas, donde las licencias de posesión de armas de fuego son consideradas identificaciones aptas para ejercer el voto, pero las identificaciones de estudiante universitario no lo son. Asimismo, varios estados imponen obstáculos inusuales para que los estudiantes universitarios procedentes de otros estados no puedan emitir sus votos, y varios criminalizan prácticas usuales de promoción del voto: en Arizona, por ejemplo, ha pasado a ser un delito recoger boletas de votación en ausencia para transportarlas a un sitio de votación.

Otras limitaciones, como la introducción de restricciones sobre la emisión de votos anticipados o en ausencia, tienden a afectar a ciudadanos de

bajos ingresos, que generalmente no tienen horarios de trabajo flexibles ni pueden tomarse un día libre entre semana para votar, un dato relevante dado que las elecciones se celebran los martes. Según los datos disponibles, los votantes negros votan anticipadamente en proporciones mucho mayores que los votantes blancos. Las restricciones sobre el voto anticipado también resultan en mayores tiempos de espera el día de las elecciones, lo cual nuevamente afecta de manera desproporcionada a quienes no pueden permitirse el lujo de perder un sueldo mientras permanecen en una fila durante horas.

En un país que encarcela a más personas que cualquier otro en todo el mundo, las leyes que privan de derechos a los delincuentes convictos son una poderosa herramienta de supresión del derecho de voto; entre las personas encarceladas, las afroamericanas y de bajos ingresos están representadas de manera desproporcionada. Sobre esta base a millones de ciudadanos les es negado el derecho de votar, y los procedimientos para recuperar el derecho de voto son engorrosos, allí donde los hay.

En los estados controlados por los republicanos también se multiplicaron las iniciativas para purgar las listas electorales de nombres supuestamente duplicados. No es sorprendente que los más eliminados fueran apellidos comunes entre personas negras e hispanas, muchas de las cuales vieron entonces negado su derecho al voto. Las purgas de votantes con datos de identificación personal no coincidentes también afectaron principalmente a distritos predominantemente negros e hispanos.

El impacto combinado de todas las tácticas de supresión de votantes fue reducir el apoyo recibido por las opciones más progresistas. **Karena Cronin y Ryan Spain**, de la **Fundación Andrew Goodman**, describen experiencias y tácticas recientes de supresión de votantes:

*La supresión de votantes no es un fenómeno nuevo en la política estadounidense. Lo que es nuevo, sin embargo, es el reciente resurgimiento de estos esfuerzos para desalentar o evitar que ciertos grupos ejerzan su derecho al voto.*



Crédito: Ethan Miller/Getty Images

*Legislaturas estatales de todo el país han aprobado una gran cantidad de leyes para restringir el voto. Estas leyes han afectado de manera sistemática, negativa y desproporcionada a tres grandes grupos de personas: jóvenes, minorías raciales y personas procedentes de los estratos socioeconómicos más bajos. Las personas que caen simultáneamente en las tres categorías son las que resienten los efectos de manera más aguda. Ya sea mediante el establecimiento de requisitos onerosos de identificación de votantes, la complicación de las políticas de voto en ausencia, la introducción de onerosas pruebas de residencia o el cierre de sitios de votación, estas legislaturas estatales partidistas han hecho un esfuerzo claro y continuo en aras de un objetivo: reducir el voto de aquellos ciudadanos que no pertenecen al mismo partido que ellos. Estas acciones van desde la introducción de requisitos de votación fáciles de observar, como los ya mencionados, hasta ejercicios de poder más sistémicos, como el trazado arbitrario de los distritos electorales.*

*Independientemente de la forma que adopten estas políticas y tácticas, el resultado es el mismo: las voces y los votos de ciertos grupos – específicamente los jóvenes, las minorías raciales y las personas de bajo nivel socioeconómico – no son plenamente contados en la democracia estadounidense, dejando al objetivo de la equidad política pendiente de realización.*

*Las elecciones presidenciales de 2016 también dejaron al descubierto la vulnerabilidad de las elecciones estadounidenses a la supresión de votantes por parte de actores externos. Varios informes documentaron la existencia de **campañas rusas** que aprovecharon las fallas raciales de los Estados Unidos y emplearon tácticas racializadas para desalentar el voto negro.*

Las medidas de supresión de votantes son parte de una estrategia para perpetuar el poder político predominante y, como tales, amenazan la

competencia genuina y la potencial alternancia en el poder, que debería ser el sello de una democracia genuina. Cuando se las introduce, estas medidas suelen ser presentadas como remedios contra el fraude, aunque según los **datos existe** poco fraude electoral. Si bien las **investigaciones** disponibles sugieren que estas tácticas tienden a tener un pequeño efecto, empujando la participación hacia abajo en solo unos pocos puntos porcentuales, en carreras ajustadas y en las cuales es mucho lo que está en juego, estos márgenes podrían resultar fundamentales.

El panorama de las elecciones de noviembre fue mixto. Un candidato que, durante su mandato al frente de la agencia de control electoral de Georgia, llevó a cabo **purgas masivas de votantes** que apuntaban específicamente a los **votantes negros**, ganó la gobernación de Georgia, derrotando por poco a una candidata que, de haber ganado, habría sido la primera gobernadora negra de los Estados Unidos. Como resultado del cierre de cientos de centros de votación y los requisitos impuestos por una ley que exigía “coincidencia exacta” en la documentación, el día de las elecciones en Georgia estuvo signado por **errores técnicos y largas filas**, que obligaron a los centros de votación a permanecer abiertos hasta altas horas de la noche. Dado que el ganador fue proclamado con una ventaja de tan solo tres puntos, las tácticas de supresión de votantes pueden haber marcado la diferencia.

En Kansas, en cambio, el gobernador en funciones fue derrotado pese a la introducción de medidas que hicieron que el estado fuera clasificado como uno de los peores para los derechos de los votantes. Según la American Civil Liberties Union, Kansas perdió más de 100 centros de votación en los últimos años, y en las elecciones de noviembre abundaron las quejas sobre tácticas de supresión del voto dirigidas contra los hispanos. En el **condado de Wyandotte**, por ejemplo, un sitio de votación en un vecindario con una gran población hispana fue ubicado en el mismo edificio que una estación de policía, lo cual probablemente incomodaría a algunos potenciales votantes; mientras que en Dodge City, un distrito mayoritariamente hispano, el único centro de votación fue trasladado a un lugar remoto, fuera de los límites de la ciudad y alejado de las rutas de autobuses. Al igual que

en otros lugares, los grupos de la sociedad civil **se movilaron** para hacer frente a las restricciones, en este caso mediante el alquiler de furgonetas, la organización de voluntarios para conducir a las personas a las urnas y la puesta en funcionamiento de una línea directa para solicitar transporte.

En Dakota del Norte, donde el senador demócrata en ejercicio había sido elegido con fuerte apoyo de votantes de ascendencia indígena, las autoridades republicanas establecieron una nueva regla de identificación que exigió a los votantes la presentación de una prueba de domicilio residencial – un claro intento de suprimir el voto de **miles de estadounidenses de los pueblos nativos** que viven en reservas. Los grupos y activistas por el derecho al voto de los pueblos nativos se movilaron para generar direcciones de calles de modo que miles de residentes de las reservas pudieran votar. Si bien el candidato republicano ganó la votación por un amplio margen, lo cual indicó que la supresión de votantes no pudo haber hecho la diferencia, la iniciativa no dejó de ser importante para las personas a quienes les estaban siendo negados sus derechos.

Como lo sugieren estos ejemplos, la sociedad civil trabajó para poner en evidencia las frecuentemente turbias tácticas de supresión utilizadas e instalar el problema como tema de debate urgente, a la vez que se organizó en el terreno para llevar a los votantes a las urnas. Karna y Ryan describen la respuesta de la sociedad civil:

*Si bien en conjunto estos datos presentan una imagen sombría para las perspectivas de una democracia que funcione, la sociedad civil se está movilizand o en formas poderosas e innovadoras para reclamar los derechos de voto y tener un gobierno más representativo. Este movimiento está siendo liderado por veteranas organizaciones de derechos civiles, así como por organizaciones jóvenes y dinámicas fundadas en los últimos años en respuesta a la tendencia en ascenso a la supresión de votantes. Si bien el enfoque y la metodología de estas organizaciones van desde el litigio hasta la activación de jóvenes entre pares y la incidencia en políticas públicas, todos estos actores*



*están comprometidos con la promoción de una democracia más inclusiva en la cual los estadounidenses tengan poder y el derecho de votar. Y hay señales prometedoras de que estos esfuerzos, y los de otros ciudadanos preocupados y comprometidos en todo el país, están dando sus frutos.*

*Durante las elecciones intermedias del año pasado, los votantes de Florida aprobaron una iniciativa que restableció los derechos de voto de 1,4 millones de floridanos con condenas por delitos pasados. Desmond Meade, arquitecto del exitoso movimiento, comenzó a **abogar** por la restauración de los derechos de las personas condenadas en 2010, cuando pocas organizaciones, incluidas las progresistas, pensaban que este cambio era posible. En enero de 2019, el estado de Nueva York aprobó reformas históricas al sistema de votación, que incluyeron mecanismos de votación anticipada, consolidación primaria y el pre-empadronamiento de jóvenes de 16 y 17 años, propulsando al anticuado sistema de votación de Nueva York hacia el siglo XXI. Estos logros se están produciendo tras años de trabajo de incidencia por parte de una multitud de actores de la sociedad civil, y bajo el más reciente liderazgo de la **coalición Let NY Vote** (Dejen votar a Nueva York), una coalición no partidista de grupos y ciudadanos de todo el estado que luchan para que el ejercicio del voto sea más accesible y equitativo para todos los neoyorkinos en condiciones de votar.*

*En 2018, la Fundación Andrew Goodman presentó junto con la **Liga de Mujeres Votantes de Florida** una **demanda** para impedir que el Secretario de Estado de Florida prohibiera que los campus universitarios y las universidades fueran utilizados como sitios de votación anticipada. Gracias a los esfuerzos de muchos grupos de derechos civiles y la movilización de los estudiantes, la victoria resultó en el establecimiento de **12 sitios de votación anticipada** en colegios universitarios y universidades de la Florida, lo cual facilitó el acceso a las urnas a 60.000 floridanos.*

*Si bien aún queda mucho por hacer para garantizar que no se suprima el voto de nadie, está claro que existe un compromiso renovado de la sociedad civil a nivel local, estadual y nacional para contrarrestar la supresión de votantes y habilitar a todos los estadounidenses elegibles para votar.*

## TAILANDIA: ESCASAS PROBABILIDADES DE UNA ELECCIÓN LIBRE Y JUSTA

En **Tailandia** la sociedad civil ha instado repetidamente a la convocatoria de elecciones libres y competitivas. En septiembre finalmente se aprobaron las regulaciones necesarias para la celebración de elecciones, después de cuatro años de **gobierno militar**. La elección, que la junta militar de Tailandia había prometido originalmente para noviembre, quedó programada para febrero de 2019; en enero de 2019, sin embargo, **fue nuevamente postergada** para marzo de 2019. Pero las actitudes de la junta no parecían sugerir que estuviera lista para avanzar en dirección de una democracia abierta. En mayo, tres políticos fueron **acusados** de sedición tras celebrar una conferencia de prensa en la que criticaron a la junta. Ese mismo mes, una protesta prodemocracia fue **reprimida**. Poco después de la protesta, uno de los involucrados – **Rangsiman Rome**, del **Grupo Restauración Democrática** – relataba su experiencia:

*El 22 de mayo, en el cuarto aniversario del golpe militar, cientos de manifestantes salieron a las calles para exigir el llamado a elecciones. Sesenta y dos manifestantes, incluido yo mismo, fuimos acusados de violar las órdenes de la junta. Cuarenta y uno fueron acusados de delitos que conllevan penas máximas de tres años de prisión. Pero las 21 personas restantes, incluyéndome a mí, fuimos acusadas de sedición en virtud del Artículo 116 del Código Penal y enfrentamos seis cargos adicionales en virtud de la Ley de la Asamblea Pública. Por todos estos cargos, siete años de prisión es la pena máxima que pueden imponer los tribunales.*

*Por mi participación en el movimiento prodemocracia, fui detenido*

*en un campamento militar y enviado a prisión. Actualmente estoy siendo procesado por tribunales tanto militares como civiles.*

Ocho de los arrestados, incluido Rangsiman, fueron formalmente **acusados** de sedición en noviembre. Estas experiencias, continúa Rangsiman, son exponentes tristemente típicos del trato que muchos participantes del movimiento por la democracia en Tailandia reciben de manos de los militares:

*El golpe de 2014 puso fin a la democracia en Tailandia. Durante estos años de gobierno militar, las violaciones de los derechos humanos y las libertades civiles han sido generalizadas y sistemáticas. Las libertades de expresión y reunión están severamente reprimidas, y su ejercicio ha resultado en arrestos, procesamientos y castigos arbitrarios. Muchos activistas prodemocracia han sido acusados en varias causas penales por sus acciones de protesta y expresiones de disenso.*

Según un **informe** publicado en mayo por Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, los militares citaron a 1138 personas para obligarla a cambiar su actitud hacia el gobierno militar. Al menos 264 eventos organizados por ciudadanos fueron cancelados por los militares y 2408 civiles fueron procesados en tribunales militares. Al menos 18 personas fueron torturadas por personal militar mientras permanecían bajo arresto.

La situación para la sociedad civil es terrible. Las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales continúan ocurriendo a diario. Por ejemplo, las autoridades **procesaron** a los líderes de la marcha “Nosotros caminamos” por organizar una protesta política; acosaron a activistas estudiantiles enviando policías y oficiales militares para que los siguieran a sus universidades y hogares; y detuvieron a activistas durante un evento anticorrupción que apuntaba contra el viceprimer ministro, el general Prawit Wongsuwan.



En mayo, en el cuarto aniversario del golpe de estado de 2014, la ciudadanía tailandesa se manifestó en Bangkok para exigir la celebración de elecciones generales.

Crédito: Kyodo News via Getty Images

“

LA PRESIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL HA TENIDO ALGÚN IMPACTO; EN SU AUSENCIA LA JUNTA HABRÍA INCUMPLIDO SU PROMESA DE CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN.

”

*Miembros del movimiento Gente que Quiere Elecciones, que ha rechazado los intentos de la junta de prolongar su poder y posponer las elecciones, han sido repetidamente acosados por funcionarios del gobierno. Muchos han sido procesados como resultado de órdenes emitidas por la junta. Entre las principales disposiciones legales utilizadas contra los manifestantes se han contado el artículo 12 de la orden 3/2015, que tipifica como delito las reuniones políticas de cinco o más personas, un delito punible con hasta seis meses de prisión;<sup>3456789</sup> y el artículo 116 del Código Penal sobre sedición. Hasta el momento, 136 personas han sido procesadas bajo estas leyes.*

*Mientras que los ciudadanos tailandeses son castigados por criticar al estado, el gobierno liderado por la junta está promoviendo libremente un conjunto de valores abiertamente pro-autoritarios y antidemocráticos conocidos como “los 12 valores tailandeses”, dirigidos a los escolares y aplicados en el sistema de educación formal. En estas condiciones, la democracia parece ahora más inalcanzable que nunca.*

Aunque la junta aseguró que había **relajado** su prohibición de las actividades políticas, la **represión** contra los activistas prodemocracia continuó a lo largo de 2018. En agosto, el activista por las elecciones **Ekachai Hongkangwan** fue atacado y golpeado. Ese mismo mes, tres activistas en contra del golpe **recibieron** una condena de cuatro meses de cárcel en suspenso por la protesta durante la cual habían roto boletas durante el referéndum de 2016, convocado para ratificar la nueva constitución de la junta militar. En septiembre, seis activistas a favor de las elecciones, que habían tomado parte en una protesta en reclamo de una elección anticipada, fueron **acusados** de sedición. También en septiembre **se acusó** a Thanathorn Juangroongruangkit, fundador de un nuevo partido político, de difundir información falsa luego que publicara en Facebook un discurso en el cual acusaba a la junta de reclutar apoyo para los partidos pro militares. La junta parecía estar cada vez más paranoica: en septiembre, por ejemplo, **acusó** a cuatro personas de sedición por imprimir camisetas que aparentemente promovían el republicanismo, y en octubre anunció que estaba **investigando** al grupo Rap Contra la Dictadura por publicar una canción crítica de la junta. En tales condiciones, ninguna elección podría ser libre o justa.

A pesar de este difícil clima para el activismo, Rangsiman considera que la presión de la sociedad civil ha tenido algún impacto, y que en su ausencia la junta habría incumplido su promesa de celebrar cualquier tipo de elección. Además, Rangsiman destaca el trabajo que realiza su organización para contrarrestar las medidas de lavado de cerebro promovidas por la junta y construir valores democráticos desde abajo, así como el apoyo que necesitarían recibir desde el exterior:



*El Grupo Restauración Democrática es un grupo activista que busca restaurar la fe en la democracia en Tailandia a través de la normalización cultural, para que los tailandeses perciban a la democracia como parte de la cultura y la identidad tailandesas. Con el fin de devolver la democracia a Tailandia, buscamos inculcar en los tailandeses el valor de la representación y criar a una generación joven que crea en la democracia, lo cual es fundamental para que una sociedad democrática funcione. Queremos construir una organización política civil que funcione en paralelo con el sistema parlamentario y que llene los vacíos de la democracia representativa.*

*Muchos países están tratando de mantener buenas relaciones con el gobierno militar. Por ejemplo, la junta fue invitada por los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos a visitar sus países para discutir acuerdos comerciales. Esto no hace más que fortalecer al gobierno militar. El gobierno aprovechó esta oportunidad para difundir propaganda y obtener más apoyo de la comunidad internacional. Los gobiernos democráticos y las OSC internacionales que promueven la democracia deben emprender acciones de solidaridad para aislar al gobierno militar tailandés. Deben presionar a todo gobierno que desee desarrollar una relación con el gobierno militar, porque el apoyo que brindan a nuestro gobierno autoritario no ayuda a mejorar nuestra situación.*

## EN SÍNTESIS: OTRAS ELECCIONES DE 2018

Como lo indican los ejemplos anteriores, en muchos países el espacio cívico sufrió restricciones, y estas aumentaron en torno de las elecciones. Los casos presentados no fueron los únicos. En marzo, dos días antes de la elección para el Senado en **Costa de Marfil**, una protesta de la oposición en la capital económica del país, Abidjan, exigió la reforma de la Comisión Electoral Independiente. Los manifestantes fueron **dispersados** con gases lacrimógenos y 18 personas fueron detenidas, entre ellas el portavoz de la coalición de oposición que había organizado las protestas, quien

fue arrestado mientras hablaba con periodistas. Durante la protesta, el periodista Landry Beugré fue arrestado mientras hacía una entrevista y la bloguera Coulibaly Daoud fue agredida y arrestada, mientras que otros periodistas fueron dispersados con gases lacrimógenos y se les impidió hacer su trabajo. El mes siguiente, los detenidos fueron **sentenciados** a 12 días de prisión y cada uno de ellos recibió una multa de 50.000 francos CFA, unos 100 dólares estadounidenses. También perdieron su derecho de voto por cinco años. Al tiempo que los partidos de la oposición **boicotearon** las elecciones, el partido gobernante se quedó con la mayor parte de los escaños.

También en **Djibouti** hubo un boicot electoral. En la elección parlamentaria de febrero, la coalición gobernante, Unión para la Mayoría Presidencial, **obtuvo** el 90% de los escaños. La elección fue boicoteada por la oposición, que afirmó que el sistema político estaba fuertemente sesgado a favor de los gobernantes y que la elección no podría ser libre o justa. La ausencia de una comisión electoral independiente constituyó una preocupación central. Las OSC formularon críticas **similares** al proceso electoral antes de la elección. El presidente Ismaïl Omar Guelleh es ahora uno de los líderes más longevos de África, ya que está en el poder desde 1999. La ubicación estratégica de Djibouti en el Cuerno de África significa que recibe pocas presiones internacionales para democratizarse.

Incluso quienes actúan después de una elección pueden sufrir restricciones. En enero, el líder de la oposición de **Kenia**, Raila Odinga, que continúa cuestionando la gestión de las **elecciones de 2017**, fue juramentado por sus partidarios como “presidente del pueblo” mediante una ceremonia de inauguración simulada. El gobierno reaccionó con furia. El mismo día, el Movimiento de Resistencia Nacional de Raila Odinga fue **designado** como una organización criminal. Esto habilitó una nueva oleada de represión, que alcanzó incluso a los medios de comunicación que cubrieron la ceremonia: durante el evento se suspendió la emisión de tres emisoras de televisión y varias radios locales fueron **retiradas del aire**. A las estaciones de televisión solo se les permitió volver a emitir un mes más tarde. Al menos



dos miembros de la oposición que habían asistido a la ceremonia fueron arrestados, y uno de ellos, de doble nacionalidad, fue **deportado** a Canadá. Otro integrante de la oposición **informó** que varias personas habían abierto fuego en su casa. A varios otros les fueron confiscados los pasaportes.

En abril, cuando Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente, **Cuba** ingresó en la era post-Castro. Sin embargo, el mes anterior las elecciones para la Asamblea Nacional habían sido precedidas de un rebrote de **represión**. En febrero y marzo, alrededor de 70 miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados, y se informó que habían recibido malos tratos bajo custodia. Varios observadores electorales del grupo Cuba Decide también fueron arrestados, detenidos y se les impidió hacer su trabajo; asimismo, se impidió a seis activistas asistir a un taller electoral en Argentina, en una de varias **prohibiciones de viaje impuestas** por el estado en 2018.

En **El Salvador** se **documentaron** más de 25 ataques contra la libertad de expresión en el contexto de las elecciones legislativas y municipales de marzo, la más común de las cuales consistió en impedir la presencia de periodistas en el recuento de votos.

En **Fiji**, las elecciones de noviembre – que mantuvieron en el poder al partido gobernante – fueron precedidas de procesos alarmantes. En abril, dos políticos de la oposición fueron **encarcelados** con sentencias de por lo menos 18 meses por sedición; habían sido declarados culpables de pintar eslóganes antigubernamentales en las paredes, una acusación que continuaron negando. Adicionalmente, se aprobó una ley sobre seguridad en internet con amplias provisiones que otorgaron al estado una gran discrecionalidad para vigilar el discurso en línea, un hecho preocupante en un país donde las **libertades de los medios de comunicación** ya están muy limitadas. Por último, en el período previo a la elección varios políticos hicieron comentarios **racionalmente motivados**. En Fiji, como en todos los países incluidos en este informe, la sociedad civil continuará luchando por la vigencia de las libertades democráticas.